



II LEGISLATURA

## ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

### C.C. MINISTROS INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Pino Suárez 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06065, Ciudad de México.

OFICINA DE  
CERTIFICACIÓN JUDICIAL  
Y NOTIFICACIÓN

2022 JUN 30 AM 10:14

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Los que suscriben Diputadas y Diputados **CHRISTIAN VON ROERICH DE LA ISLA, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, AMÉRICA RANGEL LORENZANA, RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, RICARDO RUBIO TORRES, FEDERICO DÖRING CASAR, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, ROYFID TORRES GONZÁLEZ, GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, JORGE GAVIÑO AMBRIZ, VICTOR HUGO LOBO ROMÁN, POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA Y TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ,** todos integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, personalidad que acreditamos con la copia certificada del acta de la sesión constitutiva de instalación y toma de protesta de los integrantes ante el pleno, celebrada el primero de septiembre del año dos mil veintiuno (que se anexa a la presente como **"ANEXO 4"**, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y valores, ubicado en Plaza de la Constitución número 7, tercer piso, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, designando como representantes comunes a los Diputados **CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, RICARDO RUBIO TORRES, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ y ANIBAL ALEXANDER CAÑEZ MORALES,** en términos del

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

artículo 62 párrafo segundo de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como delegados a los Licenciados en Derecho Jonathan Salas Olivares, Alejandro Martínez Álvarez, Kair Arafat Vela Meza, Nalleli Itzel Menendez Cabrera, Guillermo Sacramento Ordaz Sánchez y Ricardo Zárate León, así como a los C. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] señalando además los correos electrónicos [REDACTED] y [REDACTED], ante

ustedes, con el debido respeto, comparecemos para exponer:



II LEGISLATURA

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º, 14, 16, 105 fracción II inciso d), y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 59, 60, 61 y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 10, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, venimos en tiempo y forma a promover **DEMANDA DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD** en contra del **DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL**

**ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109; TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 2 de junio de 2022, en tanto que resulta violatorio de los artículos 1º, 4, 14, 16, 41 fracción V apartados A y C, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los derechos humanos consagrados en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

A efecto de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala:

- I. **NOMBRE Y FIRMA DE LOS PROMOVENTES.** Ese requisito ha quedado colmado en el proemio del presente escrito.
- II. **LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO QUE EMITIERON Y PROMULGARON LA NORMA GENERAL IMPUGNADA:**
  - a. **ÓRGANO LEGISLATIVO:** CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, CON DOMICILIO EN DONCELES ESQ. ALLENDE S/N, COL. CENTRO HISTÓRICO, CUDAD DE MÉXICO.
  - b. **ÓRGANO EJECUTIVO:** TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN AVENIDA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚMERO 2, COLONIA CENTRO (ÁREA 1), C.P. 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
- III. **LA NORMA GENERAL CUYA VALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE PUBLICÓ:**

Se reclama la invalidez del **DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL**



II LEGISLATURA

ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE



II LEGISLATURA

MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 2 de junio de 2022, que se agrega como ANEXO 1, y que en lo conducente señala:

(...)

4

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2 de junio de 2022

#### JEFATURA DE GOBIERNO

DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.

Que el H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:

#### DECRETO

#### CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

#### II LEGISLATURA

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:

ÚNICO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO



II LEGISLATURA

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 363; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

...

Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les son de observancia obligatoria las disposiciones relativas de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; por lo que su presupuesta, ejercicio del gasto y manejo administrativo deberá sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas.

Artículo 36. ...

...

Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, de acuerdo con lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, incorporando como principios rectores la racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público; por lo que sus fines y acciones se orientan a:

I. a XI. ...

...

...

a) a s) ...

...

...

a) a f) ...

...

a) a f) ...

Artículo 37. El Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura misma que podrá ser modificada de conformidad con las necesidades del propio Instituto y/o atribuciones de delegación que otorgue el Instituto Nacional:

I. a III. ...

IV. Órgano con Autonomía Técnica y de Gestión. El Órgano de Control Interno adscrito al Sistema Local Anticorrupción y la Unidad temporal dependiente de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización para atender, en su caso, la delegación de fiscalización a que se refiere el artículo 350 del presente Código;

V. a VII. ...

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:

I. a X. ...



II LEGISLATURA

XI. Nombrar, a propuesta del Consejo Presidente, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Elecciones:

a) y b) ...

c) Se deroga.

XII. a LII.

Artículo 59. El Consejo General cuenta con las Comisiones Permanentes de:

I. Asociaciones Políticas y Fiscalización;

II. y III. ...

IV. Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana;

V. Quejas;

VI. ...

VII. Se deroga.

VIII. ...

IX. Se deroga.

Las Comisiones, para un mejor desempeño, podrán contar con el personal técnico que autorice el Consejo General, sujetándose a los principios de racionalidad, austeridad, transparencia y eficacia.

Artículo 60. Son atribuciones de la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización:

I. y II. ...

III. Se deroga.

IV. a IX. ...

X. Se deroga.

X Bis. Supervisar los procesos institucionales que favorecen la participación y representación política de las mujeres;

XI. ...

En materia de fiscalización cuenta con las siguientes atribuciones:

a) Poner a consideración del Consejo General los proyectos de normativa que le propenga la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización respecto del registro de ingresos y egresos de los sujetos obligados, la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos, los informes que éstos deben presentar ante el Instituto Electoral, las reglas para su revisión y dictamen, así como el procedimiento relativo a la liquidación de su patrimonio y en general aquella que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos;

b) Supervisar los resultados finales del Programa Operativo Anual instrumentado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización;

c) Supervisar que los recursos del financiamiento que ejerzan los sujetos obligados se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en este Código;

d) Supervisar los procesos de revisión de los informes que los sujetos obligados presenten sobre el origen y destino de sus recursos, según corresponda;

e) Supervisar los resultados finales de auditorías especiales de los sujetos obligados, en los términos de los acuerdos del Consejo General;

f) Aprobar y poner a consideración del Consejo General los proyectos de Dictamen y Resolución que formule la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, respecto de la revisión de los informes presentados por los sujetos obligados siguientes:

i. Agrupaciones Políticas Locales sobre el origen y destino de sus recursos anuales;

ii. Organizaciones de Ciudadanos, respecto de los recursos empleados en las actividades tendientes a obtener el registro legal como Partido Político local;

iii. Organizaciones de observadores electorales, respecto de los recursos empleados únicamente en las actividades de observación electoral.

Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión de Quejas:

I. Instruir la investigación de presuntos actos contrarios a la ley en que hayan incurrido las Asociaciones Políticas o Candidatos sin partido, siempre que otro órgano del Instituto Electoral no tenga competencia específica sobre el asunto, así como validar y, en su caso, presentar al Consejo General el dictamen y/o proyecto de resolución de quejas e imposición de sanciones administrativas a las asociaciones políticas o Candidatos sin partido, formulados por la



## II LEGISLATURA

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización o, en su caso, instruir la remisión del dictamen al Tribunal Electoral;

II. Conocer de los procedimientos administrativos sancionadores;

III. En caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, si así se determina, conocer de las quejas y denuncias a fin de dictar las medidas conducentes en los términos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México; y

V. Las demás que le confiera este Código y que resulten necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 61. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación:

I a XI...

XII. Emitir opinión respecto de los materiales y documentación relacionados con la capacitación de los mecanismos de participación ciudadana y procesos electivos;

XIII. Supervisar el cumplimiento de las actividades de capacitación durante los procesos electorales, cuando se le delegue esta función al Instituto Electoral, en términos de la Ley General, la normativa que emita el Instituto Nacional y los acuerdos que apruebe el Consejo General del Instituto Electoral; y

XIV...

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana.

I a III...

IV. Aprobar el programa editorial institucional que sea propuesto por la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana;

V a XII...

En materia de género, le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Opinar sobre las publicaciones institucionales en materia de género y derechos humanos;

b) Supervisar la implementación de los mecanismos que favorezcan una cultura institucional incluyente, no discriminatoria y no sexista en el Instituto Electoral;

c) Proponer al Consejo General, los manuales, lineamientos y reglamentos necesarios para la promoción de los derechos humanos e igualdad de género;

d) Aprobar el Programa de Derechos Humanos e Igualdad de Género que le proponga la Secretaría Ejecutiva, y conocer de los informes que al respecto ponga a su consideración para, en su caso, proponer las medidas correctivas;

e) Revisar los documentos de planeación institucional estratégica y operativa y proponer la transversalidad de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en su contenido;

f) Revisar la implementación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, en las tareas institucionales;

g) Supervisar las acciones, competencia del Instituto, relativas a la difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional;

h) Supervisar los procesos institucionales que favorecen la participación y representación política de las mujeres;

i) Conocer y revisar los temas referentes a Violencia Política de Género;

j) Las demás que se señalen en este Código y en la normativa aplicable.

...

Artículo 64. En caso de que el Instituto Nacional delegue la atribución de fiscalización al Instituto Electoral, dicha atribución será ejercida de conformidad con el artículo 350 del presente Código y en los términos de las Leyes Generales, los acuerdos que al efecto emita el Consejo General del Instituto Electoral y demás normatividad aplicable.

Artículo 65. Se deroga.

Artículo 67. Son atribuciones de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, las siguientes:

I a III...

IV. Supervisar las actividades encomendadas al Órgano de Enlace para el ejercicio de las facultades en materia de los procesos del Servicio Profesional Electoral Nacional, conforme a lo previsto por el Estatuto del Servicio, y en los lineamientos en la materia;

IV Bis. Supervisar las acciones, competencia del Instituto, relativas a la difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral.





II LEGISLATURA

V. ...

Artículo 68. Se deroga.

Artículo 83. Son atribuciones de la Junta Administrativa:

I. ...

II. ...

a) a m) ...

n) Se deroga.

ñ) De inducción para el Personal de la Rama Administrativa de nuevo ingreso;

o) Equidad e igualdad sustantiva;

p) Gestión de calidad en los procesos electorales y de participación ciudadana.

q) Derechos Humanos.

III. a XVI. ...

XVII. Promover, a través de la Secretaría Administrativa, la realización de acciones académicas, a fin de elevar el nivel profesional de los servidores públicos de la rama administrativa;

XVIII a XXIX. ...

Artículo 84. La Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y las Direcciones Distritales, según corresponda.

Se deroga.

Artículo 86. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva:

I. a XVI. ...

XVII. Dar seguimiento, a través de la Secretaría Administrativa, al "Sistema de Gestión de Calidad Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México".

XVIII y XIX. ...

XIX *Bis*. Vincular al Instituto con los organismos públicos y privados locales, nacionales y, en su caso, internacionales, para el mejor desarrollo de los trabajos institucionales;

XIX *Ter*. Celebrar las negociaciones que sean necesarias, a efecto de sentar las bases para la suscripción de los convenios de apoyo y colaboración que suscriba el Instituto Electoral;

XIX *Quáter*. Establecer las bases institucionales de coordinación de actividades y vinculación con el Instituto Nacional;

XX. ...

Artículo 88. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Administrativa:

I a XXIV. ...

XXIV *Bis*. Realizar las acciones conducentes relativas al Sistema de Gestión de Calidad Electoral del Instituto;

XXIV *Ter*. Desarrollar las actividades del área a su cargo en apego al Sistema de Gestión de Calidad Electoral, así como elaborar y mantener actualizada la documentación requerida por dicho Sistema de Gestión de Calidad;

XXIV *Quáter*. Supervisar las acciones competencia del Instituto relativas a la difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y género, dirigidas al personal de la Rama Administrativa;

XXV. ...

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana.

I a XXII. ...

XXII. *Bis*. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el cumplimiento de las obligaciones locales, nacionales e internacionales que el Instituto Electoral tenga en materia de derechos humanos e igualdad de género, así como la implementación de estrategias que aseguren su observancia;

XXII *Ter*. Conducir las acciones para la incorporación de la perspectiva de género, derechos humanos y el enfoque de igualdad sustantiva en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, normas, acciones y políticas públicas de todas las unidades administrativas del Instituto Electoral, de manera transversal, así como darle seguimiento y verificar su cumplimiento;



## II LEGISLATURA

**XXII Quáter.** Diseñar y coordinar la realización en el Instituto Electoral, de programas, actividades, foros, eventos y estudios de investigación; para promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito político electoral;

**XXII Quíntes.** Coordinar la política de Igualdad Laboral y no Discriminación. Asimismo, generar informes periódicos relativos a dicha política, además de los que guarden relación con materia de violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual y violencia política que se presentan en el Instituto Electoral. Estos últimos, a través de la presentación de información de carácter estadístico durante la sustanciación de los respectivos procedimientos y de naturaleza cualitativa, a la conclusión de los mismos, de conformidad con la normativa interna y/o lineamientos correspondientes;

**XXII Sexes.** Coadyuvar y asesorar a las demás áreas del Instituto Electoral en materia de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión; y

**XXIII.** ...

Los Programas y materiales a que se refieren las fracciones anteriores deberán estar orientados a garantizar la plena inclusión y el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, así como mecanismos de construcción de ésta.

Artículo 95. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización:

I a XII. ...

**XIII.** Coadyuvar con la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización en las tareas relativas a la organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos locales, cuando éstos lo soliciten;

**XIV.** Determinar y elaborar el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se hace la asignación de diputados por el principio de representación proporcional del proceso electoral que corresponda;

**XV.** Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización, los anteproyectos de Acuerdo del Consejo General por el que se determinan los topes de precampaña y campaña de los procesos electorales que correspondan;

**XV Bis.** Fiscalizar el origen y destino de los recursos de:

a) Las Agrupaciones Políticas Locales y de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como Partidos Políticos locales, utilizados para el desarrollo de actividades tendientes a la obtención del registro legal; y

b) Las organizaciones de observación electoral respecto del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con su función.

**XV Ter.** Fiscalizar, en su caso, el origen y destino de los recursos de los Partidos Políticos, aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas, observando las disposiciones que para el efecto emita el Instituto Nacional;

**XV Quáter.** Informar de manera periódica y detallada a la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización respecto del procedimiento de liquidación del patrimonio de los Partidos Políticos Locales y Agrupaciones Políticas Locales que hubieren perdido su registro;

**XV Quíntes.** Generar medidas preventivas, orientadas a favorecer el adecuado registro contable y presentación de informes de los Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas independientes y a promover entre ellas la cultura de la rendición de cuentas, en su vertiente de origen, monto y destino de los recursos que emplean;

**XV Sexes.** Establecer las acciones permanentes que aseguren una capacitación en aspectos contables y de rendición de cuentas a Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidatos independientes para fomentar la eficaz presentación de sus informes, así como el manejo y control de sus recursos;

**XV Sepses.** Sustanciar, junto con la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización, los procedimientos de Fiscalización en el supuesto de que el Instituto Nacional delegue dicha facultad;

**XV Octes.** Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para la sistematización y difusión de la información, para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y el control de los recursos públicos de los Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas independientes.

**XV Novies.** Promover mecanismos de coordinación con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, para instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la cultura político-electoral, libre de violencia política y contribuir a una democracia igualitaria e incluyente; y

**XVI.** ...

Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta con Unidades Técnicas que respectivamente tienen a su cargo las tareas de:

I. Comunicación Social y Difusión

II. Servicios Informáticos

III. Se deroga.



## II LEGISLATURA

### IV. Asuntos Jurídicos

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

Se deroga.

Artículo 102. Para el desempeño de sus atribuciones, la Contraloría Interna del Instituto Electoral contará con independencia respecto al Instituto Electoral, por lo que estará adscrita al Sistema Local Anticorrupción. Por independencia deberá entenderse la libertad plena de la Contraloría Interna, para establecer la forma y modalidades de su organización interna, lo que significa que dicho órgano puede administrarse por sí mismo.

II. Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Para efectos administrativos y orgánicos, la Contraloría Interna estará adscrita al Consejo General.

Artículo 103. La Contraloría Interna para el desempeño de sus atribuciones, contará con independencia y su titularidad será ocupada de manera rotativa en los términos y condiciones que para el efecto se establezcan en la Ley del Sistema Local Anticorrupción. La Contraloría Interna que tiene a su cargo fiscalizar el manejo, custodia y empleo de los recursos del Instituto Electoral, e instruir los procedimientos administrativos y, en su caso, determinar las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de México.

Para el logro de sus objetivos la Contraloría Interna contará con las siguientes Subcontralorías:

a) Responsabilidades e Inconformidades, a quien compete el proceso de investigación de las quejas interpuestas por probables conductas de las personas servidoras públicas, así como la substanciación e imposición de sanciones una vez agotada la etapa de investigación; y

b) Auditoría, Control y Evaluación, a quien corresponde la función sustantiva de realizar las auditorías al ejercicio del gasto en el Instituto Electoral.

Artículo 107. En los casos en que el Instituto Nacional delegue al Instituto Electoral la atribución de fiscalización, éste la ejercerá a través de la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización quien se auxiliará de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, que tendrá a su cargo supervisar que los recursos del financiamiento público y privado que ejerzan las Asociaciones Políticas y Candidatos sin partido, se apliquen conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, este Código y demás normativa aplicable.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Artículo 108. Se deroga.

Artículo 109. Se deroga.

Artículo 121. ...

...

La designación y sustitución de los representantes de partido político, coalición o candidaturas sin partido, se comunicará por escrito al Consejero Presidente del Consejo que corresponda, para los efectos conducentes.

...

Artículo 124. ...

...

I y II. ...

III. En caso de que no se reúna esa mayoría, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los Consejeros Distritales y representantes de los partidos políticos y candidatos sin partido que asistan, entre los que deberá estar el Consejero Presidente Distrital o el Secretario del Consejo Distrital.





II LEGISLATURA

...  
I. a IV. ...

V. El plazo para que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización lleve a cabo la revisión de las firmas de apoyo que presente cada uno de los candidatos sin partido así como el plazo que tendrá la autoridad para emitir los dictámenes.

...  
Artículo 348. En los casos en que el Instituto Nacional delegue la facultad de fiscalización al Instituto Electoral, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y este Código. En dichos supuestos, el Instituto Electoral se sujetará a los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General del Instituto Nacional. En el ejercicio de dichas funciones el Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, deberá coordinarse con la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización, que será el conducto para superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

I. a III. ...

...  
a) y b) ...

Artículo 350. En los casos de delegación de la facultad de fiscalización, el Consejo General creará una Unidad temporal, la cual contará con autonomía técnica y de gestión para atender dicha delegación. El acuerdo de creación establecerá las reglas de operación de dicha Unidad.

Artículo 351. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, brindará a los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, la orientación y asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la fiscalización.

Artículo 352. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización, para la realización de diligencias que tengan por objeto superar las limitaciones en materia de secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando por la naturaleza de la información que se derive de la revisión de los informes de los Partidos y Agrupaciones Políticas así lo amerite.

Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá a las siguientes reglas:

I. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización deberá acordar la solicitud para la realización de diligencias a las autoridades electorales federales;

II. y III. ...

Quien presida el Instituto Electoral podrá firmar convenios de apoyo y colaboración con el Instituto Nacional para el intercambio de información en la fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos que no se encuentre comprendida en los incisos anteriores.

Artículo 353. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización tendrá atribuciones, para llevar a cabo los procedimientos de investigación conforme al reglamento que apruebe para tal efecto el Consejo General.

Para el ejercicio de sus atribuciones, las autoridades de la Ciudad de México, las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales estarán obligadas a rendir y a otorgar la documentación que esté en su poder y que les sea requerida por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización.

Artículo 383. ...

I. a II. ...

III. El dictamen que emita la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización relativo a que dicha candidatura cuenta con el mínimo de firmas requerido para su registro;

IV. a VII. ...



## II LEGISLATURA

Artículo 406. En términos de lo dispuesto por el apartado B de la Base III del artículo 41 de la Constitución Federal, el Instituto Nacional es el único encargado de la administración de los tiempos en radio y televisión que le corresponden al Estado para los fines tanto de las autoridades electorales federales como las (sic) de las Entidades Federativas.

El Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, realizará las acciones conducentes para obtener de la autoridad electoral federal los tiempos necesarios para la difusión ordinaria y de campaña de los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, y su distribución entre éstos.

Artículo 408. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización del Instituto Electoral solicitará a los medios impresos los catálogos y tarifas disponibles y los que reciba los pondrá a disposición de los Partidos Políticos y Candidatos sin partido.

### TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y dentro de un marco de derechos humanos, el Consejo General contará con un plazo de 90 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública.

QUINTO. Las comisiones actuales permanecerán vigentes hasta en tanto sean constituidas las nuevas.

La integración de las nuevas comisiones se llevarán a cabo dentro del plazo establecido en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto, las cuales, por única ocasión, se determinarán mediante acuerdo del Consejo General, sin importar la composición actual de las mismas.

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil veintidós.  
**POR LA MESA DIRECTIVA. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, SECRETARÍA.- DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, SECRETARÍA.- (Firmas)**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo segundo, 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracciones II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al primer día del mes de junio del año dos mil veintidós.- **LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA**

(...)

#### IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE, QUE SE ESTIMAN VIOLADOS:

Se estima que los derechos humanos, principios, y obligaciones del Estado violados consagrados tanto en preceptos constitucionales como en Tratados Internacionales de los que México es parte, son los siguientes:

- Derecho de no discriminación.



## II LEGISLATURA

- Derecho de Igualdad.
- Derecho a la consulta.
- Derecho de Seguridad Jurídica.
- Principio de Legalidad.
- Principio de Progresividad de los Derechos Humanos.
- Principio de Universalidad.
- Obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
- Principio de autonomía constitucional del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
- Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Federal y en la Constitución Política de la Ciudad de México.
- Derechos Humanos de las Mujeres.

Respecto a los preceptos constitucionales violados, señalamos en concreto los artículos 1º, 4, 14, 16, 41 fracción V apartados A y C, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a continuación se transcriben:

**Artículo 1º.** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

(...)



II LEGISLATURA

**Énfasis añadido**

**Artículo 4º.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.**

(...)

**Énfasis añadido**

**Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.**

(...)

**Énfasis añadido**

**Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.**

(...)

**Énfasis añadido**

**Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.**

(...)

**Énfasis añadido**

**Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las**





H. LEGISLATURA

particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

(...)

**V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.**

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los



II LEGISLATURA

servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

- a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución;
- b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurren a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;
- c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes;



## II LEGISLATURA

- d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación;
- e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.

De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación.

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser



II LEGISLATURA

postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo.

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

(...)

**Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:**

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y



H LEGISLATURA

11. Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

- a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;
- b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o
- c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución.

**Énfasis añadido**

(...)

**Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.**

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

(...)

**VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta Constitución prevé para las entidades federativas.**



H. LEGISLATURA

(...)

**Énfasis añadido**

**Artículo 133.** *Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.*

**Énfasis añadido**

Así como los derechos humanos consagrados en los **artículos 2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer**, que a continuación se transcriben:

**Artículo 2.** *Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:*

- a) *Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;*
- b) *Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;*
- c) *Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;*



II LEGISLATURA

- d) *Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;*
- e) *Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;*
- f) *Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;*
- g) *Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.*

**Artículo 3 Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultura, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.**

(...)

**Énfasis añadido**

Asimismo, la **Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)** de 1994, apunta que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas y velar porque todos los agentes e instituciones condenen todas las formas de violencia contra las mujeres, a través de los medios apropiados y sin dilaciones, así como prever acciones orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como se señala en su artículo 7:



II LEGISLATURA

Artículo 7.

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

- a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
- b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
- c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
- d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
- e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
- f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
- g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y





H. LEGISLATURA

- h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.*

(...)

**Énfasis añadido**

Por su parte, la Convención Belém do Pará prevé la importancia de la progresividad de las medidas que se tomen para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Esto en su artículo 8:

#### Artículo 8

*Los Estados Partes convienen en adoptar, **en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:***

- a. **fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;***
- b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan (sic.) o exacerban la violencia contra la mujer;*
- c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;*
- d. **suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios***



II LEGISLATURA

*de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;*

- e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;*
- f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;*
- g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;*
- h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y*
- i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.*

**Énfasis añadido**

## **V. COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de las diversas normativas señaladas en



II LEGISLATURA

el apartado III del presente escrito, publicados el 2 de junio de 2022 en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

## **VI. OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN**

Con base en lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la norma impugnada.

En el caso, la norma cuya declaración de invalidez se solicita, fue publicada el día 2 de junio de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que los plazos para presentar la presente acción de inconstitucionalidad corren del día viernes 3 de junio de 2022 al 2 de julio de 2022, no obstante, como el 2 de julio es sábado, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria aplicable, al ser el último día del plazo inhábil, el plazo para la presentación de la presente demanda vence el día 4 de julio de 2022. Por lo tanto, al promoverse el día de hoy ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presentación de esta acción de inconstitucionalidad es oportuna.

## **VII. LEGIMITACIÓN ACTIVA DEL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROMOVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**

El artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente faculta al equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; es decir, las legislaturas de las entidades federativas, de conformidad con los requisitos establecidos en la Carta Magna, tienen atribuciones para presentar la posible inconstitucionalidad de normas generales que vulneren los Derechos Humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es parte, al tenor de los siguientes términos:



H. LEGISLATURA

**Artículo 105.** *La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:*

*(...)*

*II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.*

*Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:*

*(...)*

*d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;*

*(...)*

*(...)*

Conforme al citado precepto constitucional, acudimos las Diputadas y los Diputados, en los términos precisados en los artículos 61 y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, aplicable en materia de acciones de inconstitucionalidad.

## **VIII. HECHOS**

Respecto a los antecedentes que dan origen a la presente acción de inconstitucionalidad, de manera enunciativa más no limitativa, se relacionan los siguientes:

1. El Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA, presentó el pasado 17 de febrero de 2022, en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.



II LEGISLATURA

2. El mismo día 17 de febrero de 2022, la Comisión de Asuntos Político – Electorales recibió formalmente, por medio del correo electrónico institucional, la iniciativa en comento, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.
3. La comisión dictaminadora solicitó prórroga para un estudio y análisis más profundo de la presente iniciativa con proyecto de decreto, misma que fue concedida por el pleno del Congreso de la Ciudad de México el día 07 de abril de 2022.
4. El día 06 de mayo de 2022, se llevó a cabo una reunión de asesores de la Comisión de Asuntos Político – Electorales para realizar un análisis técnico del proyecto de dictamen elaborado respecto de la iniciativa del Diputado Hernández Mirón. En dicha reunión, asesores de diversos diputados, realizaron observaciones al proyecto de dictamen, haciendo hincapié en la necesidad de realizar una mesa de trabajo con Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el impacto que el instrumento legislativo del Diputado Mirón pudiera presentar, además de hacer evidente la falta de un estudio respecto al impacto presupuestal que la propuesta pudiera implicar atendiendo a que la misma buscaba suprimir plazas lo que conllevaría a un despido de un número determinado de trabajadores a quienes se les deberá garantizar sus derechos laborales en términos de ley.
5. Asimismo, el día 09 de mayo de 2022, la comisión dictaminadora recibió un oficio firmado por la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mtra. Patricia Avendaño Durán, mediante el cual el propio instituto solicitaba una mesa de trabajo con las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, para manifestar algunas consideraciones respecto de la iniciativa de ley de referencia.
6. De esta manera, el día 13 de mayo de 2022, previa convocatoria de la presidencia de la comisión dictaminadora, se realizó la mesa de trabajo entre las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político – Electorales y Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.



## II LEGISLATURA

7. El mismo día 13 de mayo de 2022 se recibió al mediodía, convocatoria para celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, con el propósito de desahogarse el día 16 de mayo a las 14:00 horas, misma que fue pospuesta mediante alcance, indicando que el nuevo horario de la sesión sería a las 15:00 horas.
8. De igual manera, el día 13 de mayo de 2022, el Diputado Carlos Hernández presentó un oficio con clave alfanumérica CCM-III/CHM/GPM/025/2022, mediante el cual presentaba un cambio a su propia iniciativa, consistente en modificar el ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO, por el cual se estipulaba el plazo con el que contaría el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para adecuar su estructura orgánica y funcional. El cambio referido consistió en cambiar de 60 días naturales (como lo presentaba originalmente su iniciativa) a 90 días naturales.
9. Del mismo modo, el día 15 de mayo de 2022, alrededor de las 22:00 horas fueron notificados las y los integrantes de la comisión dictaminadora, que por causas de fuerza mayor, la sesión extraordinaria prevista para el día 16 de mayo del mismo año, tendría que ser pospuesta, hasta nuevo aviso.
10. El día miércoles 18 de mayo de 2022, alrededor de las 23:00 horas, las y los integrantes de la comisión dictaminadora, fueron nuevamente convocados por la presidencia de la misma, a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, a celebrarse el día 20 de mayo de 2022, a las 11:00 horas; convocatoria que no cumplió con varios requisitos que establecen diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
11. El día 20 de mayo de 2022, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, la cual puede revisarse en el siguiente link de la plataforma de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=MTpHEnd1J1I>. Ahora bien, siendo esta sesión, un acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, como lo es el Congreso de la Ciudad de México, se hace constar que esta sesión se trata de un hecho jurídicamente notorio, el cual la ley exime de su prueba, conforme a la siguiente jurisprudencia:



II LEGISLATURA

**Registro digital:** 174899

**Instancia:** Pleno

**Novena Época**

**Materia(s):** Común

**Tesis:** P./J. 74/2006

**Fuente:** *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.*  
Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963

**Tipo:** Jurisprudencia

**HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.** Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.

*Nota:* Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 24 de marzo de 2014.



H. LEGISLATURA

Asimismo, resulta aplicable, el criterio sustentado en la siguiente tesis de jurisprudencia, al ser la página de YouTube con el nombre "Congreso de la Ciudad de México" y con 8,630 suscriptores, desde la cual se publicó la referida sesión, la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, en esta red social:

**Registro digital:** 168124

**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito

**Novena Época**

**Materia(s):** Común

**Tesis:** XX.2o. J/24

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470

**Tipo:** Jurisprudencia

**HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.**

Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.





II LEGISLATURA

## SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

*Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos.  
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.*

*Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.  
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.*

*Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.  
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.*

*Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.  
Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.  
Secretario: Rolando Meza Camacho.*

*Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.  
Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno.*

*Nota:*

*Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 24 de marzo de 2014.*

*Por ejecutoria del 19 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 132/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.*

*Por ejecutoria del 13 de octubre de 2021, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 159/2021, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.*



## II LEGISLATURA

12. En fecha 25 de mayo de 2022 se llevó a cabo la “Sesión virtual de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos”, en la cual se aprobó de manera ilegal, como abordaremos más adelante, el orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 26 de mayo de 2022, la cual es de dominio público y puede consultarse en el siguiente link de la plataforma digital YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=1u0As5IMiEY>, que como ya hemos dejado constancia, se trata también de un hecho público y notorio.
13. El día 26 de mayo de 2022, se llevó a cabo la sesión ordinaria por virtud de la cual se aprobó el dictamen materia de la presente acción de inconstitucionalidad.
14. Finalmente, en fecha 2 de junio de 2022, mediante número de gaceta 864 Bis, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó el **DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA**



■ LEGISLATURA

FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el cual puede consultarse en el siguiente link de internet: [https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal\\_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf](https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf); que conforme a la Tesis: XX.2o. J/24 y Tesis: P./J. 74/2006, hemos acreditado con anterioridad, se trata igualmente, de un hecho notorio.

En razón de los hechos expuestos con anterioridad, así como frente a diversos razonamientos planteados por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la pasada mesa de trabajo con las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, y derivado del estudio del dictamen en cuestión, es importante precisar los siguientes:

#### **IX. CONCEPTOS DE INVALIDEZ**

- a. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA POR SER VIOLATORIA DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEMOCRACIA DELIBERATIVA DURANTE EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO.



II LEGISLATURA

EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL



II LEGISLATURA

ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO que se controvierte, violatorio como hemos dejado constancia de los artículos 1º, 4, 14, 16, 41 fracción V apartados A y C, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correspondientes a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, es inconstitucional toda vez que se actualizan deficiencias y violaciones graves, sistemáticas e irreparables al proceso parlamentario seguido por la Comisión de Asuntos Político – Electorales del Congreso de la Ciudad de México, comisión dictaminadora, que conoció de la iniciativa que dio origen al mismo, que provocan una irremediable anulación de sus efectos, violaciones que son de tal envergadura que llevan a la inconstitucionalidad total de la reforma impugnada al no ser fruto de un genuino debate democrático al interior del seno legislativo, lo cual es violatorio de la Constitución Federal y que ha sido resuelto por esta Suprema Corte de Justicia a través de diversos precedentes, en los términos que se corroboran en lo subsecuente.

Dichas deficiencias y violaciones graves, sistemáticas e irreparables al proceso parlamentario, son del tenor de los siguientes argumentos:

1. El que se refiere a la falta de fundamentación y motivación jurídica suficiente de la convocatoria para poder celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – Electorales del Congreso de la Ciudad de México, por virtud de la cual se discutiría, y en su caso aprobaría un dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, iniciativa presentada por el Diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de MORENA, el pasado 17 de febrero de 2022.

El mandato constitucional de fundar y motivar está consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, el cual constituye la garantía de legalidad de nuestro sistema jurídico. Dicha garantía, se cumple en 2 vertientes:

- I. Cuando se expresa con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto.



II LEGISLATURA

- II. Cuando se señala con precisión las circunstancias, razones, o causas especiales inmediatas que se hayan tenido para la emisión del acto.

Para el correcto y mejor análisis de este primer vicio del procedimiento legislativo que siguió el decreto materia de la presente acción de inconstitucionalidad, se adjunta imagen de la convocatoria enviada al correo institucional del Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante de la comisión de Asuntos Político – Electorales, para la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria de dicha comisión:

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 19 de mayo de 2022  
IIL/CAAPPEE/0080/2022

**DIP. RICARDO RUBIO TORRES**  
**SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS**  
**POLÍTICOS-ELECTORALES DEL CONGRESO**  
**DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**PRESENTE**

Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 párrafo segundo, 211 párrafo quinto, 240, 247 y 250 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la “Primera Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 20 de mayo del presente año a las 11:00 horas, al tenor del siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;

3. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas Disposiciones del Código e Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México presentada por el Diputado Carlos Hernández Mirón;

4. Asuntos Generales;

5. Clausura de la sesión.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

**DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS**  
**PRESIDENTE**



H. LEGISLATURA

Ahora, si bien es cierto que la convocatoria referida se fundamentó en los artículos 193 párrafo segundo, 211 párrafo quinto, 240, 247 y 250 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo CCMX/III/JUCOPO/04/2021, también es cierto que no por haber fundado, significa que se motivó dicha convocatoria; es decir, como se expuso con anterioridad, además de haber expresado con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, **la autoridad debió también haber señalado con precisión las circunstancias, razones, o causas especiales inmediatas que se hayan tenido para la emisión del acto**, circunstancia que omitió en este caso la Comisión de Asuntos Político – Electorales del Congreso de la Ciudad de México.

Al no haber cumplido con este segundo requisito para salvaguardar la garantía de legalidad, **resulta entonces insuficiente la fundamentación y motivación jurídica** de la convocatoria para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de la comisión dictaminadora, necesarias para llevar a cabo un correcto procedimiento legislativo; sesión donde se aprobó el decreto materia de la presente acción de inconstitucionalidad,

Lo anterior es grave, pues debe mencionarse que ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que, previo al análisis de los conceptos de invalidez en contra del contenido de las normas reclamadas en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, es necesario responder los planteamientos de alegadas inconsistencias del procedimiento legislativo, ya que, de resultar acertados, traería como consecuencia la inconstitucionalidad genérica de la legislación reclamada. Ello, con fundamento en lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, criterio que se refleja en la tesis P./J. 32/2007, resolución que es del tenor literal siguiente:

**Registro digital:** 170881

**Instancia:** Pleno

**Novena Época**

**Materia(s):** Constitucional



H LEGISLATURA

**Tesis:** P./J. 32/2007

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 776

**Tipo:** Jurisprudencia

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS.**

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 6/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 915, sostuvo que en acción de inconstitucionalidad en materia electoral debe privilegiarse el análisis de los conceptos de invalidez referidos al fondo de las normas generales impugnadas, y sólo en caso de que resulten infundados deben analizarse aquellos en los que se aduzcan violaciones en el desarrollo del procedimiento legislativo originó a la norma general impugnada. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de la jurisprudencia citada para establecer que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, cuando se hagan valer violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a la norma general impugnada, éstas deberán analizarse en primer término, ya que, de resultar fundadas, por ejemplo, al trastocar valores democráticos que deben privilegiarse en nuestro sistema constitucional, su efecto de invalidación será total, siendo, por tanto, innecesario ocuparse de los vicios de fondo de la ley impugnada que, a su vez, hagan valer los promoventes.

Acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006. Diputados de la Décima Octava Legislatura del Estado de Baja California y Partidos Políticos Revolucionario Institucional y del Trabajo. 4 de enero de 2007. Mayoría de ocho





LEGISLATURA

votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 32/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

Nota: La tesis P./J. 6/2003 citada, aparece publicada con el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. DEBE PRIVILEGIARSE EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ REFERIDOS AL FONDO DEL ASUNTO Y SÓLO EN CASO DE QUE ÉSTOS RESULTARAN INFUNDADOS, SE PROCEDERÁ AL ANÁLISIS DE LAS VIOLACIONES PROCEDIMENTALES."

A saber, como se ha detallado, el criterio de esta Suprema Corte radica en que lo que debe examinarse de un procedimiento legislativo es, al menos, si **los órganos legislativos respetaron el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en condiciones de igualdad y libertad; si se culminó el procedimiento con el cumplimiento de las reglas de votación establecidas y si sus deliberaciones y votaciones fueron públicas.** Ello, al ser las pautas que permitan apreciar que se respetó el régimen democrático en el que se sustenta su legitimidad como órgano facultado para emitir leyes.

Resulta claro que no existió un genuino respeto de los derechos de las minorías; particularmente, a causa de los vicios de la convocatoria a la sesión en donde se aprobó el dictamen del decreto impugnado; vicios que, en su conjunto, son de tal envergadura que llevan necesariamente a la inconstitucionalidad del decreto impugnado al no ser fruto de un genuino debate democrático al interior del seno legislativo.

Existe un extremo desdeñamiento de la posición minoritaria en el interior del órgano legislativo: primero, porque **no se llevó a cabo una convocatoria adecuada** a los integrantes de la comisión

dictaminadora donde se aprobó el dictamen y, segundo, **no se distribuyó con la debida anticipación, ni en ninguno de ambos casos se dispensó el trámite respectivo**, tal y como se expondrá con mayor profundidad en el siguiente concepto de invalidez.

Así las cosas, ante las deficiencias sobre la convocatoria a la sesión de la Comisión Dictaminadora, así como las graves deficiencias en la entrega del dictamen a los diputados y diputadas, en comisiones y en el Pleno sin atender las 48 horas, y la ausencia de dispensa en ese sentido en las mismas instancias, en concatenación con la incidencia en el debate y discusión por parte de todas las fuerzas políticas dentro del Congreso de la Ciudad, produce una afectación a los principios de legalidad y democracia deliberativa al no permitirse la deliberación pública a una fuerza política del Congreso Local en condiciones de libertad e igualdad.

Aunado a lo anterior, y como soporte al presente concepto de invalidez, es necesario señalar que la Comisión de Asuntos Político – Electorales del Congreso de la Ciudad de México, no pudo motivar su Primera Sesión Extraordinaria, toda vez que, como lo señala el artículo 240 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las sesiones extraordinarias son las que se realizan fuera de las programadas previamente, conforme al calendario básico anual de cada comisión.

Resulta importante señalar lo anterior, toda vez que, de conformidad con el **PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO – ELECTORALES PRIMER AÑO LEGISLATIVO**, las sesiones de la comisión durante el primer año legislativo, debieron de haberse celebrado, de conformidad con las siguientes fechas:



II LEGISLATURA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES



III. Programación de sesiones del primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México.

Sesión	Fecha
Sesión de instalación	22 de octubre de 2021
Reunión de trabajo con el IECM	12 de noviembre de 2021
Primera sesión ordinaria	08 de diciembre de 2021
Segunda sesión ordinaria	07 de enero de 2022
Tercera sesión ordinaria	02 de febrero de 2022
Cuarta sesión ordinaria	02 de marzo de 2022
Quinta sesión ordinaria	04 de abril de 2022
Sexta sesión ordinaria	04 de mayo de 2022
Séptima sesión ordinaria	08 de junio de 2022
Octava sesión ordinaria	06 de julio de 2022
Novena sesión ordinaria	10 de agosto de 2022
Décima sesión ordinaria	07 de septiembre de 2022

No obstante, la Comisión de Asuntos Político – Electorales no ha celebrado ninguna sesión, conforme al calendario relacionado en el mencionado Programa Anual de Trabajo; y no por esa razón, la presidencia de esta comisión motivó y fundamentó dichas sesiones, como sesiones extraordinarias, como se expone a continuación:

Sesión	Fecha propuesta en el Programa Anual de Trabajo	Fecha de celebración de la sesión
1ª Sesión Ordinaria	08 de diciembre de 2021	17 de diciembre de 2021
2ª Sesión Ordinaria	07 de enero de 2022	25 de febrero de 2022
3ª Sesión Ordinaria	02 de febrero 2022	22 de abril de 2022

En virtud de lo anterior, es clara la falta de motivación de la convocatoria referida, al no encontrar los que suscribimos elementos jurídicos para calificar esa sesión como una sesión

“extraordinaria”, razones las cuales, se infiere, también compartió la Comisión de Asuntos Político – Electorales; tanto así, que no la motivaron.

2. El que se refiere al indebido proceso parlamentario seguido ante la Comisión dictaminadora, toda vez que no se convocó debidamente a una sesión ordinaria, y dolosamente se convocó a una sesión extraordinaria sin las formalidades parlamentarias para la discusión y en su caso aprobación dictamen, no se distribuyó el proyecto de dictamen con la debida anticipación para su discusión ante el pleno, ni se dispensó la distribución de los dictámenes, todo lo que ordenan la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México en vigor, y sin que hubiera una justificación para hacerlo.

Al respecto, el artículo 276 establece, lo que es del tenor literal siguiente:

#### **REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

(...)

*Artículo 276. Las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y demás asuntos turnados deberán distribuirse a las y los Diputados integrantes, por lo menos, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la reunión de trabajo en la que se someterá a su discusión, salvo dispensa de dicho trámite por la mayoría de las y los Diputados, en caso de urgencia o reunión extraordinaria.*

(...)

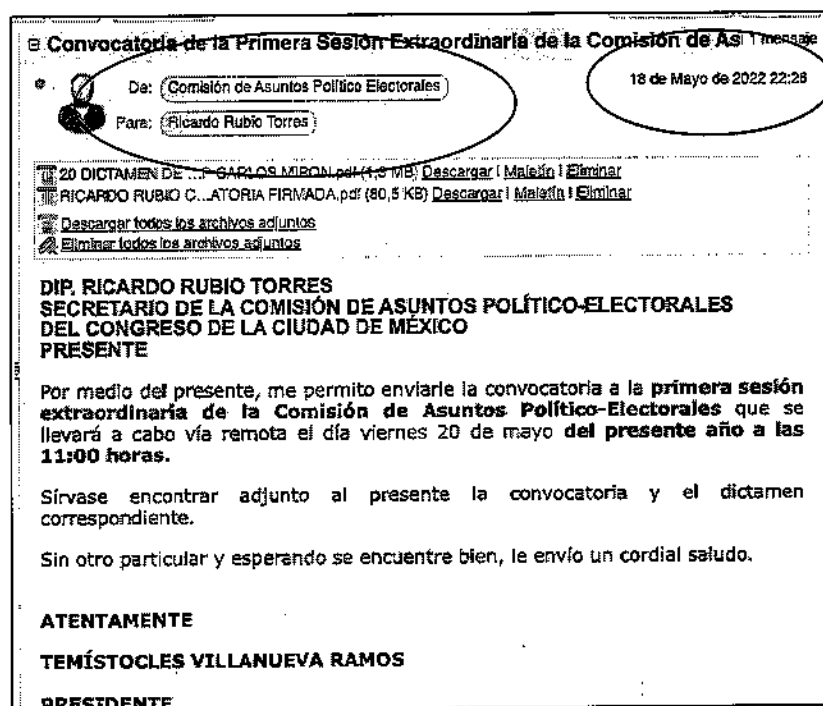
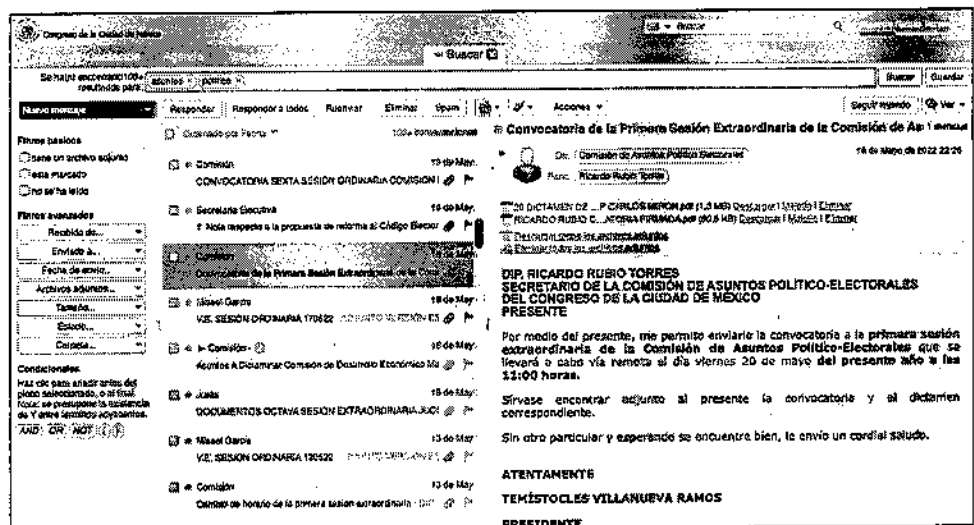
En este orden de ideas, resulta necesario advertir que las y los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, fueron notificados de la realización de la Primera Sesión Extraordinaria de la comisión, mediante convocatoria enviada a los correos oficiales de las y los Diputados integrantes, el pasado miércoles 18 de mayo de 2022 a las 22:26 horas, hecho que viola lo dispuesto por el artículo citado anteriormente, pues dichas 48 horas se cumplieron hasta el día 20 de mayo de 2022, pero no a la hora señalada para celebrar la sesión, sino hasta las 22:26 horas; siendo



II LEGISLATURA

que, aunque se argumentara que dicho requisito quedó dispensado por tratarse de una reunión extraordinaria, tampoco se cumplió con el referido trámite de dispensa, pues ni se consultó a las y los Diputados integrantes de la comisión, ni tampoco se les notificó de que hubiera habido dispensa alguna.

Para el correcto y mejor análisis de este segundo vicio del procedimiento legislativo que siguió el decreto materia de la presente acción de inconstitucionalidad, se adjuntan capturas de pantalla de la convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, enviada al correo institucional del Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante de la comisión:





II LEGISLATURA

Por otro lado, esta Suprema Corte de Justicia cuenta con una doctrina consolidada respecto a cuándo se actualiza una violación al procedimiento que haga necesaria la invalidación total de una ley. En síntesis, se ha entendido que el régimen democrático imperante en nuestro texto constitucional exige que en el propio seno del órgano legislativo que discute y aprueba las normas se verifiquen ciertos presupuestos formales y materiales que satisfagan los principios de legalidad y de democracia deliberativa.

Así, se busca, que las normas cuenten efectivamente con una dignidad democrática que deriva de sus procesos de creación y de la idea de representación popular que detentan los diversos integrantes de una legislatura, lo cual se obtiene con el respeto de las reglas de votación, la publicidad de las mismas, y la participación de todas las fuerzas políticas al interior del órgano.

Dicha doctrina data de hace varios años, siendo los primeros precedentes los siguientes: las acciones de inconstitucionalidad 9/2005 y la diversa 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006. La primera acción referida se resolvió el 13 de junio de 2005. En ese caso, la parte demandante adujo violaciones al procedimiento legislativo que dio origen al artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. El Tribunal Pleno llegó a la conclusión de que no existieron violaciones con potencial invalidatorio; sin embargo, sentó un importante precedente en cuanto a las reglas y principios que deben acatarse en un procedimiento legislativo en atención a las garantías de debido proceso y legalidad.

En la sentencia se dijo lo siguiente: *“De conformidad con lo expuesto, este Tribunal Pleno estima que para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en la violación de las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en el artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal<sup>1</sup>, y provocan la invalidez de la*

---

<sup>1</sup> “Artículo 14. [...]”

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las



## II LEGISLATURA

norma emitida, o si por el contrario las mismas no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates. 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas. 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata es precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales puntuales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Los anteriores criterios, en otras palabras, no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, puesto que su función es precisamente ayudar a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo.

Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las

---

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

[...]

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [...]”.



II LEGISLATURA

vicisitudes o avatares que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. La entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, por ejemplo -algo que, como veremos, caracteriza el caso que debemos abordar en el presente asunto-, son circunstancias que se presentan habitualmente y ante las cuales la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades del caso concreto, sin que ello pueda desembocar, en cualquier caso, en la final desatención de ellos.<sup>2</sup>

Este criterio se refleja en la tesis L/2008 (9a.), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 2008, tomo 27, página 717, de rubro: **"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL"**, la cual es del tenor literal siguiente:

**Registro digital:** 169437

**Instancia:** Pleno

**Novena Época**

**Materia(s):** Constitucional

**Tesis:** P. L/2008

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXVII, Junio de 2008, página 717

**PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL.**

*Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y*

<sup>2</sup> Hojas 76 a 79 de la respectiva sentencia.





II LEGISLATURA

provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares:

1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención.



II LEGISLATURA

*Acción de inconstitucionalidad 9/2005. Partido Revolucionario Institucional. 13 de junio de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Roberto Lara Chagoyán.*

*El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número L/2008, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.*

Como se puede observar, para ese Tribunal Pleno, lo mínimo indispensable que debe de cumplirse en un trabajo legislativo es el respeto a las reglas de votación, a la publicidad y a la participación de todas las fuerzas políticas del órgano legislativo en el proceso de creación normativa en condiciones de libertad e igualdad, con el fin de que se asegure la expresión de su opinión y defensa en un contexto de deliberación pública.

Ahora, por su parte, la referida acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006 se resolvió el 4 de enero de 2007. En este asunto se reclamó la inconstitucionalidad de un decreto publicado el 16 de octubre de 2006, en el que, entre otras cuestiones, se hicieron modificaciones a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California. El Tribunal Pleno aplicó los criterios sobre los vicios con potencial invalidatorio antes mencionados y llegó a la conclusión de que se transgredían los principios de legalidad y democracia deliberativa.

En la sentencia se puede apreciar que la razón primordial para declarar la **invalidéz** fue que las irregularidades en el procedimiento tuvieron un gran impacto en las posibilidades reales de expresión de las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Primero, porque el decreto fue aprobado dispensando la totalidad de los trámites legislativos bajo un carácter de urgencia que jamás fue motivado; es decir, se presentó la iniciativa legislativa y desde ese momento se



II LEGISLATURA

dispensaron todos los trámites (incluyendo el dictamen) y se pasó directamente a la aprobación de la ley. Y segundo, si bien es cierto existía premura en la expedición de las normas al tratarse de material electoral, lo cual se advirtió de manera implícita, el Tribunal Pleno mencionó que esa sola razón (el cumplimiento del plazo de 90 días de expedición de las normas electorales antes del inicio del proceso electoral) no podía justificar el uso extraordinario de las facultades de dispensa urgente de los trámites legislativos.

Así, se invalidó el decreto impugnado al haberse impedido que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de conocer la iniciativa planteada - al haber sido presentada el mismo día en que fue discutida- y, por ende, de debatir sobre ella con verdadero conocimiento de su contenido y alcance. A saber, no se conoció previamente por los demás integrantes del Congreso, dispensándose, por la mayoría, el que fuera dictaminada por las comisiones correspondientes; de ahí que ese Pleno haya decidido que no fue posible considerar que una norma general, producto de un procedimiento tan acelerado para su aprobación, pudiera ser resultado del debate democrático que debe existir en todo órgano legislativo.

En consecuencia, se advierte de los precedentes mencionados, que el criterio de esta Suprema Corte consiste en que no todas las violaciones procedimentales son dignas de invalidar un decreto legislativo, ello con la finalidad de respetar el principio de economía procesal y bajo la premisa de que no todas las reposiciones del procedimiento implicarían un cambio sustancial en la voluntad parlamentaria expresada; sin embargo, analizando el proceso en su integridad y tomando en cuenta que la regulación del mismo raramente es única e invariable, con el objeto de garantizar los principios constitucionales de legalidad, seguridad y democracia deliberativa, los órganos legislativos están obligados a respetar el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en condiciones de igualdad y libertad; a culminar el procedimiento con el cumplimiento de las reglas de



II LEGISLATURA

votación establecidas, y a que sus deliberaciones y votaciones sean públicas.

Resulta imprescindible hacer alusión a otros casos resueltos por esta Suprema Corte que siguen la misma lógica del presente asunto.

En la diversa controversia constitucional 41/2014<sup>3</sup>, esta Suprema Corte trató un caso en el que un municipio, por un lado, argumentó que la Ley de Educación para el Estado de Michoacán fue aprobada sin destinar recursos a los municipios del Estado y, por otro lado, alegó que la Ley aprobada y publicada no fue puesta a consideración del municipio. En relación con los vicios en el procedimiento, una vez sintetizado el marco normativo y el procedimiento legislativo de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, en el fallo se determinó que se actualizaba una violación sustancial del procedimiento, relacionada con las reglas que garantizan la participación efectiva de todos los legisladores en la deliberación parlamentaria que culminan con la aprobación de la norma.

Se precisó que el dictamen de segunda lectura que contiene el proyecto de Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo fue aprobado por la comisión respectiva, por mayoría de votos de sus integrantes, en la reunión de trabajo ordinaria celebrada a las 8 horas del día 27 de febrero de 2014, y en la sesión del Pleno del Congreso que se verificó el mismo día a las 11 horas con 10 minutos, se presentó para su análisis, votación y aprobación, habiendo sido aprobado por mayoría de votos.

Sin embargo, en la propia sentencia se puso de relieve que previamente a la discusión del dictamen mencionado **no se distribuyó el texto a los diputados por lo menos con**

---

<sup>3</sup> Controversia constitucional 41/2014, bajo la Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, en su ausencia hizo suyo el asunto la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en sesión de 29 de septiembre de 2015.



II LEGISLATURA

**veinticuatro horas de anticipación ni se publicó en la Gaceta Parlamentaria.**

Bajo esa tónica, se concluyó que tales actuaciones afectaron, sin lugar a dudas, las premisas básicas en que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, ya que al no haberse distribuido el mencionado dictamen a los legisladores ni publicado en la Gaceta Parlamentaria, con la oportunidad debida, tal circunstancia impidió a las minorías (en especial a las que se opusieron a que ese asunto se incluyera a última hora en la orden del día por desconocer su contenido), contar con los elementos necesarios para poder discutir, expresar y defender su opinión, previamente a la aprobación del dictamen del proyecto de la ley impugnada. Razón que fue la sustentada por el Tribunal Pleno para afirmar que existían violaciones que trascendieron a la validez de la norma al haberse vulnerado los requisitos de publicidad, de participación y de debate público para la creación de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo.

En otro caso, resuelto días más tarde, esta Suprema Corte analizó la **controversia constitucional 34/2014<sup>4</sup>**, en la que el Municipio actor reclamó la omisión del Congreso Federal de fijar las aportaciones económicas que les corresponderán a los municipios con respecto a la función social que dispone el artículo 3° fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para cumplir con ésta en el ámbito de su competencia, pues, según el actor, del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013.

Respecto a los argumentos de invalidez relacionados con la falta de presentación de los dictámenes, en la sentencia se argumentó que si bien ello no constituye una violación que trascienda a la

<sup>4</sup> Controversia constitucional 34/2014, bajo la Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, en su ausencia hizo suyo el asunto la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, resuelto en sesión de seis de octubre de dos mil quince.



II LEGISLATURA

validez de la norma general impugnada, **sí actualizaba una violación sustancial al procedimiento en relación con las reglas que garantizan la participación efectiva de todos los legisladores en la deliberación parlamentaria** (al no haberse cumplido los dos primeros pasos del estándar establecido por esa Suprema Corte, consistentes en i) el derecho de participación de las minorías y ii) la aplicación concreta de las reglas de votación).

En la sentencia se enfatizó que previamente a la discusión del dictamen de la de Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, no se distribuyó el texto a los diputados por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, ni se publicó en la Gaceta Parlamentaria; por lo que, los legisladores no tuvieron conocimiento oportuno de que en la sesión plenaria de la fecha señalada se sometería a análisis, discusión, votación y aprobación el mencionado dictamen. Siendo relevante que hubo oposición expresa de diversos diputados en contra de tales acciones, sin que hubieran sido atendidas, pues fueron vencidas por las mayorías. Se considera oportuno transcribir una parte de la resolución: *"efectivamente, tales actuaciones afectan, sin lugar a dudas, las premisas básicas en que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, ya que, al no haberse distribuido el mencionado dictamen a los legisladores ni publicado en la Gaceta Parlamentaria, con la oportunidad debida, tal circunstancia impidió a las minorías, en especial a las que se opusieron a que ese asunto se incluyera a última hora en la orden del día por desconocer su contenido, contar con los elementos necesarios para poder discutir, expresar y defender su opinión, previamente a la aprobación del dictamen del proyecto de la ley impugnada"*.

En otro precedente, la **acción de inconstitucionalidad 36/2013<sup>5</sup>**, el Pleno llegó a una conclusión similar. La materia del asunto fue la regularidad de diversos artículos de la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco, publicada el 1º de noviembre del 2013.

<sup>5</sup> Acción de Inconstitucionalidad 36/2013, bajo la Ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, resuelta en sesión de 13 de septiembre de 2018.



II LEGISLATURA

Respecto al alegato de violaciones al procedimiento legislativo, después de retomar diversos precedentes resueltos por esta Suprema Corte, de señalar el marco normativo aplicable en el Estado de Jalisco y de sintetizar el procedimiento legislativo, el Pleno determinó que se actualizaban violaciones en el procedimiento legislativo con efectos invalidantes.

En la sentencia se dice que el dictamen de la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco fue aprobado el 31 de octubre de 2013 por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal y, presentado ante la Dirección de Procesos Legislativos, tan solo 32 minutos más tarde. Empero, se advirtió que no se cumplió con el mandato que alude a la entrega del Dictamen, al menos, 36 horas antes del desahogo de la sesión respectiva, salvo que se tratase de un caso excepcional previsto en el propio reglamento o que lo hubiese acordado la Asamblea.

El dictamen se entregó a la Dirección de Procesos Legislativos el mismo día que se celebró la sesión extraordinaria y fue incluido en el orden del día sin cumplir con la previsión vinculada con la entrega de la misma a los Diputados al menos 24 horas de anticipación a la sesión para que los legisladores estuviesen en la posibilidad de formular observaciones, analizar el dictamen, argumentar o contra argumentar sobre su contenido. Además, se identificó que la justificación para la inclusión en el orden del día del dictamen se categorizó como un asunto de "urgente y obvia resolución".

Bajo esas circunstancias, esta Corte sostuvo que, a pesar de cubrirse la previsión relativa al derecho a la participación de todas las fuerzas políticas en la sesión extraordinaria, en la votación que dio origen al Decreto 24486/LX/13 referente a la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco tras los posicionamientos parlamentarios, **no se cumplimentó el derecho a la participación deliberativa en relación con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.** Ello, pues no podía sostenerse que los Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura tuvieran conocimiento detallado del



II LEGISLATURA

dictamen que fue aprobado hasta las 10 horas con 30 minutos del mismo día de la celebración de una sesión extraordinaria, cuya convocatoria no versaba sobre dicho punto y que adicionalmente no fuera incluido en el orden del día con una anticipación de por lo menos 24 horas, así como la inclusión de los documentos correspondientes (en cualquier formato) y tampoco fuese entregado al menos con 36 horas de anticipación ante la Dirección de Procesos Legislativos del Congreso del Estado de Jalisco, pues esto último ocurrió 32 minutos después de concluir la sesión de la Comisión de Derechos Humanos que modificó la iniciativa original del proyecto de Ley de Libre de Convivencia del Estado de Jalisco.

De igual manera, el Tribunal Pleno tampoco advirtió una motivación reforzada o justificada que sostuviera la incorporación del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local en el orden del día, como un asunto urgente a ser tratado en la multitudinaria sesión extraordinaria de 31 de octubre de 2013. Lo anterior es así, toda vez que la circunstancia para calificar que el tema a tratar como una situación de “obvia y urgente resolución” no era suficiente para convalidar su falta de motivación. En consecuencia, al considerar fundados los conceptos de alegados por los accionantes, se declaró la invalidez de la totalidad del Decreto impugnado.

Por último, el precedente más reciente que resulta directamente aplicable es la **controversia constitucional 63/2016**, fallada el 23 de septiembre de 2019. En éste se analizó la regularidad constitucional de la reforma al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Una mayoría de los integrantes de esa Corte<sup>6</sup> sostuvo que el dictamen correspondiente no se entregó a los miembros del Pleno del Congreso con la anticipación de 24 horas prevista por el artículo

<sup>6</sup> Se aprobó por mayoría de nueve votos de la Ministra y los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán. En contra de los emitidos por la Ministra Esquivel Mossa y el Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.





H. LEGISLATURA

49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de esa entidad federativa ni se motivó bajo una razón válida la dispensa de este trámite, deficiencias legislativas que tenían el potencial invalidatorio suficiente para decretar la inconstitucionalidad del decreto de reformas.

Otro precedente es el que resolvió esa H. Corte Suprema en la Acción de Inconstitucionalidad 121/2017 misma que se emitió fallo en enero del año 2020 al declarar la invalidez en su totalidad los decretos por los que se expidieron la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México —así como sus reformas posteriores— y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, mismos que fueron aprobados por la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El Pleno consideró que no se respetaron los derechos de las minorías parlamentarias, debido a que no se convocó debidamente a la sesión extraordinaria en la que se aprobaron los dictámenes, se dispensó la distribución de los dictámenes sin que hubiera una justificación para hacerlo y se publicó el artículo Sexto Transitorio con un texto distinto al que fue aprobado por la Asamblea. A juicio de ese H. Tribunal tales deficiencias son de tal envergadura que llevan a la inconstitucionalidad total de las leyes impugnadas al no ser fruto de un genuino debate democrático al interior del seno legislativo.

Atendiendo a lo dicho en el apartado anterior y tal como se adelantó, en el caso concreto existieron deficiencias con potencial invalidatorio en el procedimiento legislativo de las normas reclamadas, pues se dio una afectación grave al principio de participación de las fuerzas políticas del Congreso Local en condiciones de libertad e igualdad. Por lo tanto, se estimó que debía declararse inconstitucional el decreto legislativo que dio lugar a tal norma modificatoria.

En otro orden de ideas, atendiendo a lo previsto en la normatividad aplicable a un procedimiento legislativo de creación de leyes, se advierten las siguientes reglas y principios de dicho procedimiento:



II LEGISLATURA

- a) Iniciativa. Es derecho de las diputadas y diputados el de iniciar leyes, decretos o presentar proposiciones o denuncias es un derecho.
- b) Turno. Una vez presentadas, las iniciativas de ley o decreto serán turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva, pasarán a la comisión o comisiones correspondientes, para análisis y dictamen.
- c) Dictamen. El dictamen correspondiente deberá presentarse dentro de los 45 días siguientes al de la fecha en que los hayan recibido; salvo prórroga debidamente fundamentada y aprobada por el Pleno.

Todo dictamen se compone de 4 partes fundamentales: preámbulo, antecedentes, considerandos y resolutivos. Deberá estar fundado, motivado y debe ser elaborado con perspectiva de género, usando lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. En su caso, deberá contener una valoración de impacto presupuestal.

- d) Discusión en Comisiones. Las Comisiones sesionarán ordinariamente por lo menos una vez al mes. La convocatoria deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta, dando a conocer el Orden del día con al menos 48 horas de anticipación y dando a conocer las iniciativas y proposiciones cuyo dictamen se vaya a discutir.

Únicamente se considerarán como extraordinarias, aquellas sesiones que se celebren fuera de las programadas previamente y en cuyo caso las iniciativas y proposiciones cuyo dictamen se vaya a discutir, deberá hacerse llegar junto con la convocatoria con al menos 24 horas de anticipación.

- e) Discusión en Pleno. Una vez discutido y una vez aprobado en Comisión, el dictamen objeto deberá ser remitido de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso para su

discusión dentro de las siguientes 48 horas posteriores a su distribución.

- f) Previo la discusión de cualquier dictamen, deberá distribuirse copias del mismo a todos los miembros del Pleno con una anticipación mínima de 48 horas a la sesión en que habrá de discutirse, si no se cumple con este requisito, el dictamen no podrá ser discutido en la sesión respectiva salvo que se dispense el procedimiento.
- g) Votación. Por lo que hace a la votación, se prevé que para que el Pleno pueda adoptar sus acuerdos o resoluciones deberá contar, al momento de la votación, con la mayoría de sus integrantes.
- h) Decreto. La resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la comisión o comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa, ley o decreto tendrá el carácter de decreto y se remitirá a la persona titular del Poder Ejecutivo para su publicación.

Adicionalmente, se dispone que todas las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los Diputados, excepto en aquellos casos en que las disposiciones legales aplicables señalen la aprobación por una mayoría calificada.

Detallado el marco normativo para el trabajo legislativo en este Congreso, debe advertirse que tal y como se ha afirmado, durante el proceso parlamentario seguido ante la comisión dictaminadora, no se convocó debidamente a la sesión extraordinaria en la que se aprobó el dictamen, no se distribuyó el proyecto de dictamen con la debida anticipación para su discusión ante el pleno, ni se dispensó la distribución de los dictámenes, todo lo que ordenan Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México en vigor, y sin que hubiera justificación alguna, para no hacerlo.

No existe, de esta manera, justificación alguna para que no se hubiere cumplido con los procesos normados en la Ley y el Reglamento para proteger el derecho de participación de los diputados, ni de someter su dispensa; máxime cuando tal aspecto incidió negativamente en los principios democráticos que deben sustentar el actuar del Poder Legislativo y el respeto a las reglas con las cuales deben conducirse; en particular, las que buscan proteger a las minorías. Lo anterior, en términos de una interpretación por analogía de los criterios jurisprudenciales P./J. 36/2009 y 37/2009, que son del tenor literal siguiente:

**Registro digital:** 167521

**Instancia:** Pleno

**Novena Época**

**Materia(s):** Constitucional

**Tesis:** P./J. 36/2009

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
Tomo XXIX, Abril de 2009, página 1109

**Tipo:** Jurisprudencia

DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO  
DE COLIMA. PARA  
SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE  
LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE.

El artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Colima prevé la dispensa de trámites legislativos en caso de notoria urgencia, la cual debe calificarse por las votaciones que para cada caso establece el capítulo XIV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad. Sin embargo, no basta la aprobación de la moción de dispensa por la votación requerida para que ésta proceda, pues acorde con el principio democrático que debe informar la labor legislativa, es necesario que se expongan las razones que llevan a calificar un asunto como urgente, las cuales no pueden considerarse como sustento del actuar de los legisladores si no contienen argumentos objetivos encaminados a reforzar la dispensa de trámites, debiendo existir, cuando menos, las siguientes condiciones: a) la existencia de determinados



II LEGISLATURA

hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto; b) la relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues de no hacerse así, ello traería consecuencias negativas para la sociedad; y, c) que tal condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que en ningún caso ello se traduzca en afectación a principios o valores democráticos.

Acción de inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008. Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 20 de noviembre de 2008. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José María Soberanes Díez.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 36/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

**Registro digital:** 167520

**Instancia:** Pleno

**Novena Época**

**Materia(s):** Constitucional

**Tesis:** P./J. 37/2009

**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXIX, Abril de 2009, página 1110

**Tipo:** Jurisprudencia

DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.



II LEGISLATURA

La circunstancia de que una propuesta de dispensa de trámites legislativos se apruebe por mayoría o unanimidad de votos, no es suficiente para convalidar su falta de motivación, máxime cuando incide negativamente en los principios democráticos que deben sustentar el actuar del Poder Legislativo. Además, las votaciones ocurridas durante el desarrollo del procedimiento no pueden servir como sustento para desestimar los conceptos de invalidez en los que se aduce la violación a los principios democráticos en un proceso legislativo.

Acción de inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008. Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 20 de noviembre de 2008. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José María Soberanes Díez.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 37/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

Todo lo cual, hace que el presente sea fundado, por lo que debe declararse la inconstitucionalidad del decreto reclamado.

3. El que se refiere a la **ilegal aprobación del orden del día** de la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, del día jueves 26 de mayo de 2022.

Al respecto, el concepto "orden del día" se define en el artículo 4 fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en el artículo 2 fracción XXXIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos que nos indican con precisión los órganos facultados para aprobar el orden del día de las sesiones del Congreso, y los cuales son del tenor literal siguiente:



II LEGISLATURA

## LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(...)

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

(...)

XXXIII. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Mesa Directiva o la Junta Directiva para ser tratados en una sesión o reunión;

(...)

## REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(...)

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

(...)

XXXIII. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Junta en coordinación con la Mesa Directiva y en su caso la Junta Directiva para ser tratados en una sesión;

(...)

De la lectura de estos artículos, se puede llegar a advertir respecto a una posible incompatibilidad jurídica, al dotar de facultades ambos dispositivos legales a órganos distintos, y en medidas diferentes. Sin embargo, siendo la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, jerárquicamente superior en el sistema jurídico mexicano que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta incompatibilidad jurídica se resuelve atendiendo a lo que señala la ley superior, en este caso, la Ley Orgánica.

Asimismo, en armonía con lo estipulado en el artículo 4 fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las fracciones XI y XII del artículo 29 del mismo ordenamiento jurídico, señalan que **es facultad de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, formular, cumplir, así como incorporar asuntos en el orden del día**, artículo que es del tenor literal siguiente:



H. LEGISLATURA

## **LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

(...)

*Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y en la presente ley y su reglamento.*

*La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, y tendrá las siguientes atribuciones:*

(...)

*XI. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;*

*XII. Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que la Comisión o Comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales;*

(...)

Dicho lo anterior, resulta necesario precisar que la aprobación ilegal del orden del día de la sesión ordinaria del día jueves 26 de mayo de 2022, se llevó a cabo el día miércoles 25 de mayo de 2022, en "Sesión virtual de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos", la cual es de dominio público y puede consultarse en el siguiente link de la plataforma digital YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=1u0As5IMiEY>.

Del análisis realizado al orden del día de las sesiones del Congreso de la Ciudad de México, así como de los órganos facultados para aprobarlo, y de lo acontecido en la referida "Sesión virtual de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos" del miércoles 25 de mayo de 2022, es posible concluir que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México en este caso





II LEGISLATURA

concreto actuó en contra de lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, pues carecía de facultades expresas para aprobar ese orden del día, tal como se advierte de la lectura de los artículos 26 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 76 del Reglamento, que a la letra dicen:

### **LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

*Artículo 26. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de Coordinación Política que reflejarán en su composición la paridad, la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo tiempo.*

*La Mesa Directiva del Congreso será electa por la mayoría de las y los Diputados presentes en el Pleno; se integrará con una o un Presidente, cuatro personas Vicepresidentes, dos personas Secretarías y dos personas Prosecretarios. Las y los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y solamente los Vicepresidentes y los Secretarios podrán ser reelectos.*

*(...)*

*Artículo 53. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:*

- I. Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, teniendo como base las agendas presentadas por los Grupos Parlamentarios, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y deliberaciones;*
- II. Impulsar el trabajo de las Comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos;*
- III. Proponer al Pleno el proyecto de reglamento que regirá la organización y funcionamiento de la vida interna del Congreso y demás unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los términos previstos en la presente ley y su reglamento, y*



II LEGISLATURA

- IV. Las demás que se derivan de esta ley, su reglamento y demás ordenamientos relativos.

En concordancia con lo estipulado en el artículo relacionado con anterioridad, el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, igualmente regula el proceso de integración y contenido del orden del día, donde se reitera que la facultad de realizar este proceso es de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, y no así de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, del Congreso de la Ciudad de México; pues haciéndolo como se hizo, se excluyó a las 4 personas Vicepresidentes, a las 2 personas Secretarías, y a las 2 personas Prosecretarías, que también forman parte de la Mesa Directiva, de este proceso de integración del orden del día. Dicho artículo, es del tenor literal siguiente:

#### **REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

(...)

*Artículo 76. La Mesa Directiva y la Junta integrarán el proyecto del orden del día de las sesiones que dará a conocer al Pleno con las propuestas que reciba oportunamente.*

(...)

4. El que se refiere a las deficiencias y violaciones graves e irreparables al proceso parlamentario seguido en la discusión del Dictamen ante el Pleno, que conoció de la iniciativa que dio origen al mismo, que provocan una irremediable anulación de sus efectos.

Lo anterior es así ya que durante el proceso parlamentario seguido ante Pleno de este Congreso, se violaron las reglas para su presentación y consecuente seguimiento, ello en razón a que fue debidamente anunciado por los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión Dictaminadora, sobre el retiro del dictamen para su posterior presentación, no obstante, ante ese trámite que se encuentra debidamente reglado en la normatividad aplicable a este Congreso, de forma inexplicable, injustificada e infundada, el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, presidió y le restó valor alguno a la legítima solicitud hecha por la



## II LEGISLATURA

referida junta directiva, con lo cual, se impidió que en el seno de la comisión se hicieran los ajustes de fondo, forma y procedimiento que resultaran suficientes para su debida presentación ante el Pleno, lo cual derivó en la desafortunada consecuencia de su aprobación bajo un procedimiento inadecuado, y un fondo totalmente desapegado al marco constitucional; violación que es de tal envergadura que llevan a la inconstitucionalidad total del decreto impugnado, al no ser fruto de un debido proceso y consecuente genuino debate democrático al interior del seno legislativo, lo cual es violatorio de la Constitución Federal, y por ende con un potencial invalidatorio en el procedimiento legislativo del instrumento impugnado, que da lugar a declarar su inconstitucionalidad.

Lo anterior es así, ya que como se acredita con el caudal probatorio adjunto al presente, se podrá corroborar la existencia de la solicitud del retiro del dictamen ante el Pleno, que se adjunta en original el acuse, mismo que en el presente es marcada como "ANEXO 2", presentado por acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión Dictaminadora, la cual de forma ilegal fue negada por parte del Presidente de la Mesa Directiva del Pleno; a lo cual, como se ha señalado, es un procedimiento legislativo previsto en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en los términos siguientes:

### **REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

(...)

*Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica los siguientes asuntos:*

- I.      Iniciativas de Ley o de decreto;*
- II.     Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos de Ley o decreto;*
- III.    Sobre la Cuenta Pública;*
- IV.    Proposiciones con punto de acuerdo, y*
- V.     Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local.*



II LEGISLATURA

Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que a su vez enviarán de manera inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Junta, hasta antes de que se discuta por el Pleno. Para ello, su Junta Directiva deberá acordarlo. La Comisión que retire un dictamen tendrá hasta dos sesiones para volverlo a presentar.

Las Comisiones deberán remitir el dictamen de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que su vez enviarán de manera inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta y al Presidente de la Comisión Permanente para su discusión dentro de la siguiente sesión de Pleno.

La Coordinación de Servicios Parlamentarios, deberá distribuir por lo menos de manera electrónica el dictamen aprobado por la o las comisiones a todas y todos los Diputados integrantes del Congreso, e efecto de que se encuentren en posibilidades de conocer el contenido del asunto a deliberar, sin que pueda dispensarse su distribución ante el Pleno.

(...)

Como se advierte, el precepto en cita contempla el derecho procesal para el retiro de un dictamen, por parte de la Comisión que lo hubiere emitido, lo cual debe realizarse hasta antes de que se discuta por el Pleno, para lo cual resulta suficiente que su Junta Directiva así lo acuerde, cuya consecuencia es que la Comisión que retire el dictamen tenga hasta dos sesiones para volverlo a presentar.

Por su parte, el artículo 192 del propio Reglamento, señala como puede ser tomada esta decisión por parte de la Junta Directiva, precepto que a la letra dice:

#### **REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

(...)

Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a su denominación.



II LEGISLATURA

*La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se deriven conforme a su denominación, será a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén asignadas a otras Comisiones.*

***Los acuerdos de las Comisiones serán suscritos por la mayoría de las y los integrantes presentes en la sesión, en tanto que los acuerdos de la Junta Directiva serán suscritos por la mayoría.***

(...)

De tal suerte que como lo establece este precepto, **los acuerdos de las Comisiones serán suscritos por la mayoría de las y los integrantes presentes en la sesión, en tanto que los acuerdos de la Junta Directiva serán suscritos por la mayoría**, de lo cual claramente se advierte que en términos de estos dos preceptos antes referidos, es claro que la Junta Directiva requería de dos firmas para que el retiro de la iniciativa fuera procedente, circunstancia que en la especie aconteció tal y como se demuestra con el caudal probatorio antes referido.

No sobra señalar que el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno de este Congreso, carece de facultad alguna para la legalidad o exigibilidad de las determinaciones de las Juntas Directivas de las Comisiones, por lo que inobservar esta solicitud de retiro, realizada con la debida oportunidad y conforme a las exigencias previstas por la normatividad aplicable, y en su caso, apartarse de la legalidad del procedimiento, deviene en inconstitucional el decreto reclamado.

Por lo tanto, ante ese desapego procedimental que incidió en el fondo de la debida presentación del dictamen, es que se encuentra viciado de origen y por ende resulta inconstitucional el decreto reclamado, por desapegarse a las normas que previenen su emisión, que inciden de forma fundamental en lo sustantivo de su presentación.

Al respecto, se indica que es posible encontrar en el link de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=nNboJNenKac>, la primera parte de



II LEGISLATURA

la sesión ordinaria del día jueves 26 de mayo de 2022, video el cual también constituye un hecho notorio, con los alcances legales que hemos relacionado con anterioridad.

En este orden de ideas, a partir del minuto 1:50:09 del link relacionado en el párrafo inmediato anterior, es posible observar y escuchar al Diputado Ricardo Rubio Torres, hacer uso de la voz para presentar un oficio signado por la Diputada Maxta Iraís González Carrillo, en su carácter de Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, y por su propia persona, Diputado Ricardo Rubio Torres, en su carácter de Secretario de la misma comisión, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado Héctor Díaz Polanco, para retirar del orden del día, el dictamen con proyecto de decreto relativo a la iniciativa por la que se reformaban diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, es posible observarse con posterioridad, cómo a partir del minuto 2:58:37, que el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, emite de manera arbitraria, sin fundar ni motivar su resolución, la decisión de ignorar y rechazar dicha solicitud de retiro del orden del día del dictamen que reformaba diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, y continuar con el proceso legislativo, sin importarle que estuviera viciado de origen por violaciones al propio procedimiento parlamentario.

**b. VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TRANSGREDIENDO EL PARÁMETRO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 35, 41, 49, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES VIOLA LA DIVISIÓN DE PODERES Y LA AUTONOMÍA DEL IECM.**

El principio de legalidad y seguridad jurídica implica una autentica subordinación de la actuación de las autoridades al derecho, esto es, las autoridades, cualquiera que sea la esfera de su competencia, sólo pueden



## II LEGISLATURA

actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; por tanto, únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en las leyes y reglamentos que regulan sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de éstas, se encuentra subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento.

En mérito de lo anterior, es importante señalar que, a lo largo de la historia democrática de nuestro país, se han venido edificando diversos precedentes por parte de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a los principios rectores del ejercicio de la función electoral y el papel de las autoridades electorales dentro de un estado constitucional de derecho, reforzando criterios que hoy más que nunca deben remitirnos a la fuerza gravitacional del precedente, tales como el de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales que implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural, lo cual es relativo a la siguiente tesis:

### **"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.**

*La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el*



■ LEGISLATURA

*ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.”<sup>7</sup>*

La reforma electoral de 2014 tuvo dentro de sus principales objetivos transformar las instituciones y las reglas electorales que regían los procesos democráticos en México para responder a la realidad que vivía el país, a partir, entre otros, del fortalecimiento de la autoridad electoral a nivel federal y del establecimiento de una nueva coordinación entre ésta y los organismos locales. Se buscó modernizar el sistema electoral para incrementar la calidad con la que se organizaban los comicios federales y locales, así como para garantizar los principios rectores que se debían observar en todos los procesos en territorio nacional, los cuales a saber son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, publicidad y objetividad.

Por su parte, los OPLES, previstos en los artículos 41, 116 y 122 Constitucionales, los cuales reconocen el ejercicio de la función electoral estatal y en la Ciudad de México a cargo de autoridades electorales con autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, tal y como lee de la siguiente transcripción:

<sup>7</sup> Pleno, Novena Época, Tesis: P./J. 144/2005. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 111.





II LEGISLATURA

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

(...)

V, La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

(...)

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;



H LEGISLATURA

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y

11. Las que determine la ley

(...)

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

(...)

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

(...)

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:

(...)

6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

(...)

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

(...)



II LEGISLATURA

*Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.*

(...)

*IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales correspondientes."*

(...)

Como se advierte de los artículos transcritos, se dio una redistribución de facultades entre ambas instancias —INE y OPLES— con el fin de homogeneizar procesos de organización electoral y, por lo tanto, mejorar la calidad de esos procesos en los ámbitos federal y local, incluyendo la reducción o eliminación de posibles injerencias de actores ajenos a los comicios. Además, se le otorgó al INE la competencia de homologar los estándares con los que se organizan las elecciones federales y estatales.

Así es claro que, el nuevo sistema electoral que se crea con la reforma de 2014, se soporta de forma preponderante en el INE, al que se le asignan nuevas atribuciones de organización electoral en el ámbito local, además de hacerse cargo de la organización de los comicios federales. Siendo que el INE se convierte en el único órgano que en los casos previstos en la Constitución y en la ley, puede intervenir en el marco de actuación de los OPLES.

En otras palabras, la reforma estableció un sistema de coordinación entre la autoridad electoral nacional y los organismos locales. Esto es, se reconoció la autonomía del INE y de los OPLES, pero se construyó un parámetro de coordinación, e incluso subsunción de los organismos electorales estatales al instituto nacional. Así, se creó un modelo dual; de un organismo nacional electoral independiente y autónomo, y organismos electorales locales que gozan también de autonomía.



## II LEGISLATURA

Por lo que hace al régimen constitucional de la Ciudad, es importante destacar que desde los trabajos legislativos del Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, que hizo posible que a partir del quince de septiembre del mismo año se instalara la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, con el objeto de redactar lo que sería la primera Constitución que tuviera esta Ciudad, misma que sería publicada en Gaceta Oficial el cinco de febrero del dos mil diecisiete, se procuró, dotar a la Ciudad de un texto que estuviera a la vanguardia no solo en términos de garantismo jurídico sino de mecanismos de participación política que inmiscuyeran en temas de gobernanza, rendición de cuentas y políticas públicas a la sociedad civil y que desde luego fuera congruente con la ingeniería constitucional que se había gestado en nuestro país desde el dos mil once, es así que al entrar en vigor la Reforma Política de la Ciudad de México, se dotó a la ciudad de autonomía constitucional, y al promulgarse la Constitución de la Ciudad de México se modificó el nombre a Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Ahora bien, la Constitución al momento de establecer que la función electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, no sólo impone límites a las autoridades electorales para evitar que su actuación irrumpa con estos principios, sino que también es un llamado hacia otros poderes o, incluso, hacia los partidos, para abstenerse de realizar cualquier actuación que pudiera comprometer su cumplimiento por parte de las autoridades electorales.

Existen disposiciones constitucionales al respecto, tanto a nivel federal como local, así como leyes federales y locales, las cuales son:

### ***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

*Artículo 41. (...)*

*(...)*

*V. (...)*

*(...)*



## II LEGISLATURA

*Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:*

- 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;*
- 2. Educación cívica;*
- 3. Preparación de la jornada electoral;*
- 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;*
- 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;*
- 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;*
- 7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;*
- 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;*
- 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;*
- 10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y*
- 11. Las que determine la ley*

### **Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales**

#### **Artículo 104.**

*1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:*

- a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto;*
- b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos;*
- c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;*



II LEGISLATURA

- d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
- e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;
- f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;
- g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto;
- h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales;
- i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;
- j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate;
- k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto;
- l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se trate;
- m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto;
- n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto;



## II LEGISLATURA

- ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;*
- o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;*
- p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;*
- q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás disposiciones que emita el Consejo General, y*
- r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente.*

### **Constitución Política de la Ciudad de México**

Artículo 25. (...)

Apartado A (...)

(...)

5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la ley.

6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de esta Constitución y tratados internacionales.

Artículo 26:

A. Gestión, evaluación y control de la función pública

(...)



**II LEGISLATURA**

2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley.
3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas.
5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la cultura ciudadana mediante los programas, mecanismos y procedimientos que la ley establezca.

**Artículo 46:**

**A. Naturaleza jurídico-política**

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:

- e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;

**B. Disposiciones comunes**

1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones. Contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las leyes y estatutos jurídicos garantizarán que exista equidad de género en sus órganos de gobierno. Tendrán facultad para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia, así como las demás que determinen esta Constitución y las leyes de la materia.

**Artículo 50.**





## II LEGISLATURA

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.
2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la Ciudad.
3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
4. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia.

### **Código de Instituciones y Procedimientos Electorales**

Artículo 30. El Instituto Nacional y el Instituto Electoral son las autoridades electorales depositarias de la función estatal de organizar las elecciones locales en la Ciudad de México; asimismo, el Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional especializado para la solución de controversias en esta materia, cuyas competencias se establecen en la Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local, la Ley Procesal, este Código y demás leyes aplicables a cada caso en concreto.

Artículo 31. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, son órganos de carácter permanente y profesionales en su desempeño, gozan de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus



## II LEGISLATURA

decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y este Código.

*Artículo 32. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y su domicilio estará en la Ciudad de México. Su patrimonio es inembargable y se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, las partidas del presupuesto que anualmente apruebe el Congreso de la Ciudad de México y demás ingresos que reciban de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto. En ningún caso, podrán recibir donaciones de particulares.*

*Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no formarán parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme al presente Código.*

*Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto.*

*Artículo 34. Para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con su ámbito de competencia, establecido en la Constitución Federal, Leyes Generales, la Constitución Local y este Código, el Instituto Electoral debe:*

- I. Observar los principios rectores de la función electoral.*
- II. Velar por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones electorales, debiendo sancionar en el ámbito de sus atribuciones cualquier violación a las mismas; y*
- III. Limitar su intervención en los asuntos internos de los partidos políticos, conforme lo dictan las normas aplicables.*

*Artículo 35. Las autoridades electorales podrán requerir el apoyo y colaboración de los órganos de gobierno y autónomos de la Ciudad de*



H. LEGISLATURA

México, así como de las autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, para lo cual se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones de acuerdo a lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación. Sus fines y acciones se orientan a:

- I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
- II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
- III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
- IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías;
- V. Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
- VI. Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;
- VII. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
- VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía;
- IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y
- X. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones;



#### ■ LEGISLATURA

*XI. Impulsará la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y comunicación.*

*La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, en los términos que establezca el Instituto Nacional.*

*Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.*

*Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:*

- a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General, el Reglamento de Elecciones, establezca el Instituto Nacional;*
- b) Reconocer y garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la ministración oportuna del financiamiento público a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México;*
- c) Registrar a los Partidos Políticos locales y cancelar su registro cuando no obtengan el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones de la Ciudad de México en las que participen, así como proporcionar esta información al Instituto Nacional para las anotaciones en el libro respectivo;*
- d) Desarrollar e implementar, las estrategias, los programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y construcción de ciudadanía en la Ciudad de México aprobados por su Consejo General, así como suscribir convenios en esta materia con el Instituto Nacional y demás entes que tengan interés en fomentarlas; Asimismo, establecer el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en los procesos de participación ciudadana, así como en la toma de decisiones públicas que afecten su desarrollo y entorno.*



**H. LEGISLATURA**

- e) *Orientar a los ciudadanos de la Ciudad de México para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;*
- f) *Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral y determinará con base en los criterios de población y configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica las circunscripciones en las demarcaciones territoriales;*
- g) *Imprimir los documentos y producir los materiales electorales que se utilizarán en los procesos electorales locales, en términos del Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;*
- h) *Verificar que las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales en la Ciudad de México cumplan con los lineamientos que emita el Instituto Nacional;*
- i) *Garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral en la Ciudad de México, de acuerdo al Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;*
- j) *Garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés;*
- k) *Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones de Jefatura de Gobierno, alcaldías, concejales, y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos;*
- l) *Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral local, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;*
- m) *Implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones de la Ciudad de México, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;*
- n) *Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones y emitir la declaración de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría en las*



## II LEGISLATURA

elecciones de Jefe de Gobierno, alcaldías, concejales y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México;

ñ) Fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos erogados por las agrupaciones políticas locales y las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local.

o) Asignar a las diputaciones electas del Congreso de la Ciudad de México y los concejales electos en cada alcaldía, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale este Código;

p) Garantizar la realización, difusión y conclusión de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana, así como de los mecanismos de participación ciudadana y la consulta sobre el presupuesto participativo conforme a la Ley de Participación.

q) Convenir con el Instituto Nacional para que éste asuma la organización integral de los procesos electorales de la Ciudad de México, en los términos que establezcan las leyes respectivas.

r) Realizar campañas de difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, que explique la figura de candidatos sin partido y el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano previo y durante el periodo de recolección de éste.

s) Determinar el uso parcial o total de sistemas de votación electrónica en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana para recibir y computar la votación de la ciudadanía de la Ciudad de México, incluyendo la residente en el extranjero, con base en las medidas de certeza y seguridad que estime pertinentes y, en su caso, en los parámetros que para los procesos electorales establezca la Ley General y el Instituto Nacional a través de sus acuerdos.

Además, en los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral, además, vigilará y ejecutará el cumplimiento, acreditación de los requisitos, organización, desarrollo, publicación y validación de los resultados derivados de los mismos.



## II LEGISLATURA

*Por otra parte, el Instituto Electoral, promoverá y velará por el cumplimiento de otros mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación, como la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos de la o el Alcalde y las o los concejales, las organizaciones ciudadanas, las asambleas ciudadanas, así como los observatorios ciudadanos, los comités y comisiones ciudadanas temáticas, la silla ciudadana y el presupuesto participativo.*

*Las atribuciones del Instituto Nacional que, en su caso, se deleguen por disposición legal o por acuerdo de su Consejo General, consistentes en:*

- a) Fiscalizar los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y candidatos;*
- b) Impartir la capacitación electoral y designar a los funcionarios de las Mesas Directivas.*
- c) Ubicar las casillas electorales;*
- d) Determinar la geografía electoral, así como el diseñar y determinar los distritos electorales y la división del territorio de la Ciudad de México en secciones electorales;*
- e) Elaborar el Padrón y la lista de electores de la Ciudad de México; y*
- f) Aplicar las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.*

*Las atribuciones adicionales para:*

- a) Aplicar dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional;*
- b) Organizar los mecanismos de participación ciudadana de la Ciudad de México;*
- c) Organizar la elección de los dirigentes de los Partidos Políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la legislación local de la materia;*



## II LEGISLATURA

- d) Llevar a cabo el registro las candidaturas, de convenios y gobiernos de Coalición, fusión y otras formas de participación o asociación para los procesos electorales de la Ciudad de México;
- e) Establecer las bases y criterios a fin de brindar atención e información a las y los visitantes extranjeros interesados en conocer el desarrollo de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en cualquiera de sus etapas;
- f) Llevar la estadística electoral local y de los mecanismos de participación ciudadana, así como darla a conocer concluidos los procesos;
- g) Colaborar con el Instituto Nacional para implementar los programas del personal de carrera que labore en el Instituto Electoral, de conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.
- h) Elaborar, aprobar e implementar los programas del personal de la rama administrativa del Instituto;
- i) Elaborar y difundir materiales y publicaciones institucionales relacionadas con sus funciones;
- j) Conocer del registro y pérdida de registro de las agrupaciones políticas locales;
- k) Sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores que se instauren por faltas cometidas dentro o fuera de los procesos electorales, en términos de la ley local de la materia;
- l) Tramitar los procedimientos especiales sancionadores, integrar los expedientes de los mismos y remitirlos al Tribunal Electoral para su resolución, y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores, en términos de la ley local de la materia;
- m) Remitir al Instituto Nacional las impugnaciones que reciba en contra de actos realizados por ese instituto relacionados con los procesos electorales de la Ciudad de México, para su resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme lo determina la Constitución Federal y las leyes generales de la materia;
- n) Aplicar las sanciones a los Partidos Políticos por el incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales, conforme a lo establecido en este Código;





## II LEGISLATURA

ñ) Implementar los programas de capacitación educación cívica y construcción de ciudadanía a los órganos de representación ciudadana en la Ciudad de México;

o) Celebrar convenios de apoyo, colaboración y coordinación con el Instituto Nacional y demás entes públicos federales y locales para la realización de diversas actividades relacionadas con sus atribuciones;

p) Ejercer la función de oficialía electoral; y

q) Difundir durante los procesos electorales en los tiempos del Estado que le corresponden y que sean de mayor audiencia, promocionales que vayan encaminados a incentivar el voto, en donde se resalte la secrecía y la libertad para ejercerlo, así como las restricciones relativas a la compra o coacción del voto.

r) Las demás atribuciones que establezcan, la Constitución Local y las leyes locales no reservadas expresamente al Instituto Nacional.

*Artículo 44. Durante el periodo de su encargo, los Consejeros Electorales deberán acatar las prescripciones siguientes:*

*I. Desempeñar su función con autonomía, probidad e imparcialidad;*

*II. Recibir la retribución y prestaciones señaladas en el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral. Su remuneración será similar a la de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;*

*III. No podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo, cargo o comisión de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México o de particulares, salvo los casos no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación, de beneficencia o periodísticas, así como las que deriven de su ejercicio de libertad de expresión;*

*IV. Podrán promover y divulgar la cultura democrática, dentro o fuera del Instituto Electoral, observando los principios rectores de su actividad;*

*V. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que reciban en función de su cargo, particularmente en materia de fiscalización y procedimientos sancionadores o de investigación, observando los principios de reserva y confidencialidad previstos en las Leyes en materia de transparencia y protección de datos personales.*



H. LEGISLATURA

VI. Observar los principios de reserva y confidencialidad previstos en las Leyes en materia de transparencia y protección de datos personales;

VII. Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en que los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar un beneficio para las y los Consejeros Electorales, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que las y los Consejeros electorales o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:

I. Implementar las acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes Generales y el presente Código.

II. Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los órganos competentes del Instituto Electoral, lo siguiente:

a) El Reglamento Interior del Instituto Electoral;

b) Las normas que sean necesarias para hacer operativas las disposiciones del Estatuto del Servicio Profesional Nacional, Reglamento de Elecciones y demás disposiciones que emanen de las leyes locales en la materia;

c) Los reglamentos para el funcionamiento de la Junta Administrativa, sesiones del Consejo General, Comisiones, Comités y Consejos Distritales, integración y funcionamiento de los Consejos Distritales; liquidación de las Asociaciones Políticas; trámite y sustanciación de quejas y procedimientos de investigación; y registro de partidos políticos locales y de organizaciones ciudadanas;

d) La normatividad y procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana; así como para la elección de los dirigentes de los partidos políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas.

El Instituto promoverá el uso e implementación de instrumentos electrónicos o tecnológicos con el fin de fomentar la participación democrática de los ciudadanos, con base en las medidas de certeza y seguridad que estime



## II LEGISLATURA

*pertinentes y, en su caso, en los parámetros que para los procesos electorales establezca la Ley General y el Instituto Nacional a través de sus acuerdos.*

*e) Los programas, materiales, estrategias, y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía. Dichas acciones deberán estar orientadas a promover la plena inclusión y participación social, y el ejercicio de los derechos político electorales.*

*Así mismo, aprobará la normatividad relacionada con el empleo de sistemas e instrumentos tecnológicos de votación y voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;*

*f) La normatividad que mandata la legislación local en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, entre otras; y*

*g) Los acuerdos y la normativa que sea necesaria para el ejercicio de las funciones que le delegue el Instituto Nacional; para ello podrá conformar las Comisiones provisionales y tomar las medidas administrativas necesarias para la delegación, atracción, asunción y reasunción de funciones, así como, en su caso, para auxiliar a la autoridad electoral nacional.*

*III. Presentar al Congreso de la Ciudad de México y en su caso al Congreso de la Unión, propuestas de reforma en materia electoral y de participación ciudadana en temas relativos a la Ciudad de México;*

*El Instituto Electoral de la Ciudad de México expedirá la normatividad relativa al procedimiento para el ejercicio de esta atribución la que contendrá, al menos, los siguientes aspectos:*

*a) Funcionarios o instancias legitimados para promover.*

*b) Presentación del anteproyecto y estructura del mismo.*

*c) Turno del anteproyecto a la Comisión que corresponda en virtud del tema.*

*d) Dictamen u observaciones al anteproyecto.*

*e) En caso de dictamen favorable, turno a la Comisión de Normatividad y Transparencia para aprobar su remisión al Consejo General.*

*f) En su caso, presentación del dictamen y proyecto de iniciativa al Consejo General.*



**II LEGISLATURA**

g) Aprobación por parte del Consejo General para remitir la iniciativa al Congreso de la Ciudad de México o al Congreso de la Unión, según corresponda.

IV. Designar a quien presida e integre las Comisiones Permanentes, Provisionales y Comités;

V. Crear Comisiones Provisionales y Comités para el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral;

VI. Autorizar las licencias y resolver sobre la procedencia de las excusas de las Consejeras y los Consejeros Electorales;

VII. Aprobar, cada tres años, el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral, con base en la propuesta que presente la respectiva Comisión Provisional y supervisar su cumplimiento;

VIII. Aprobar a más tardar el último día de octubre de cada año, los proyectos de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual del Instituto Electoral que proponga el Consejero Presidente para el siguiente ejercicio fiscal; ordenando su remisión al Jefatura de Gobierno para que se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México; así como solicitar los recursos financieros que le permitan al Instituto Electoral cumplir con las funciones que le sean delegadas por el Instituto Nacional o por disposición legal;

IX. Aprobar, en su caso, en enero de cada año el ajuste al Presupuesto de Egresos y al Programa Operativo Anual del Instituto Electoral, con base en la propuesta que le presente la Junta Administrativa, por conducto de su presidente;

X. Ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a los órganos del Instituto Electoral;

XI. Nombrar a propuesta del Consejero Presidente de conformidad a los criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Elecciones:

a) A las y los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Direcciones Ejecutivas por el voto de las dos terceras partes de las y los Consejeros Electorales; y

b) A las y los titulares de las Unidades Técnicas, por el voto de las dos terceras partes de las y los Consejeros Electorales;

c) Se deroga.



## II LEGISLATURA

XII. *Remover, por mayoría calificada del Consejo General a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, y las Unidades Técnicas;*

XIII. *Conocer y opinar respecto a los informes que deben rendir las Comisiones Permanentes y Provisionales, los Comités, la Junta Administrativa, el Consejero Presidente y los titulares de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa;*

XIV. *Aprobar o rechazar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución que, respectivamente, propongan las Comisiones, los Comités, la Junta Administrativa, la presidencia del Consejo y las titularidades de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como la Contraloría Interna y, en su caso, ordenar el engrose que corresponda;*

XV. *Requerir a través del Secretario del Consejo, informes específicos a las áreas del Instituto Electoral;*

XVI. *Resolver en los términos de este Código, sobre el otorgamiento o negativa de registro de Partido Político local, Agrupación Política o Candidatos sin partido. Y de la acreditación de los Partidos Políticos locales.*

XVII. *Determinar el financiamiento público para los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, en sus diversas modalidades;*

XVIII. *Otorgar los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de las representaciones de los Partidos Políticos;*

XIX. *Garantizar a los Partidos Políticos y las Candidaturas sin partido el ejercicio de sus derechos y asignación de las prerrogativas que les corresponden.*

XX. *Vigilar que las Asociaciones Políticas y Candidaturas sin partido cumplan las obligaciones a que están sujetas, contenidas en este Código, la Ley General de Partidos Políticos, así como los Lineamientos que emita el Consejo General para que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, incluyendo las obligaciones relativas al principio constitucional de paridad de género.*

XXI. *Formular, en su caso, la propuesta de división del territorio de la Ciudad de México en Distritos Electorales uninominales locales y proponer, dentro de cada uno, el domicilio que les servirá de cabecera, para remitirlo a la consideración del Instituto Nacional.*



**H LEGISLATURA**

XXII. Formular la división de circunscripciones de las demarcaciones territoriales a efecto de establecer la representación de los Concejales por cada alcaldía, basada en lo establecido en las fracciones I, II y III del numeral 10, inciso A del artículo 53 de la Constitución Local, en criterios de configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica, considerando niveles socioeconómicos de las colonias y pueblos originarios que las conformen.

XXIII. Aprobar el marco geográfico para los procesos de participación ciudadana;

XXIV. Designar para los procesos electorales a los Consejeros Distritales;

XXV. Resolver sobre los convenios de Fusión, Frente, Coalición o Candidatura Común que celebren las asociaciones políticas;

XXVI. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral presenten los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido, así como el Convenio de Coalición de Gobierno, señalado en este Código.

XXVII. Aprobar previo cumplimiento de los requisitos legales, el registro de las candidaturas a Jefe de Gobierno y las listas de candidatos a Diputados de representación proporcional y, en forma supletoria, a los candidatos a Diputados de mayoría relativa y a Alcaldes;

XXVIII. Determinar los topes máximos de gastos de campaña y precampaña;

XXIX. Aprobar el formato de boleta electoral impresa que será utilizada por la ciudadanía residente en el extranjero para la elección de la Jefatura de Gobierno, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales electorales; así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional para la recepción del voto. En general, proveer lo necesario para su cumplimiento. En caso de que se instrumente el voto electrónico, aprobar el modelo de boleta electoral electrónica, documentación, instructivos, herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del voto electrónico.

XXX. En su caso, autorizar el uso parcial o total de sistemas e instrumentos en los procesos electorales y de participación ciudadana, con base en la propuesta que le presente la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística;



## II LEGISLATURA

XXXI. Aprobar, en coordinación con el Consejo General del Instituto Nacional para la asunción de la organización integral, el formato de boleta electoral impresa, boleta electoral electrónica, que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de la Jefatura de Gobierno, así como el instructivo para su uso, las herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del voto electrónico, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales electorales; así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional para la recepción del voto de los ciudadanos residentes en el extranjero. En general, proveer lo necesario para su cumplimiento.

Para los efectos del párrafo anterior, se podrán celebrar convenios con autoridades federales, instituciones académicas, así como con organizaciones civiles para la promoción del voto;

XXXII. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales, que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo cada tipo de estudios en la Ciudad de México;

XXXIII. Determinar la viabilidad de realizar conteos rápidos y ordenar su realización con base en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, tratándose de las elecciones de Diputaciones al Congreso Local y de Alcaldías. Será obligatoria su realización en el caso de la elección de Jefatura de Gobierno.

XXXIV. Efectuar el cómputo total de las elecciones de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones de representación proporcional, Alcaldías y Concejales de representación proporcional, así como otorgar las constancias respectivas;

XXXV. Emitir los acuerdos generales, y realizar el cómputo total de los procesos de participación ciudadana, conforme a lo previsto en la normatividad de la materia;

XXXVI. Aprobar los informes anuales sobre la evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y barrios originarios, y ordenar su remisión al Congreso de la Ciudad de México y a la Jefatura



## II LEGISLATURA

de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo previsto en la normatividad de la materia;

XXXVII. Vigilar el cumplimiento de las reglas sobre el uso, características y colocación de propaganda electoral, así como su oportuno retiro;

Ordenar, a solicitud de los Partidos Políticos, Coaliciones o Candidatos sin partido, la investigación de hechos que afecten de modo relevante los derechos de los Partidos Políticos, Coaliciones o Candidatos sin partido en los procesos electorales, conforme a lo establecido en la Ley General y este Código;

XXXIX. Sancionar las infracciones en materia administrativa electoral;

XL. Emitir la declaratoria de pérdida de registro de Partido Político local o Agrupación Política local;

XLI. Aprobar las bases y lineamientos para el registro de Organizaciones Ciudadanas, conforme a lo establecido en la Ley de Participación;

XLII. Aprobar el Programa Anual de Auditoría que presente la persona titular de la Contraloría Interna;

XLIII. Aprobar, en su caso, por mayoría de votos, la solicitud al Instituto Nacional para que asuma la organización integral, total o parcial del proceso electoral respectivo, conforme a lo establecido en la Ley General;

XLIV. Solicitar al Instituto Nacional atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia del Instituto Electoral, cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación, en términos del inciso c) del Apartado C, de la base V del artículo 41 de la Constitución Federal;

XLV. Instruir el ejercicio de las facultades delegadas por el Consejo General del Instituto Nacional sujetándose a lo previsto por la Ley General, la Ley de Partidos, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que se emitan;

XLVI. Para promover los juicios constitucionales a que se refiere el artículo 36, Apartado C, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Local, en los asuntos de su competencia y en los términos, plazos y procedimientos que establezca la ley de la materia.

XLVII. Establecer los términos en los que el Instituto Electoral deberá asumir y desarrollar las funciones de fiscalización que sean delegadas por el





II LEGISLATURA

*Instituto Nacional, observando los lineamientos que a efecto emita la referida autoridad nacional.*

*XLVIII. Resolver el Recurso de Inconformidad del Procedimiento Laboral Disciplinario de los integrantes del Servicio Profesional Electoral; y*

*XLIX. Desempeñar las atribuciones que le confiere el Estatuto del Servicio en relación a la gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional.*

*L. Designar al área u órgano del Instituto Electoral que fungirá como Órgano de Enlace para asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como al funcionario que fungirá como autoridad instructora para efectos del Procedimiento Laboral Disciplinario previsto en el Estatuto del Servicio;*

*LI. Aprobar a propuesta de la Junta Administrativa, la estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, y*

*LII. Las demás señaladas en este Código.*

A partir de estas consideraciones previas, se puede argumentar que el Poder Legislativo de la Ciudad de México con la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México obstruye el adecuado ejercicio y **atenta directamente contra la autonomía e independencia** del Instituto Electoral de la Ciudad de México, toda vez que las autoridades electorales ejercen la función estatal de organizar elecciones y, en el caso específico del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ejerce, además, la función estatal de organizar mecanismos de participación ciudadana de forma permanente.

El ejercicio de esas funciones estatales, debe realizarse con plena **autonomía, independencia**, imparcialidad y en estricto apego a la normativa aplicable al caso, sin tener que acatar o estar sometidos a determinaciones provenientes de otros poderes del Estado o cualquier sujeto ajeno, incluidos los propios partidos políticos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-RAP-0020-2022 relativo a los ajustes en el presupuesto que el INE realizó para realizar el proceso de revocación de mandato, dispuso que "las medidas de racionalidad y disciplina del gasto, así como sus respectivas metas de ahorro para el cumplimiento de las



## II LEGISLATURA

actividades que tiene encomendadas, constituyen determinaciones que corresponde ejercer de forma exclusiva al INE en ejercicio de su autonomía presupuestal y de libertad de gestión, por lo que, en manera alguna se le puede vincular a partir de un medio de impugnación como el que se resuelve, a adoptar decisiones específicas sobre la manera en que debe ejercer su presupuesto como lo pretende el actor.

En efecto, la Sala Superior ha dispuesto que la autonomía presupuestal de un órgano del Estado reside en la facultad que el Constituyente decidió otorgarle para realizar una estimación de los recursos económicos que requiere para realizar las actividades tendentes al cumplimiento de los fines que constitucionalmente tiene encomendados, así como para realizar las actividades y gestiones necesarias para allegarse de estos y ejercerlos en un marco de discrecionalidad que resulte acorde con las reglas que rigen el ejercicio del gasto público dentro de los parámetros constitucionales previstos para ese efecto.

La autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los órganos que cuentan con esa calidad reconocida en la Constitución Federal, ejerzan sus funciones con plena independencia, pero siempre condicionado al cumplimiento de sus fines. Tal como lo sostiene la jurisprudencia P./J.83/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES".

El máximo tribunal en la materia electoral refiere que para el INE como organismo autónomo – al igual que el Instituto Electoral de la Ciudad de México - tanto en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se vincula a los ejecutores de gasto a administrar los recursos de sus presupuestos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, en el entendido que su ejercicio será evaluado por las instancias técnicas del orden federal o local.



## II LEGISLATURA

En el caso que nos ocupa, el IECM, como autoridad administrativa electoral local, como organismo constitucional autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento, con autonomía técnica y de gestión, así como la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, el Consejo General aprueba anualmente su proyecto de presupuesto y aprobado lo remite al titular del ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

En términos del artículo 5, 7, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, permite a los organismos autónomos como el IECM, la calidad de ejecutor de gasto, y por ende, con autonomía presupuestaria, para, entre otros: i) aprobar su proyecto de presupuesto de egresos y enviarlos al Ejecutivo para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos; ii) Ejercer sus presupuestos sin sujetarse a las disposiciones generales, pero observando las normas del ordenamiento de referencia; iii) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos, y iv) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos.

Es claro que nuestro sistema jurídico prevé alternativas dirigidas a que los órganos ejecutores del gasto, en ejercicio de su autonomía de gestión presupuestal, realicen las adecuaciones necesarias para cumplir con sus funciones constitucionales y con los programas prioritarios que tengan encomendados. Estas medidas alternativas para el cumplimiento de sus funciones consisten, en esencia, en las adecuaciones presupuestales internas, externas, y subsecuentes.

Por ello, las adecuaciones al presupuesto consisten en medidas encaminadas a mejorar el cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo, comprendiendo modificaciones a las estructuras (administrativa, funcional y programática, económica y geográfica), modificaciones a los calendarios de presupuesto, así como la ampliación y reducciones liquidas al presupuesto de egresos o a los flujos de efectivo correspondientes; mientras que, la austeridad y disciplina presupuestaria responde a la lógica de racionalizar los recursos asignados, sin comprometer el cumplimiento de los fines de los órganos del Estado.



II LEGISLATURA

De modo que, si la naturaleza de la iniciativa y del propio dictamen es con fines de ahorro en el ejercicio del gasto, **debe ser el propio organismo electoral constitucional autónomo quien deba establecer y regir su trabajo a partir de esos principios** y no como se pretende al reducir áreas operativas de trabajo o imponer cargas excesivas a otras áreas que carecen de personal capacitado para lograr los objetivos constitucionalmente encomendados.

Lo anterior en función de las características fundamentales que rigen a los organismos constitucionalmente autónomos relativas a la facultad para elaborar sus políticas, planes y programas respecto de las funciones a su cargo y particularmente con la autonomía financiera, presupuestal y administrativa que permite definir sus necesidades presupuestales para administrar y emplear sus recursos tanto humanos, como materiales y económicos.

Por otra parte, el Consejo General del IECM es su principal órgano de dirección y, por consiguiente, el principal responsable de que el Instituto cumpla con las atribuciones y funciones conferidas por la legislación en materia electoral, de partidos y de participación ciudadana. Este órgano de dirección tiene entre sus prioridades generar políticas que garanticen un funcionamiento eficiente del órgano electoral, tanto en el ámbito de su estructura como de sus procesos internos.

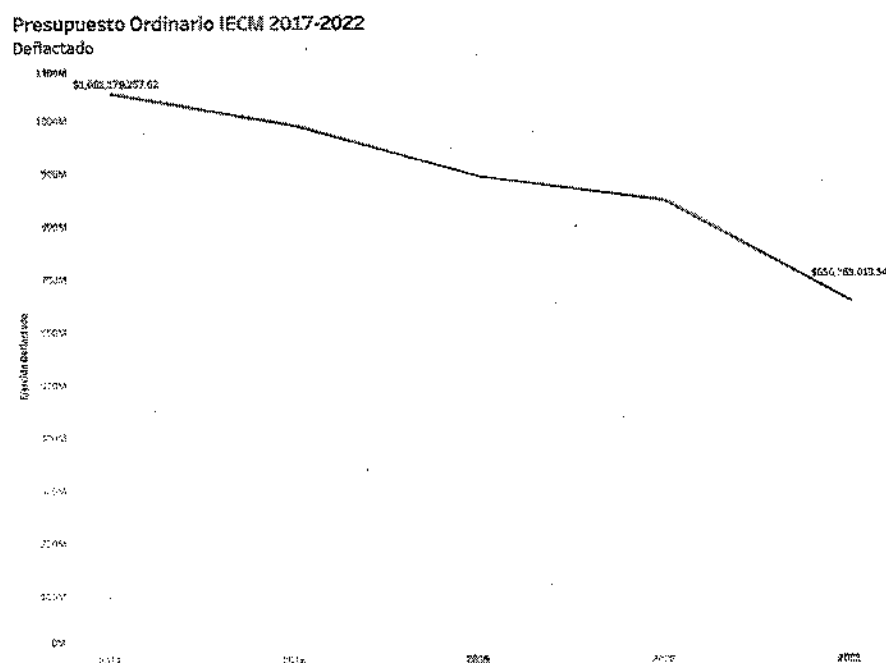
La propia normativa electoral que rige el funcionamiento del IECM, le ordena elaborar al año siguiente de la elección, estudios especializados respecto a la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto (artículo 83 del Código Electoral). Bajo esa lógica, el Consejo General del IECM deberá realizar en 2022 un estudio integral de la estructura institucional con miras a identificar áreas de mejora que permitan a la institución ejercer un uso más eficiente de los recursos públicos. Con el fin de ofrecer más servicios a la ciudadanía y organizaciones políticas, con menos recursos, siempre cumpliendo estrictamente con las atribuciones institucionales.

De hecho, en el último lustro, se observa que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ha realizado esfuerzos para reducir el gasto operativo anual ejercido, como se puede observar en la gráfica siguiente. El



II LEGISLATURA

presupuesto, considerando precios constantes, ha disminuido un 37.52%, pasando de \$1,051,179,257.62 en 2017 a \$656,768,013.54 en 2021.



En la planeación estratégica del año 2022, el Consejo General del IECM determinó la realización de un proceso de *reestructura* funcional de todas las áreas que componen la institución. Una vez concluido el proceso de Presupuesto Participativo 2022, se iniciarán los trabajos de reestructuración a principios de junio para contar con una propuesta integral a finales de septiembre. El último trimestre de 2022 se enfocará en la ejecución del acuerdo de reestructuración funcional y operativa que apruebe el Consejo General.

Bajo ese esquema, el citado proceso de *reestructura* se enfocaría a implementar las reformas a los instrumentos organizacionales y administrativos con los que cuenta el Instituto, así como a los cuerpos normativos que rigen a esta autoridad, con lo cual se prevé tener una propuesta objetiva, analítica y funcional para un mejor desempeño del Instituto.

La planeación del proceso de reestructura obedece a dos elementos fundamentales: 1. La necesidad de realizar los estudios con información objetiva y bajo una perspectiva integral sobre las necesidades de



## II LEGISLATURA

estructura institucional dadas las atribuciones normativas; y 2. La urgencia de determinar el proyecto de presupuesto para 2023, considerando la nueva estructura funcional con miras a garantizar el funcionamiento ordinario y la ejecución del proceso electoral 2023-2024 con eficiencia y eficacia. La solicitud de presupuesto 2023, también deberá contar con una partida específica que contemple la liquidación del personal que quede fuera de la nueva estructura orgánica del IECM.

De modo que resulta atendible que sea el propio órgano electoral local quien establezca su proceso de reestructura, pues es éste quien de forma especializada conoce las áreas de oportunidad que se encaminen a un óptimo ejercicio del presupuesto y las consecuencias que se deriven de tal cambio y no a partir de que el legislador determine sin un estudio integral el impacto presupuestal que conllevará la reforma que se pretende dictaminar.

La violación a la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México se puede advertir en dos vertientes:

### **1. Violación a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa**

El Decreto impugnado es violatorio de los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa en la medida de que el legislador local no puede atentar o limitar a través de una reforma legal la autonomía funcional, operativa y técnica del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Al eliminar la posibilidad de que el Instituto se organice orgánicamente a través de la creación de Unidades Técnicas por el Consejo General, anula la autonomía funcional, operativa y técnica que tiene el Instituto y que se encuentra garantizada por dos normas que jerárquicamente se encuentran por encima del ordenamiento que se modifica: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México.

Para mejor referencia, a continuación, la parte relativa al Instituto electoral local como un órgano autónomo:



II LEGISLATURA

### **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

(...)

Artículo 116 (...)

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

(...)

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

### **Constitución Política de la Ciudad de México**

#### **LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

#### **Artículo 46**

#### **Organismos Autónomos**

##### **A. Naturaleza jurídico-política**

**Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:**

- a. Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
- b. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
- c. Fiscalía General de Justicia;
- d. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
- e. Instituto Electoral de la Ciudad de México;**
- f. Instituto de Defensoría Pública; y



II LEGISLATURA

Los artículos transcritos contenidos en la Constitución Federal y Constitución Local establecen la autonomía de los órganos electorales locales, entre ellos, el de la Ciudad de México, **como órganos constitucionales autónomos con la capacidad de decidir de manera plena e independiente sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna.**

#### **-Características de los órganos constitucionales autónomos**

Sobre la autonomía de los órganos que a nivel constitucional encontramos la siguiente doctrina jurisprudencial:

*Registro digital: 172456*

*Instancia: Pleno*

*Novena Época*

*Materia(s): Constitucional*

*Tesis: P./J. 20/2007*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.*

*Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647*

*Tipo: Jurisprudencia*

#### **ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.**

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de





H LEGISLATURA

**los clásicos poderes del Estado.** 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: **a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal;** b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; **c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera;** y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

Registro digital: 170238

Instancia: Pleno

Novena Época

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 12/2008

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1871

Tipo: Jurisprudencia



II LEGISLATURA

## ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.



H. LEGISLATURA

*El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.*

Los criterios anteriores dejan claro que una de las características de los órganos constitucionales autónomos es la capacidad de decidir de manera independiente y sin ninguna injerencia de los otros poderes tradicionales o factores reales o políticos sobre su manera de funcionar y ejercer su presupuesto. El Instituto Electoral de la Ciudad de México no escapa a esta capa de protección de la autonomía del mismo.

#### **- Autonomía funcional y financiera**

¿De qué manera se garantiza la autonomía del Instituto si con la reforma impugnada se elimina la facultad de su Consejo General de crear las unidades técnicas que crea convenientes?

El presente concepto de invalidez no pretende desconocer que el legislador tiene la facultad de emitir a través del ejercicio legislativo una estructura mínima del órgano constitucional en cuestión, o bien, las directrices sobre las que debe darse esa organización, sin embargo, de ninguna manera puede limitar o restringir la capacidad de autorregular su estructura orgánica. Es decir, el legislador puede poner un piso mínimo, pero de ninguna manera un tope máximo respecto de aquellas unidades administrativas que el propio órgano especializado considere oportunas para desenvolver de mejor manera su función.

Al eliminar la posibilidad de que el Consejo General pueda crear las Unidades Técnicas que considere convenientes para su función, automáticamente aniquila la autonomía de la que está dotado el Instituto en un plano constitucional.

Si la razón de crear un órgano constitucional autónomo es que una función técnica y especializada se desenvuelva de manera ajena al gobierno en turno o blindado de las influencias políticas, ¿qué objetivo tiene que el legislador sea quien detente del diseño de la estructura orgánica del mismo?



II LEGISLATURA

Concretamente, respecto a la autonomía funcional y técnica de los órganos electorales locales, encontramos los siguientes criterios:

Registro digital: 2008659

Instancia: Plenos de Circuito

Décima Época

Materia(s): Constitucional

Tesis: PC.XV. J/6 L (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1803

Tipo: Jurisprudencia

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.**

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California es un órgano constitucional autónomo local, ya que, por un lado, el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las autoridades electorales deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y habilita a las entidades federativas a que regulen estas instituciones públicas en sus Constituciones Locales y en las leyes secundarias. Además, el instituto reúne las características de los órganos constitucionales autónomos precisadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 20/2007 y P./J. 12/2008, ya que: a) se encuentra configurado directamente en el artículo 5, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 17 de octubre de 2008, que le dota del carácter de "organismo público autónomo"; b) mantiene relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, porque no está subordinado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial Locales, al tener autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; c) cuenta con autonomía e independencia funcional y financiera, pues la



LEGISLATURA

**Constitución Local lo dota de personalidad jurídica y patrimonio propios;** y, d) atiende funciones primarias, originarias y torales del Estado, que requieren ser atendidas en beneficio de la sociedad, puesto que la Constitución Local le encomienda, entre otras, la atribución de organizar las elecciones estatales y municipales, función pública de la mayor relevancia para el Estado. De ahí que no podría confundirse su naturaleza con la de un organismo descentralizado, al formar éstos parte de la esfera del Poder Ejecutivo, a diferencia del instituto electoral local.

#### PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero y Quinto, todos del Décimo Quinto Circuito. 24 de noviembre de 2014. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Isabel Iliana Reyes Muñiz, Julio Ramos Salas, Gerardo Manuel Villar Castillo, Salvador Tapia García, Inosencio del Prado Morales y José Miguel Trujillo Salceda. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: José Luis Sandoval Estrada.

#### Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2011, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el conflicto competencial 27/2011, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el conflicto competencial 28/2011.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 20/2007 y P./J. 12/2008 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1647 y Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1871, con los rubros: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS." y "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.", respectivamente.

Registro digital: 164768



II LEGISLATURA

Instancia: Pleno

Novena Época

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 42/2010

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, página 1571

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES. EL ARTÍCULO 349, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, EN CUANTO PREVÉ UN SISTEMA DE COLABORACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU CONTRALORÍA GENERAL, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), CONSTITUCIONAL, POR CUANTO HACE A LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL ÓRGANO ELECTORAL LOCAL.**

El párrafo tercero del artículo 349 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, al prever que el titular de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral será designado o removido por la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, a propuesta de instituciones públicas de educación superior y que el electo rendirá la protesta de ley ante el Consejo del Instituto, no contraviene el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente por cuanto hace a la autonomía e independencia del órgano electoral local. Lo anterior es así, porque si bien conforme a lo establecido en ese precepto constitucional es obligación de las Legislaturas Locales garantizar que la integración y actuación de las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y de las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, se rijan por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, autonomía, certeza e independencia, lo cierto es que al no existir disposición constitucional que imponga a las indicadas Legislaturas algún lineamiento específico respecto a la forma en que deberán organizarse las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales locales, los órganos que los integrarán y el procedimiento para la designación de sus integrantes, esta materia



## II LEGISLATURA

*es responsabilidad directa de dichas Legislaturas. Así, el tipo de procedimiento para designar al titular de la Contraloría General, en el que la mayoría calificada de los integrantes del Congreso Local lo eligen a propuesta de instituciones públicas de educación superior, no transgrede la Constitución General de la República, pues atendiendo a la importancia de la función que realizará ese organismo, el sistema de designación se genera como un tipo de colaboración entre: a) instituciones públicas de educación superior, en cuanto a la propuesta, y b) el Congreso Local, quien por el voto de la mayoría calificada de sus integrantes, elegirá finalmente al titular de la Contraloría General.*

*Acción de inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009. Partidos Políticos del Trabajo, Socialdemócrata, de la Revolución Democrática y Convergencia. 10 de noviembre de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.*

*El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número 42/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez.*

Conforme a lo anterior, si la autonomía funcional y técnica del Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra garantizada en un plano constitucional, el legislador local no puede a través del consenso de una mayoría parlamentaria simple, modificar las reglas del juego que la norma fundamental ha establecido para el principal órgano garante de la democracia con el que cuenta nuestro país.

El Decreto impugnado constituye un fraude a la Constitución en dos vertientes:

- a. Modifica a través de la modificación a un ordenamiento cuya jerarquía es inferior al texto constitucional, los principios que rigen al Instituto como un órgano constitucional autónomo. En todo caso, era necesaria una reforma constitucional -federal y local-; y



II LEGISLATURA

- b. Pasa por alto que quitarle la autonomía funcional y técnica al Instituto es una decisión que tiene que ser aprobada por las dos terceras partes de la sede democrática. Cualquier decisión o modificación a través de la votación de una mayoría simple que materialice un atentado a la autonomía del Instituto, necesariamente involucra una vulneración a las reglas de votación del órgano legislativo.

## 2. Aplicación de las reglas y políticas de austeridad republicana

La mayoría parlamentaria que aprobó el Dictamen impugnado, pasa por alto que la Suprema Corte recientemente resolvió la acción de inconstitucionalidad 139/2020 en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en la que determinó que, si bien el legislativo federal tiene la atribución constitucional de legislar en la materia, de ninguna manera el ejercicio de esa atribución puede tener el alcance de invadir la autonomía de los órganos autónomos o desarrollar sus funciones substantivas.

Si bien el engrose de la sentencia de ese asunto no ha sido publicado, del proyecto sometido a consideración del Pleno y votado a favor por mayoría en la parte conducente, considera:

*"Por lo que en relación con estas facultades específicas, no se invade la autonomía ni la independencia de los poderes legislativo y judicial ni de los órganos autónomos para desarrollar las funciones substantivas que les confiere la constitución, ya que las facultades legislativas y fiscalizadoras en cuestión se limitan a esos aspectos del gasto público federal, pero no al ámbito de gestión presupuestaria autónoma que les reconoce la Constitución a esos poderes y entidades públicas, mucho menos a sus funciones substantivas, como, en el caso del poder legislativo, sus otras facultades legislativas, en el del poder judicial, sus facultades jurisdiccionales, y en el de los órganos autónomos, sus facultades técnicas vinculadas con su propósito constitucional."*

A contrario sensu de lo establecido en el párrafo del proyecto en cuestión, si el legislador justificándose en una política de austeridad invade la autonomía e independencia de algún otro poder u órgano autónomo para





H. LEGISLATURA

desarrollar sus funciones, el contenido del producto legislativo será incompatible con la Constitución Federal.

En el caso concreto, de los documentos que integran el proceso legislativo, se desprende que la motivación del Decreto impugnado y de las modificaciones al ordenamiento reformado es la aplicación de la política de austeridad republicana. Sin embargo, dicha política no puede invadir la autonomía que la norma fundamental le ha otorgado al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Máxime que en el caso concreto no solamente la invade, sino que la anula.

Ahora bien, es importante considerar cada uno de los cambios que se pretenden con la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, partiendo de ello, en el proyecto de dictamen no se advierte un estudio pormenorizado de las actividades que actualmente ejercen las Unidades propuestas a desaparecer o ser reubicadas en otras áreas del Instituto, es así que se procede a dicho análisis con el fin de demostrar la necesidad de dichas áreas y que el dictamen no debería ser ajeno a ello.

#### **A. Derogación de la facultad del Consejo General de crear Unidades Técnicas**

Con esta derogación se inhibe el debido desempeño de los fines y atribuciones del Instituto y con ello del debido ejercicio del cargo, lo cual podría generar una posible responsabilidad de las personas Consejeras que lo integran, en tanto que con la intromisión del congreso local, se les imposibilita implementar Unidades Técnicas que realicen las acciones de gestionar, desde su ámbito de especialización, las actividades previstas en el programa operativo, tendentes a coadyuvar en la realización de las actividades sustanciales de este Instituto.

#### **UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (UTEF)**

Como resultado de la reforma electoral llevada a cabo en 2014, la UTEF dejó de fiscalizar a los partidos políticos locales, lo que implicó según datos del IECM, una reducción en su estructura de 45 a 12 plazas. Sin embargo, el pensar o inferir que el Instituto ya no fiscaliza, sería reducir la



## II LEGISLATURA

democracia a la sola existencia de los partidos políticos, cuando en realidad existen otras Asociaciones Políticas, las cuales realizan actividades político – electorales que incluso tienen vínculos políticos y/o financieros con los partidos políticos locales o con otros actores democráticos.

Una de las actividades relevantes que lleva a cabo esta área es la fiscalización que, si bien versa sobre los recursos privados, salvo que el Instituto Nacional Electoral delegara la fiscalización de partidos políticos locales, esto no excluye que dichos recursos provengan de entes impedidos o que incluso puedan tener un origen impedido o ilícito.

La UTEF debe practicar la fiscalización con el enfoque de revisión del origen, monto, destino y aplicación de los recursos de:

- Las Agrupaciones Políticas Locales (APLs),
- De las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como partidos políticos locales y,
- De las organizaciones de observación electoral respecto del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con su función.

Otro punto para resaltar es que, si bien la Unidad se denomina de Fiscalización, también lleva a cabo, sin la contratación de despachos o consultorías externas costosas, las actividades de liquidación y disolución del patrimonio de los partidos políticos locales que hayan perdido su registro (actualmente Partido Humanista de la Ciudad de México y Partido Equidad, Libertad y Género "ELIGE"), de las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que se hayan interesado en constituirse como partido político local, de las asociaciones civiles constituidas por aspirantes a una candidatura sin partido, de las asociaciones civiles constituidas por candidatos y candidatas sin partido y de las agrupaciones políticas locales.

Adicionalmente, la UTEF lleva a cabo la tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionados en materia de fiscalización (PASF), entendiéndose como tales las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, destino y



II LEGISLATURA

aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados.

**Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza.**

Es importante reiterar que el contenido del dictamen no es claro en cómo afectaría a las plazas que conforman a la UTEF. Sin embargo, propone la fusión de la UTEF con la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. Lo anterior tendría como consecuencia realizar un análisis técnico sobre qué plazas se necesitarían al momento de la fusión, aspecto que compete al ente autónomo su estudio.

Es importante considerar que la UTEF cuenta con plazas con perfil técnico contable y legal, es decir, son personal especializado en el área quienes no son fáciles de cumplir, para ello se ha tenido que llevar a cabo una selección, capacitación extensa y aprendizaje por medio de experiencia, ya que no solo se necesitan contadores, sino, que estos contadores deben de saber de derecho electoral, de normas contables y de auditoría, los abogados con los que cuenta la Unidad tienen conocimiento y experiencia en lo electoral, en la interpretación de dictámenes contables y en la elaboración de resoluciones en materia de fiscalización y de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

Adicionalmente, la persona que dirige la Unidad Técnica debe ser una persona con conocimiento y experiencia directiva y de toma de decisiones en el ámbito electoral, contable y legal con especialización en fiscalización y liquidación de los sujetos obligados.

Por otra parte, en los procedimientos de liquidación, especialmente de los partidos políticos locales, se gestionan, administran y toman decisiones financieras y operativas sobre recursos públicos a fin de que los remanentes sean devueltos a las finanzas públicas de la Ciudad de México; por ello, es importante mantener y evitar perder al personal con el conocimiento técnico y experiencia para llevar de la manera más austera posible estos procesos de liquidación, sin necesidad de recurrir a



II LEGISLATURA

la contratación de despachos externos, cuyos honorarios son muy elevados.

Es importante precisar que actualmente 2 servidores públicos de la UTEF, un analista y un jefe de departamento son interventores de los procedimientos de liquidación del patrimonio del otrora Partido Humanista de la Ciudad de México y del Partido ELIGE, para ello se tuvo que realizar una insaculación y designación por parte de la Comisión de Fiscalización y trámites ante notario público, los cuales tuvieron un costo y complejidad.

Las modificaciones propuestas en la reforma, provocarían la pérdida de conocimiento técnico, experiencia y capacitación del personal que le ha costado al erario público, y que solo lograría vulnerar y trastocar para detrimento del propio Instituto y de la democracia los principios fundamentales e inamovibles de autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad que comprenden las tareas de fiscalización y de liquidación del patrimonio de los sujetos obligados.

#### **Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma**

El dictamen no advierte los riesgos que conllevan las modificaciones propuestas, entre los que invariablemente se encuentran:

- Pérdida de autonomía técnica, de gestión y política en sus tareas de fiscalización, principalmente de las Organizaciones de Ciudadanos que deseen constituirse como un partido político local.
- Pérdida de personal con conocimiento técnico especializado en fiscalización electoral, en la ejecución de procedimientos de liquidación del patrimonio de partidos políticos locales y en el desarrollo y seguimiento de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
- Pérdida de dirección en la mejora y automatización de los procesos de fiscalización y de liquidación de los sujetos obligados al fusionarse con otra área.

En virtud de lo anterior, cuando mediante una reforma legal se rediseña la estructura interna de un Instituto Electoral local se afecta el cumplimiento de las atribuciones al eliminar unidades técnicas y, se vulnera su facultad



■ LEGISLATURA

de auto organización al derogar la atribución de crear Unidades Técnicas, por lo que la raíz de dicha intromisión debe revocarse.

En ese caso concreto, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Poder Legislativo puede mediante una reforma legal, reestructurar orgánicamente al IECM eliminando Comisiones cuya existencia se justifica en las atribuciones con que cuenta el Instituto; y quitar facultades para crear nuevas Unidades Técnicas sin una adecuada justificación; o si ello implica obstaculizar y/o eliminar la facultad y derecho de las y los integrantes del Consejo General del IECM para auto organizarse, de conformidad con los principios de autonomía e independencia en el ejercicio del cargo conferido, el cual es connatural a su función.

Por regla general, cualquier acto u omisión derivado del Poder Legislativo que implique una injerencia injustificada e infundada que afecte el actuar independiente y autónomo de cualesquiera otro poder o Autoridad, es susceptible de control constitucional.

La reforma objeto, tiene una dualidad de efectos, por un lado, vulnera la autonomía constitucional del Organismo y por otro, vulnera los derechos político-electorales de sus integrantes.

El Congreso de la Ciudad de México, al desaparecer cinco Unidades Técnicas y al quitar la facultad de creación de nuevas Unidades Técnicas, vulnera el derecho, autónomo e independiente, a ejercer el cargo de las y los integrantes del Consejo General del IECM, con lo que se actualiza la competencia y legitimación del Tribunal Electoral para reparar los daños que inciden en el ejercicio de ese derecho.

En ese sentido es importante señalar que, el decreto impugnado contiene reformas regresivas que afectan las funciones constitucionales de instituciones democráticas como el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

La eliminación de la Comisión de Vinculación con Organismos Externos, así como las Unidades técnicas de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados; la del Centro de Formación y Desarrollo, y la de



II LEGISLATURA

Vinculación con Organismos Externos, constituyen un acto de debilitamiento del propio Instituto Electoral de la Ciudad de México, como órgano garante de los derechos electorales y de la democracia capitalina.

Del mismo modo, como podrá apreciar ese Tribunal Constitucional, el Decreto que por esta vía se impugna, no busca el fortalecimiento del Instituto Electoral como autoridad garante de los derechos político electorales, de la transparencia en el ejercicio de los recursos otorgados a los partidos políticos, sino, busca regresar a una época oscurantista donde todo se hacía a modo para mantener el control desde la concentración de funciones, vulnerando la democracia precisamente porque, quienes concentraban cotos de poder podían subordinar el ejercicio de la función pública al control político.

En ese sentido, quitarle autonomía técnica a la Comisión de Fiscalización es un atentado a la autonomía misma del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como organismo público en materia electoral a que se refieren los artículos 46 y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y que refiere el artículo 41 fracción III apartado A de la Constitución Federal.

Pero no sólo se quita autonomía técnica a la Comisión de Fiscalización, simplemente se eliminó de la Ley y se pretendió justificar con la idea de que se puede crear una unidad temporal de fiscalización con cierto grado de autonomía. Es por ello que, se asevera que, se busca a toda costa el debilitamiento de la función fiscalizadora de la autoridad administrativa electoral, lo que violenta el artículo 41 fracción V apartado C de la Constitución Federal.

El artículo 46 apartado B numeral 1 de la Constitución Política local señala que los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, tal y como lo señala el artículo 36 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

Con esta reforma no sólo se impide que el Instituto cumpla con el derecho a la buena administración como derecho humano, sino que, la reforma en sí vulnera este derecho a la buena administración al debilitar un organismo que es pilar de la democracia.



II LEGISLATURA

El derecho a la buena administración, señala el citado artículo 36:

*Artículo 36. La buena administración constituye un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes públicos, que implica que las autoridades traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y equitativa ..., a través de mecanismos accesibles e incluyentes...*

La buena administración pública deberá centrarse en la persona, conforme a los principios de generalidad, uniformidad, derecho a la información, transparencia, regularidad, continuidad, calidad, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Para tales efectos, la administración pública se regirá bajo los principios del gobierno abierto.

De conformidad con lo que dispongan las leyes, las personas podrán impugnar cualquier acto u omisión de las autoridades que vulnere su derecho a la buena administración, para lo cual será suficiente acreditar un interés legítimo...

Principios como acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, y fiscalización son hoy los sacrificadas de esta reforma que propone la mayoría. Con la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización que elimina la mayoría en el dictamen no habrá transparencia, no habrá fiscalización, no habrá una rendición de cuentas confiable, pues se hará a través de una Dirección Ejecutiva sin autonomía técnica.

Es por ello, que se acude a ejercer este medio de control constitucional, pues una reforma que debilita las instituciones democráticas, que es regresiva y que atenta contra los derechos humanos debe ser detenida por esa máxima autoridad judicial, y en consecuencia debe ser declarada inválida.

El Decreto impugnado, señala que la reforma se justifica en aras de la austeridad, premisa absolutamente falsa, si bien existen disposiciones normativas que obligan a ejercer con racionalidad y austeridad el gasto público, también es cierto que no existe una justificación real, material y objetiva que amerite el debilitamiento del Instituto Electoral de la Ciudad



## II LEGISLATURA

de México a partir de la desaparición de diversas de sus unidades y comisiones, así como la fusión de unas con otras que, lejos de optimizar el ejercicio de los recursos, lo que produce la reforma es una vulneración a disposiciones constitucionales y a derechos humanos.

El artículo 46 apartado B numeral 2 de la Carta Magna local señala, a propósito de los organismos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Electoral local, que la Legislatura (entiéndase Congreso de la Ciudad de México) asignará los presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de las atribuciones de estos organismos...

El artículo 9 apartado A numeral 3 de la Constitución local dispone que, las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles.

De acuerdo con la Constitución Federal, local y tratados internacionales, los habitantes de la Ciudad de México gozamos de diversos derechos humanos, entre ellos los político electorales, así como el de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, entre otros, producto de la fiscalización del gasto público, y es el Instituto Electoral de la Ciudad de México quien, en primera instancia, se encarga de garantizar esos derechos a través de las diferentes áreas que fueron establecidas en las normas que elimina la reforma impugnada.

Es por ello que, se asevera, que es contrario a la Constitución local que pretenda suprimirse la estructura del Instituto Electoral local so, pretexto de la austeridad, pues corresponde a las autoridades, y en particular al Congreso, otorgar los recursos suficientes para que dicho instituto realice sus tareas, las que se traducen en garantía de distintos derechos humanos de los capitalinos.

El artículo 1 apartado B numeral 3 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México dispone:

*Artículo 1. La presente Ley Constitucional y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México, y tiene por objeto:*

*B. Del desarrollo de los derechos humanos*





II LEGISLATURA

3. *La asignación y aplicación progresiva y no regresiva de recursos públicos como medio para alcanzar la protección más amplia y efectiva de los derechos humanos para las personas; entendida como desarrollo material, tangible e irrenunciable de los derechos.*

Si bien no existe una disminución directa en el presupuesto del Instituto Electoral, la disminución de su estructura entraña una disminución de su presupuesto, y más aún, las motivaciones de la reforma son precisamente la austeridad; en otras palabras, lo que se busca con la eliminación de la estructura de dicho instituto es afectar directamente el presupuesto del mismo, lo que implica una violación a los artículos 16, 41 fracción V apartado C de la Constitución Federal.

En síntesis, la actual reforma al Código Electoral Local, vulnera excesiva e injustificadamente el ejercicio de las atribuciones del Instituto Electoral local, encomendadas por la Constitución Federal, local y las leyes generales y locales.

Al respecto, si bien conforme al artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, las legislaturas locales gozan de libertad legislativa para expedir leyes en materia electoral, también lo es que esas facultades no son irrestrictas o absolutas, sino que su ejercicio debe ser razonable y respetar los mandatos constitucionales y derechos humanos que establece la Constitución Federal, así lo ha establecido la SCJN, al resolver la Acción de inconstitucionalidad 8/2014:

**LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTA LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.** Si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular ciertas materias, como la civil, también lo es que aquélla se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, de modo que la existencia de un



II LEGISLATURA

*verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales.*

*PLENO. Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz estimó innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.*

*Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 8/2014, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 325. El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 11/2 016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.*

Por su parte, el artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México señala que a través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso y de las Alcaldías en la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, los cuales se garantizarán desde el ejercicio autónomo e independiente de acuerdo a lo previsto en las Leyes Generales, el Código y la Ley de Participación. Sus fines y acciones se orientan a:



## II. LEGISLATURA

- I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
- II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
- III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
- IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías;
- V. Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
- VI. Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;
- VII. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
- VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía;
- IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana;  
y
- X. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones;
- XI. Impulsar la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y comunicación.

También prevé que todas las actividades del Instituto se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Adicionalmente a sus fines, conforme a dicho dispositivo legal, el Instituto Electoral tiene a su cargo diversas atribuciones para dar cumplimiento a los citados fines de este órgano administrativo electoral.

Además, el artículo 78, fracción I del ordenamiento en cita, señala que dentro de las atribuciones de las y los Consejeros Electorales, está la referente a: Cumplir las obligaciones que les señala el Código y los acuerdos del Consejo General del Instituto.



## II LEGISLATURA

Por otra parte, el Código electoral en comento señala en sus artículos 52 y 53 que el Consejo General del Instituto cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional, para el desempeño de las atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

Tales Comisiones son instancias colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta. Se integran por una persona consejera presidente y dos personas consejeras bajo el principio de paridad de género, contando con derecho a voz y voto. La presidencia de cada una de las Comisiones se determina por acuerdo del Consejo General. Cuentan con una Secretaría Técnica sólo con derecho a voz, designada por sus integrantes a propuesta de la presidencia y tendrá el apoyo y colaboración de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

Conforme al artículo 59 del mismo ordenamiento, el Consejo General contaba con las Comisiones de:

- I. Asociaciones Políticas;
- II. Participación ciudadana y capacitación;
- III. Organización Electoral y Geoestadística;
- IV. Educación Cívica y Construcción Ciudadana;
- V. Fiscalización;
- VI. Normatividad y Transparencia;
- VII. Vinculación con Organismos Externos.
- VIII. Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; e
- IX. Igualdad de Género y Derechos Humanos.

No obstante, con el decreto impugnado, el Congreso de la CDMX derogó las Comisiones de Fiscalización y Vinculación con Organismos Externos.

Por su parte, el artículo 98 del código preveía que el Instituto Electoral contaba con Unidades Técnicas que tienen a su cargo las tareas de:

- I. Comunicación Social y Difusión
- II. Servicios Informáticos
- III. Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados;



II LEGISLATURA

IV. Asuntos Jurídicos

V. Formación y Desarrollo, y

VI. Vinculación con Organismos Externos.

Sin embargo, en el Decreto controvertido también se eliminaron la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD), la de Formación y Desarrollo, así como la de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE). De igual forma, como se planteó en párrafos precedentes se derogó la facultad del Consejo General para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del Instituto.

#### **B. Eliminación de la Comisión de Vinculación con Organismos Externos**

En las disposiciones que fueron afectadas por la reforma controvertida, se regulaba a la Comisión de Vinculación con Organismos Externos, como un órgano colegiado auxiliar del Consejo General en la celebración de negociaciones necesarias para sentar las bases orientadas a la suscripción de convenios de apoyo y colaboración que pretenda suscribir el Instituto Electoral y para apoyar al Consejo General en el establecimiento de acuerdos institucionales para coordinar actividades y desarrollar una correcta vinculación con el Instituto Nacional Electoral.

A través de la UTVOE tiene la misión central de cohesionar labores institucionales para crear alianzas que fortalezcan el ámbito de actuación del Instituto Electoral, al tiempo que amplía el alcance de las acciones que desarrolla en los ámbitos electoral, de educación cívica y de participación ciudadana.

El trabajo de esta área es transversal, por lo que impactan en todas y cada una de las áreas del Instituto Electoral, a la vez de que su nivel de especialización origina que sus actividades no sean desarrolladas por ningún otro órgano colegiado.

Con la eliminación de la Comisión de Vinculación con Organismos Externos, las funciones de dicha Unidad se trasladan a la Secretaría Ejecutiva, que es un órgano ejecutivo unipersonal que ya no se encontrará sujeto al



II LEGISLATURA

seguimiento y vigilancia de tales atribuciones mediante una Comisión, respecto de la revisión y aprobación de las determinaciones relacionadas con los organismos públicos y privados locales, nacionales y, en su caso, internacionales.

A pesar de lo sustancial de las atribuciones que ejercía la extinta Unidad Técnica, con el nuevo modelo ahora únicamente se analizarán y acordarán con la Presidencia del Consejo General del Instituto, como sucede actualmente con las actividades realizadas por dicho órgano ejecutivo, dejándose de lado, la importancia de la colegialidad en la toma de este tipo de decisiones, pues se inhibe el consenso, seguimiento y control como cualidades de las determinaciones de un órgano colegiado.

De conformidad con el Diccionario Jurídico son colegiados aquellos órganos en que la función se asigna a varios individuos, reconocidos como unidad, cuyos acuerdos son necesarios para la realización del acto respectivo. Como es prácticamente imposible lograr la unanimidad de criterios, se adopta como regla el principio de la mayoría, aunque a veces se establecen requisitos de mayor rigor. Se afirma que la conformación de órganos colegiados está basada en la conveniencia de ponderar varios criterios, de compartir responsabilidad en vista de la importancia del acto a realizar y de lograr la mayor representatividad posible.

La doctrina señala que los órganos colegiados son aquellos en los que la titularidad se confía a un conjunto de personas físicas que concurren a formar la voluntad del órgano, respondiendo al modelo de formación horizontal de los actos. La normativa de aplicación regula la convocatoria, la adopción de acuerdos, el levantamiento de las actas y los derechos y obligaciones de los cargos que lo componen.

En ese sentido, con la derogación de la citada Unidad Técnica y la Comisión de Vinculación con Órganos Externos, el seguimiento a las funciones que ejercían quedará fuera de la responsabilidad entre quienes integraban dicha Comisión y con ello, la adopción de acuerdos de una forma horizontal y colegiada, con lo que se entorpece el debido cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 78, fracción I del código electoral local.



■ LEGISLATURA

## UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS. (UTGyDH)

La UTGyDH implementa acciones para la transversalización de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en el quehacer institucional que permeen en la organización de procesos electorales locales y mecanismos de participación ciudadana incluyentes y se realicen en condiciones equitativas e igualitarias, a través de actividades tanto al interior para el personal, como al exterior para la ciudadanía, con especial énfasis en las mujeres y los grupos de atención prioritaria para incentivar y fortalecer el ejercicio de sus derechos. Entre las que destacan:

- Se participa en el diseño y elaboración del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que establece la obligación de aplicar el enfoque de derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación que realicen las entidades públicas de esta Ciudad.
- La implementación de prácticas permanentes con un enfoque de igualdad de oportunidades acordes con lo establecido por la Norma Mexicana 025 en Igualdad laboral y no discriminación.
- Cumplimiento a lo ordenado de forma vinculatoria por la autoridad jurisdiccional en materia electoral, relacionado con asuntos que involucren los derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria, como las sentencias *SCM-JDC-811/2021* y *SCM-JDC-855/2021*.

En materia de género realiza:

- El Instituto se ha mostrado a la vanguardia en acciones dirigidas a las mujeres en las cuales reconoce los múltiples sistemas de opresión que afectan su participación política, tal es el caso de las mujeres indígenas. Ha impulsado la implementación de la *Escuela de Liderazgo de Mujeres Indígenas*, promoviendo procesos formativos para incidir en transformaciones sociales que fortalezcan la paridad.



H. LEGISLATURA

- Ha diseñado e implementa acciones de capacitación como los talleres dirigidos a concejales y alcaldesas que permiten hacer visibles las conductas de Violencia política contra las mujeres en razón de género y reconocer vías de exigibilidad de sus derechos.

**Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza**

Con el decreto de reforma, el Instituto pierde especialización en materia de género y derechos humanos, lo cual es contrario a los deberes y obligaciones del Estado Mexicano y al principio de progresividad señalado en todos los ordenamientos en la materia.

Sin duda, la existencia de unidades administrativas encargadas de temas relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos, es producto de una lucha histórica por tener instituciones sensibles al contexto de desigualdad y violencia estructural contra las mujeres y los grupos de atención prioritaria, por lo que se carecería de un área que promueva los derechos político-electorales de estas poblaciones.

Al interior, quedaría un vacío en la atención de la *Política de Igualdad Laboral y No Discriminación y de prevención de riesgos psicosociales*, derivadas de la *Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación*,<sup>8</sup> y la *Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención*, esta última de carácter obligatorio.

Finalmente, se carecería de plazas con perfil especializado que se encarguen de planificar, programar, coordinar y organizar acciones en materia de igualdad de género y derechos humanos.

**Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma**

El incumplimiento y regresividad en las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y

<sup>8</sup> La certificación de esta Norma Mexicana se encuentra vigente, con nivel Oro, y a cargo de la UTGyDH.





II LEGISLATURA

garantizar los derechos humanos, la igualdad de género, la diversidad, inclusión y no discriminación.

Se advierte que implicaría un retroceso en materia de fortalecimiento de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en específico de las mujeres y las poblaciones que integran los grupos de atención prioritaria.

Respecto a las actividades realizadas con la comunidad del Instituto, se afectarían los trabajos de fomento a la igualdad laboral, la no discriminación y la promoción de un entorno organizacional favorable.

#### **UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (UTALAOD)**

Las atribuciones relevantes con que cuenta esa Unidad Técnica son:

- Entrevistas con el personal de las Direcciones Distritales para verificar el clima laboral y, a partir del diagnóstico, poder implementar acciones de mitigación de factores que generan conflicto.
- Seguimiento a medios de impugnación recibidos en los Órganos Desconcentrados.
- Diseño de la dinámica de retroalimentación a las Direcciones Distritales respecto de las áreas de oportunidad sobre la implementación de actividades inherentes a los procesos electorales y de participación ciudadana.
- Coordinación y seguimiento para el cumplimiento de sentencias relacionadas con pueblos y barrios originarios, vinculado con la elección de sus autoridades representativas.
- Ejecución del diseño de los procedimientos de atención logística de los eventos institucionales y que son coordinados por el área.
- Creación del sistema de administración del acervo del Centro de Documentación que administra el área.
- Seguimiento a la ejecución de los servicios de Estenografía, Interpretación de Lengua de Señas mexicana, Traducción oral y escrita a lenguas indígenas, así como las publicaciones en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
- Análisis y seguimiento a las necesidades de mantenimiento a inmuebles, bienes muebles, vehículos, equipos informáticos y de oficina de los Órganos Desconcentrados.



II LEGISLATURA

**Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza**

La consecuencia ineludible al proyecto de reforma implica la disminución de plazas y con ello el despido de personal, generando de manera directa un detrimento de las atribuciones que tiene esa Unidad, dado que se reduciría la eficacia ejecutiva y operativa para contar con el pulso respecto de la actuación de las direcciones distritales en la ejecución de los programas institucionales, así como respecto de los acuerdos que emite el máximo órgano de dirección de esta Institución, puesto que el área lleva a cabo la sistematización de los resultados y los presenta a Secretaría Ejecutiva para la determinación de políticas de mejora.

Por otra parte, impactaría de manera directa las actividades logísticas que permiten el adecuado desarrollo de los trabajos de todos los órganos colegiados del Instituto, incluido el Consejo General; pues tiene a su cargo los servicios de Estenografía, Interpretación de Lengua de Señas Mexicana, Traducción oral y escrita a lenguas indígenas, así como las publicaciones en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Asimismo, se estará eliminando el vínculo institucional que coordina la comunicación institucional con los 33 Órganos Desconcentrados y que mide y evalúa la eficacia de la implementación de actividades sustantivas vinculadas al proceso electoral; procesos de participación ciudadana y de la Capacitación, Educación Cívica, Construcción de Ciudadanía.

**Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma**

- La cobertura de los apoyos logísticos y servicios que son inherentes a los órganos colegiados, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Direcciones Distritales del Instituto.
- La administración de espacios y su acondicionamiento para la realización de los eventos institucionales.
- El desarrollo de las sesiones del Consejo General, toda vez que esta área lleva a cabo el soporte logístico para su realización (atención de integrantes, control de microfonía, audio, video, transmisión remota, grabación, cronometraje, elaboración de versiones estenográficas y traducción a lengua de señas mexicana).



LEGISLATURA

- La coordinación y supervisión de las 33 Direcciones Distritales, de sus actividades y cumplimiento de programas institucionales.
- Es claro que al carecer de dicha área técnica existirá complicaciones en la ejecución de los acuerdos y normativa del instituto por las 33 direcciones distritales, pues dicha área brinda la atención y coordinación es esas direcciones a fin de trabajar de forma puntual conforme a los proyectos planificados.

Con lo anterior queda de manifiesto que tanto la iniciativa como el propio contenido del Dictamen, omiten un análisis de fondo respecto a las cargas de trabajo que actualmente se encuentran encomendadas a las Unidades Técnicas que actualmente existen en el IECM y que favorecen el desarrollo de la participación política de los ciudadanos de la Ciudad de México.

El dictamen aprobado genera además las siguientes violaciones:

- Rompe con el principio de equidad en la contienda al fusionar la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
- El IECM tiene obligaciones constitucionales además de las exclusivas que la reforma del 2014 mantuvo.
- No se conoce públicamente el diagnóstico ni conclusiones que señala la iniciativa sobre una supuesta ineficiencia de las áreas que plantea desaparecer o fusionar.
- Ante un recorte presupuestal el IECM planea, organiza y acompaña diversos ejercicios de democracia participativa contenidos en la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX.
- Eliminar el presupuesto de las 5 áreas planteadas (UTEF, UTGyDH, UTALAO, UTVOE y UTCfyD) representa únicamente el 5.45% del presupuesto del IECM.
- La propuesta vulnera la autonomía constitucional del IECM lesionando derechos humanos de los habitantes de la CDMX.

Si bien el dictamen establece que el número de plazas a las cuales se impacta la reforma es de 105 y establece que el impacto presupuestal es de 4,369,668.96 pesos mensuales brutos, es claro que ello no representa un estudio sobre impacto presupuestal pues se olvida de atender los



II LEGISLATURA

procesos de liquidación del personal que el Instituto deberá llevar a cabo, así como es omiso en determinar el personal que deberá ser adicionado a las áreas a las cuales se les adicionan atribuciones lo cual debe conllevar una retabulación en el salario que perciben, pues es obvio un incremento en su carga laboral que debe ser retribuida económicamente de forma proporcional en términos de lo previsto en la Constitución Federal y de la Ciudad de México.

No se deja de lado que el IECM es el responsable de la administración de su presupuesto, en razón de ello el propio organismo autónomo cuenta con un Plan General de Desarrollo para el periodo 2020-2023 en donde se establecen objetivos estratégicos asociados al cumplimiento de atribuciones, funciones, responsabilidades y derechos en favor de la ciudadanía. De esta forma, dichos objetivos permiten generar líneas de acción a través de la generación de estrategias específicas y que se encuentran delineadas en la programación operativa anual.

De modo que es fundamental respetar al organismo autónomo responsable de la organización de las elecciones en la Ciudad de México, en cuanto a su estructura interna y que a partir del estudio que la misma realice se analice los alcances a fin de observar una mayor austeridad en el cumplimiento de las atribuciones que cuenta el Instituto.

El Considerando Sexto del Decreto de Reforma evidencia un desconocimiento de la materia, en virtud que el solo hecho de manifestar que *"el Instituto Electoral de la Ciudad de México se verá obligado a solicitar que el Instituto Nacional Electoral cumpla a cabalidad las funciones y facultades que le fueron conferidas en la reforma del 2014..."* ello pues claramente la reforma en materia electoral del 2014 dispuso diversas atribuciones exclusivas a los OPLES y otras que pueden ser delegadas en términos de lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE comparte gastos con los OPLES para la organización de los procesos electorales asociados a la casilla única así también existen atribuciones exclusivas de los OPLES que deben ser financiadas por estos. Así también, el IECM organiza los ejercicios de democracia participativa contenidos en la Ley de Participación. Las atribuciones de esta Ley y por tanto los gastos



II LEGISLATURA

asociados a ella no se mencionan una sola ocasión en la iniciativa de ley ni en el dictamen.

El mínimo ahorro que representaría eliminar el presupuesto de estas áreas no representa un beneficio justificable en la pérdida de conocimiento especializado en la materia o la experiencia del personal de estas áreas. Adicionalmente, es predecible que el abultamiento de atribuciones en la Secretaría Administrativa o la Secretaría Ejecutiva represente una pérdida de eficiencia en el cumplimiento de funciones por el aumento en la complejidad de tareas a realizar y su seguimiento.

**c. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Además de las disposiciones constitucionales a nivel federal y local, se violan los derechos humanos consagrados en los artículos 1º y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a continuación se transcriben:

**Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos**

- 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.***

(...)

**Énfasis añadido**

**Artículo 8. Garantías Judiciales**

- 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la***



II LEGISLATURA

***sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.***

(...)

***Énfasis añadido***

En materia de derechos humanos, el Instituto Electoral local, realiza las siguientes actividades:

1. Participa en el diseño y elaboración del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que establece la obligación de aplicar el enfoque de derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación que realicen las entidades públicas de esta Ciudad.
2. Implementación de prácticas permanentes con un enfoque de igualdad de oportunidades acordes con lo establecido por la Norma Mexicana 025 en Igualdad laboral y no discriminación.
3. Cumplimiento a lo ordenado de forma vinculatoria por la autoridad jurisdiccional en materia electoral, relacionado con asuntos que involucren los derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria, como las sentencias SCM-JDC-811/2021 y SCM-JDC-855/2021.

En materia de género:

1. El Instituto se ha mostrado a la vanguardia en acciones dirigidas a las mujeres en las cuales reconoce los múltiples sistemas de opresión que afectan su participación política, tal es el caso, entre otros, de las mujeres indígenas.
2. Ha impulsado la implementación de la Escuela de Liderazgo de Mujeres Indígenas, promoviendo procesos formativos para incidir en transformaciones sociales que fortalezcan la paridad.



III LEGISLATURA

3. Ha diseñado e implementa acciones de capacitación como los talleres dirigidos a concejales y alcaldesas que permiten hacer visibles las conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género y reconocer vías de exigibilidad de sus derechos.

Con la reforma al Código local, el Instituto pierde especialización en materia de género y derechos humanos, lo cual es contrario a los deberes y obligaciones del Estado Mexicano y al principio de progresividad señalado en todos los ordenamientos en la materia.

La existencia de unidades administrativas encargadas de temas relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos, es producto de una lucha histórica por tener instituciones sensibles al contexto de desigualdad y violencia estructural contra las mujeres y los grupos de atención prioritaria, por lo que se carecería de un área que promueva y salvaguarde los derechos político-electorales de estos grupos.

Por otro lado, con la reforma al Código local, queda un vacío al interior del Instituto, respecto a la atención de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación y de prevención de riesgos psicosociales, derivadas de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, y la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención, esta última de carácter obligatorio.

Ahora bien, es de recalcar que, con la entrada en vigor del decreto, este Instituto no contará con plazas de perfil especializado que se encarguen de planificar, programar, coordinar y organizar acciones en materia de igualdad de género y derechos humanos.

No pasa inadvertido que la reforma trae consigo el incumplimiento y regresividad en las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, la igualdad de género, la diversidad, inclusión y no discriminación.



H. LEGISLATURA

A nivel externo, la reforma implica un retroceso en materia de fortalecimiento de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en específico de las mujeres y las poblaciones que integran los grupos de atención prioritaria.

Respecto a las actividades realizadas con la comunidad del Instituto, se afectarán los trabajos de fomento a la igualdad laboral, la no discriminación y la promoción de un entorno organizacional favorable.

En efecto, de acuerdo con el Manual de Planeación del Instituto Electoral, la identificación de la población involucrada consiste en determinar a aquellas personas, grupos, instituciones, comisiones, partidos políticos u Organizaciones de la Sociedad Civil, que tienen interés o expectativa en la ejecución del programa.

El Programa Específico de Derechos Humanos e Igualdad de Género conjuga tanto las actividades de las áreas del Instituto Electoral, como instituciones internacionales, nacionales y locales, así como organizaciones civiles.

Esto implica un total de 136 áreas, instituciones y organizaciones involucradas (30 áreas del Instituto Electoral y 106 externas) que podrían participar en las acciones propuestas con distinto nivel de involucramiento.

La interrelación adecuada entre las instituciones y organizaciones tiene entre sus propósitos dar cumplimiento al marco normativo y a las metas institucionales, las cuales presentan importantes retos; realizar un trabajo articulado con distintas instituciones en materia de igualdad de género y derechos humanos, contribuye a la consolidación de una democracia igualitaria e incluyente en la Ciudad de México, entendiéndose como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la ciudadanía.

Dichas instituciones deben ser consideradas en su desarrollo, ya que están estrechamente vinculadas con los principios señalados y, además, la mayoría han sido aliadas del Instituto Electoral para el cumplimiento de sus objetivos. Todo lo cual, la reforma lo deja desprotegido.





## II LEGISLATURA

Si bien estas actividades se trasladan a la Dirección Ejecutiva de Educación y Construcción de Ciudadanía, como ya se dijo, este Instituto no contará con personal especializado para brindar la mejor atención que aquellas ameritan.

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas con las que se ha trabajado en los temas referidos, cuentan con experiencia e interés para vincularse con las acciones propuestas por el Instituto Electoral, en el seguimiento y atención del ejercicio de los derechos político-electorales de mujeres y hombres, en las acciones para prevenir y erradicar la violencia política y aquellas a favor de los liderazgos no convencionales, por lo que se ha considerado que su inclusión es indispensable para alcanzar sus tareas; sin embargo, estos vínculos quedan en riesgo.

Por otro lado, se observan 27 instituciones externas con las que se cuenta con un alto nivel de involucramiento las cuales son: ONU MUJERES; INE; IDEA; SCJN; Secretaría de Gobernación; INMUJERES; Secretaría de Bienestar; FEDE; INAH; CNDH; IMJUVE; Cámara de Diputados; Senado de la República; Facultad de Psicología de la UNAM; OPL; Congreso de la Ciudad de México; TECDMX; representantes de los partidos políticos y Grupos Parlamentarios acreditados ante el Consejo General del IECM; Consejos Electorales Locales; Jefatura de Gobierno de la CDMX; CDHCM; SEMUJERES; INJUVE; FGJ-CDMX; FEPADE-CDMX; PJCDMX e INFO-CDMX.

También, se cuenta con 78 instituciones con un nivel de involucramiento medio, a saber: ONU; PNUD; FNUAP; UNICEF; UNESCO; OEA; OEI; OIJ; CEPAL; BM; FMI; Unión Europea; Organización Internacional de los Parlamentos; Fundación Internacional para Sistemas Electorales; ParlAmericas; TEPJF; CONAVIM; DIF; CONAPRED; Indesol; INALI; INPI; Instituciones académicas nacionales; STyPS; INAPAM; Conadis; Consejos Distritales; Alcaldías y Concejalías; Agrupaciones Políticas Locales; COPRED; INDISCAPACIDAD; SEGOB; IESIDH; SEPI; UACM; CECAM; SIBISO; INED; SECTEI; Comisiones de Participación Comunitaria; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México/Procuraduría de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México; Instituciones de Educación



## II LEGISLATURA

Superior de la Ciudad de México; Instituciones académicas locales; Secretaría de Salud de la Ciudad de México; STyFE, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil. No obstante, en algunos casos se valoró que la fuerza para incidir variaría de acuerdo con sus recursos, funciones y competencias.

Sumado a ello, no podemos dejar pasar las Comisiones y áreas del IECM (incluyendo las ahora controvertidas), haciendo un total de 25 las cuales, de igual forma tienen un nivel de involucramiento alto. Estas son las oficinas de las Consejeras y Consejeros Electorales, las Comisiones de Igualdad de Género y Derechos Humanos; de Vinculación con Programa Específico de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Organismos Externos; de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; de Organización Electoral y Geoestadística; de Participación Ciudadana y Capacitación; de Asociaciones Políticas; de Fiscalización; las Comisiones Provisionales y Unidas; el Comité Editorial; las Secretaría Ejecutiva y Administrativa; las Direcciones Ejecutivas de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; Asociaciones Políticas; de Organización Electoral y Geoestadística; Participación Ciudadana y Capacitación. Así como las Unidades Técnicas de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados; Asuntos Jurídicos; Servicios Informáticos; Comunicación Social y Difusión; del Centro de Formación y Desarrollo; Vinculación con Organismos Externos; Género y Derechos Humanos y los Órganos Desconcentrados.

De igual manera, 2 Comisiones Permanentes, 1 Comisión Central y 2 áreas: la Contraloría Interna, así como la también impugnada Unidad Técnica Especializada de Fiscalización; las Comisiones Permanentes de Normatividad y Transparencia y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; así como la Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo del IECM.

La entrada en vigor del decreto, pone en riesgo la finalidad de resolver a través de un análisis de género especializado el reconocimiento, visibilización y el dimensionar

### Derecho a la Consulta

En el mes de junio del presente año, ese máximo tribunal resolvió la inconstitucionalidad de diversas leyes por violar el **derecho a la consulta**. Lo anterior se dio a conocer al resolver las acciones de inconstitucionalidad 210/2020, 297/2020; 244/2020, 81/2021, 204/2020, 295/2020; 168/2021, 38/2021, 255/2020 y 71/2021.<sup>9</sup>

Algunos de los grupos que se verán afectados y que NO fueron consultados acerca de las implicaciones de la desaparición de la Unidad de Género y Derechos Humanos son:

- **Mujeres indígenas.**
- **Mujeres afroamericanas.**
- **Población LGTBTTI.**
- **Personas mayores.**
- **Personas con discapacidad.**
- **Personas indígenas.**
- **Personas migrantes.**
- **Personas víctimas.**

#### d. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

La entrada en vigor del decreto, pone en riesgo la finalidad de resolver a través de un análisis de género especializado el reconocimiento, visibilización y el dimensionar las desigualdades y asimetrías entre los sexos y género, lo cual permite determinar las causas que están detrás

<sup>9</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comunicado 213/2022, consultado en fecha 24 de junio de 2022 y disponible en <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6936>



II LEGISLATURA

de las discriminaciones que viven las poblaciones, así como sus causas y efectos.

Por citar un ejemplo, éstos son algunos temas que podrían incidir en una desprofesionalización:

**Paridad.** Es necesario conservar la mayor observación sobre la participación, presencia y actuación de las mujeres electas a los cargos populares; promover la capacitación y fortalecer las habilidades de las tomadoras de decisiones, así como a generar herramientas sustanciales para prevenir, atender e investigar la violencia política.

**Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.** Es una problemática estructural y compleja, que no es fácil de deconstruir, en ese sentido el IECM debe continuar trabajando por transformar esta realidad a través de diversas acciones que incidan directamente en la participación sustantiva de las mujeres y en su acceso a los cargos de elección popular; dándose a la tarea de sumar a los mecanismos, programas y acciones que desarrolla con perspectiva de género, instrumentos y talleres que servirán en la prevención, erradicación, atención y sanción de esta violencia.

**Mujeres indígenas.** En su experiencia de participación política, en sus avances, sus desafíos y las manifestaciones de violencia política de género que han enfrentado, se reflejan el racismo, el machismo, la discriminación y la exclusión que persiste en la base de las relaciones entre la sociedad y las colectivas indígenas, particularmente hacia las mujeres; y se concreta también la triple exclusión de la que son objetos: por ser mujeres, por pertenecer a un pueblo indígena y por su condición socioeconómica.

**Mujeres afromexicanas.** Las mujeres afrodescendientes han sido discriminadas por diversas causas, siendo las más recurrentes: por ser de origen africano, haber sido esclavizadas y por ser mujeres. Entre sus principales demandas, las mujeres afromexicanas exigen:

- Reivindicación de su papel histórico.
- Valoración y salvaguarda de su patrimonio cultural.
- Derecho a la educación y cultura.



LEGISLATURA

- Eliminación del racismo y discriminación.
- Participación de mujeres afro en espacios de representación política y toma de decisión

**Población LGBTTTI.** De las múltiples problemáticas identificadas en materia de derechos humanos de este sector, tiene que ver con los estereotipos y prejuicios en el momento del diseño e implementación de las escasas políticas públicas dirigidas a esta población y la inexistencia de estadísticas oficiales que permitan visibilizar la situación en que se encuentran.

**Personas mayores.** Se debe seguir trabajando en vencer prejuicios y estereotipos, así como contribuir a la sensibilización y trato digno a este grupo de atención prioritaria por parte de la sociedad, para fomentar su inclusión y no discriminación en las organizaciones políticas, partiendo de reconocer sus capacidades y experiencias.

**Personas con discapacidad.** Continuar con la realización de trabajos para identificar y eliminar las barreras en el entorno y actitudinales que impiden el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, a fin de garantizarles el goce y ejercicio de sus derechos, en igualdad de condiciones con las demás personas.

**Personas indígenas.** Es necesario identificar sistemáticamente las brechas entre la realidad y lo jurídico, político e institucional, para poder revertir situaciones contrarias al ejercicio pleno de sus derechos reconociendo que los pueblos indígenas son parte de la población, que tienen sus propios sistemas normativos, patrones culturales y una cosmovisión diferente a la sociedad dominante, y que merecen un trato igualitario y digno.

**Personas migrantes.** Es indispensable que las autoridades sean conocedoras de la particular situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas migrantes, sobre todo las que están en situación irregular, ya que ello repercute en el goce de sus derechos humanos.

**Personas víctimas.** Es importante tener presente la necesidad de dar seguimiento y estar en continua mejora respecto de las acciones que



H. LEGISLATURA

impidan que los procesos electorales se desarrollen en un clima de violencia que ponga en peligro la vida o integridad física y emocional de las personas participantes.

**Personas en situación de calle.** Aún existen retos para lograr que ejerzan de manera plena sus derechos político-electorales.

**Personas que residen en casas de asistencia social.** La mayoría de las ocasiones se encuentran en condiciones de abandono por parte de sus familias, circunstancia que las pone en una situación extrema de vulnerabilidad, revictimización y discriminación; circunstancia que les impide ejercer sus derechos, incluyendo los político-electorales.

**Igualdad Laboral y No Discriminación.** La actividad de la UTGyDH no se reduce a la atención de los diversos grupos de atención prioritaria, sino en un trabajo al interior que contribuya a la congruencia con el respeto a los derechos humanos que se promueven. se trabaja en reunir la evidencia para afrontar la Auditoría de Recertificación, y en interiorizar una cultura laboral a favor de la igualdad, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos al interior de la institución.

**Factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable.** Se analizan los factores de riesgo psicosocial y su entorno organizacional, lo cual permitirá contar con elementos para la elaboración de un programa de atención al respecto, de acuerdo con la misma NOM 035 y que contribuya a desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno y la mejora continua de las condiciones de trabajo.

En suma, estas acciones se encuentran concatenadas entre sí para ejecutar las atribuciones de la UTGyDH y alcanzar el objetivo central, describiéndose su nivel de interdependencia e incidencia en la solución de:

- Las que dan seguimiento a los procesos de incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos en el quehacer institucional.



II LEGISLATURA

- Las que permiten fortalecer la cultura organizacional, la transversalización del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la promoción de espacios libres de violencia;
- Las dirigidas a coadyuvar en el incremento de la participación de los grupos de atención prioritaria en las instituciones políticas;
- Las que fomentan una cultura y prácticas de igualdad laboral y no discriminación;
- Las orientadas a la prevención y atención de los factores de riesgos psicosociales y la promoción de entornos organizacionales favorables.
- Las que facilitarán las actividades de prevención de la discriminación y las violencias en la participación ciudadana y el ejercicio de los cargos públicos.
- Las que coordinan acciones interinstitucionales para fortalecer los procesos de formación de liderazgos y derechos políticos-electorales de las mujeres y poblaciones LGBTTTI que participan en la política.
- Las que generan y difunden materiales que informen a las mujeres sobre la violencia política en razón de su género y a las poblaciones LGBTTTI sobre sus derechos político-electorales.
- Las que implementan acciones para visibilizar la participación política de las mujeres y las poblaciones LGBTTTI.
- Las que realizan eventos sobre los derechos político-electorales de aquellas poblaciones que han sido discriminadas.
- Las que fortalecen los procesos formativos de las personas servidoras públicas en materia de perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.

### **VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.**

Los retos que impone la transversalización de la perspectiva de género han estado presentes desde el reconocimiento mismo de las obligaciones



II LEGISLATURA

de las instituciones del Estado para garantizar el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de violencia para las mujeres.

A nivel internacional, existen instrumentos que obligan al Estado mexicano a reconocer las condiciones de discriminación, desigualdad y violencia bajo las cuales las mujeres pueden acceder y ejercer sus derechos. Tal es el caso de los que a continuación se mencionan de manera breve: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de 1979; prevé las obligaciones y deberes de los Estados frente a la discriminación contra las mujeres y que se relacionan con la obligación de contar con una política encaminada a eliminar la discriminación contra las mujeres. A la letra, la CEDAW prevé en su artículo 2 lo siguiente:

*Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:*

- a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;*
- b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;*
- c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;*
- d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;*





II LEGISLATURA

- e) *Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;*
- f) *Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;*
- g) *Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.*

***Artículo 3 Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultura, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.***

Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) de 1994, apunta que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas y velar porque todos los agentes e instituciones condenen todas las formas de violencia contra las mujeres, a través de los medios apropiados y sin dilaciones, así como prever acciones orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como se señala en su artículo 7:

#### ***Artículo 7***

*Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:*

- a. *abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;*



II LEGISLATURA

- b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
- c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
- d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
- e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
- f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
- g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
- h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Por su parte, la Convención Belém do Pará prevé la importancia de la progresividad de las medidas que se tomen para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Esto en su artículo 8:

#### Artículo 8

Los Estados Partes convienen en adoptar, **en forma progresiva, medidas específicas**, inclusive programas para:



II LEGISLATURA

**a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;**

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan (sic.) o exacerban la violencia contra la mujer;

c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;

**d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;**

e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;

f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;

g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;

h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y



H. LEGISLATURA

i. *promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.*

En consonancia con lo expuesto, como parte de la Plataforma de Acción de Beijing, se destaca la importancia de contar con Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), cuyo fin es orientarse a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, impulsar y movilizar acciones y medidas tendientes a reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, la Plataforma, como documento rector de las acciones a las que se comprometieron los países para visibilizar los retos y acciones para el adelanto de las mujeres, apunta que:

196. *Se han creado en casi todos los Estados Miembros mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer orientados, entre otras cosas, a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que promuevan el adelanto de la mujer. Los mecanismos nacionales adoptan formas diversas y tienen una eficacia desigual, y en algunos casos se han reducido. **Marginados a menudo en las estructuras nacionales de gobierno, estos mecanismos se ven, con frecuencia, perjudicados debido a mandatos poco claros, falta de personal, capacitación, datos adecuados y recursos suficientes y un apoyo insuficiente de los dirigentes políticos nacionales.***

197. *En los planos regional e internacional, los mecanismos y las instituciones destinados a promover el adelanto de la mujer como parte integrante del desarrollo político, económico, social y cultural general y de las iniciativas en materia de desarrollo y de derechos humanos tropiezan con problemas similares derivados de la falta de compromiso en los niveles superiores.*

Como parte del diagnóstico que se apunta en la Plataforma, se reconoce la importancia de impulsar estos mecanismos en cada país, señalando la importancia de que existan mecanismos y procesos instituciones que



II LEGISLATURA

agilicen la planificación descentralizada, la ampliación y la vigencia para lograr la participación de todos los sectores de la sociedad en el compromiso por los derechos de las mujeres. En consonancia con lo expuesto, la Plataforma da pauta para precisar la relevancia que tienen los mecanismos para el adelanto de la mujer como instancias federales, nacionales y en cada institución que tiene atribuciones públicas.

Asimismo, la Novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, en junio de 2004 (Consenso de México), señaló que: Los gobiernos de los países participantes en la novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso por asegurar la plena incorporación de la Perspectiva de Género en todos los Planes y Programas de gobierno, con especial énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, tal como se describe en el siguiente inciso:

*XIX) Garantizar a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer los recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad política y la consolidación de su rango institucional al más alto nivel, a fin de que puedan cumplir sus mandatos con eficacia y eficiencia.*

Por su parte, en la Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador, en agosto de 2007 (Consenso de Quito), las representantes ratificaron su reconocimiento a la labor de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres "consistente en la formulación, el diseño y la gestión de Políticas Públicas para la igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel de los Estados de la región y, a la vez, conscientes de que los Estados son quienes deben asumir los retos que demanda la garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes de la región" y se comprometieron a:

*1) Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se*



II LEGISLATURA

*fortalezca la institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos.*

El Estado Mexicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará), que tienen como propósito general el proteger los derechos humanos de las mujeres y establecer su derecho a una vida libre de violencia.

En cuanto al marco jurídico mexicano, la Constitución Federal establece en su artículo 1º que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que las autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, garantizando la protección más amplia y quedando prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por razones de género, y en su artículo 4º establece la igualdad de mujeres y hombres ante la ley.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, obliga al Estado a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas; define lo que se entenderá por discriminación y describe las conductas discriminatorias que deben eliminarse.

Aunado a lo expuesto, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres prevé que las personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas deberán conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, lo que comprende, entre otras acciones, **“crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y el Distrito Federal”** (art. 15, fracción II).



II LEGISLATURA

Como parte del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (PROIGUALDAD), prevé que:

*El Ejecutivo Federal reconoce que, para hacer efectivos los derechos de las mujeres a una vida libre violencia y de acceso a la justicia; la prevención, la institucionalización, la transversalidad; el fomento a la igualdad, la no discriminación y la eliminación de los estereotipos de género en el ámbito sustantivo y la cultura organizacional, requiere la participación de diversas autoridades, de los distintos órdenes de gobierno, y demás Poderes de la Unión, así como de los organismos constitucionalmente autónomos, para lo cual buscará establecer en términos de la Ley de Planeación, la coordinación para la ejecución del Plan Nacional y del PROIGUALDAD.*

Asimismo, en el PROIGUALDAD se apunta que:

*Este Programa, emanado de los compromisos y directrices asumidas por el Gobierno de México en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde a las demandas ciudadanas y a un diagnóstico profundo sobre los problemas que enfrentan actualmente las mujeres mexicanas, a los principales retos para avanzar a la igualdad, da cumplimiento a los ordenamientos nacionales e internacionales relativos a los derechos de las mujeres, así como a las recomendaciones y orientaciones hechas al Estado Mexicano por instancias internacionales, como el Comité de la CEDAW y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, asumiendo así plenamente la responsabilidad y el compromiso con la seguridad, bienestar, libertad e igualdad de las niñas y mujeres mexicanas.*

En ese sentido, se reconoce la plena participación de todas las instituciones, para que en el ámbito de sus competencias hagan efectivos los derechos de las mujeres, reconociendo la relevancia de la cultura organizacional, la institucionalización y la transversalidad de la perspectiva de género y de derechos humanos incluso en las instituciones autónomas.



## II LEGISLATURA

Destacan los avances a nivel federal, particularmente en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, a raíz de la reforma de 2018 apuntó en artículo Vigésimo primero transitorio que: “El Ejecutivo Federal deberá instituir las Unidades de Género de la Administración Pública Federal en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”.

En este punto, es importante mencionar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya contaba, desde 2016, con un área que, entre otras atribuciones, tenía la relativa a encaminar las políticas relacionadas con la progresividad de los Derechos Humanos de las mujeres; sin embargo, ante la necesidad de que los trabajos fueran técnicamente especializados, en el año 2019 las acciones de género y DDHH se escindieron para dar vida a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos.

Derivado de las reformas de 2019 y 2020, en materia de paridad y de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, el Congreso de la Ciudad de México debía adecuar la normativa local a las nuevas disposiciones constitucionales a fin implementar acciones y políticas públicas tendentes a erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, situación que no ocurrió, pues fue omiso en la obligación de crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres en la Ciudad de México.

En efecto, el Congreso de la Ciudad de México fue omiso en la elevación a rango de ley de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, situación que, no obstante, fue solventada por la propia autoridad electoral local quien, en el ejercicio de las atribuciones que otorga, creó esa área técnica especializada.

Hoy, el Congreso de la Ciudad de México **minimiza la necesidad de un trabajo especializado** para atender las diferencias históricas existentes entre hombres y mujeres, **reduciéndolo a una cuestión de educación cívica y construcción de ciudadanía**, sin analizar que esas funciones formativas **requieren de un trabajo previo, transversal y enfocado a**





II LEGISLATURA

**elaborar las directrices que hagan posible el cambio estructural que se requiere para erradicar la desigualdad entre los sexos.**

Ahora bien, en el marco normativo local, la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4, apartado A, inciso 3, establece la obligación de todas las autoridades para, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y, en el apartado B, menciona que las autoridades atenderán los principios rectores de los derechos humanos como son: las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión y la accesibilidad en la aplicación transversal de los derechos humanos.

En ese sentido el artículo 11, apartado C de dicho ordenamiento, establece que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

Por su parte, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México en sus artículos 3, 13 y 14, establece que la Administración Pública impulsará la igualdad entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de Derechos Humanos en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados a través de las Unidades Responsables del gasto.

Asimismo, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México dispone los términos que deberán preverse para el diseño e implementación de la Política en materia de igualdad sustantiva; al respecto, señala la importancia de observar la integralidad de los derechos humanos y garantizar la planeación presupuestal atendiendo al principio de progresividad y a la perspectiva de género:

*Artículo 10.- - La Política en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos los ámbitos de Gobierno en la Ciudad de México, deberá considerar los siguientes lineamientos: I. Generar la integralidad de los Derechos Humanos como mecanismo para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; II. Garantizar que la planeación*



■ LEGISLATURA

*presupuestal incorpore la progresividad, la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;*

Asimismo, en el artículo 21 de la ley señalada se apunta que los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los instrumentos internacionales, **por lo que se precisa de áreas especializadas al interior de las instituciones para dar cumplimiento a este precepto.**

Por lo expuesto, la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos representa la materialización de los compromisos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para incorporar en sus funciones principales la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en observación al marco normativo Convencional, nacional y de la Ciudad de México que impulsa el adelanto de las mujeres y de grupos de atención prioritaria en el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, a través de la promoción e implementación de acciones, políticas y medidas que permeen al interior de la institución y contribuyan hacia el exterior, en los escenarios de la competencia política y de participación ciudadana, en cumplimiento del principio constitucional de paridad, así como para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

En ese sentido, la extinción del área y la transmisión de sus funciones a otra resulta regresivo al orden garantista y obligatorio para observar la progresividad de los derechos de las mujeres, y de poblaciones históricamente discriminadas, al reducir la programación y planeación de actividades específicas desarrolladas por personal especializado que han abonado a la disminución de brechas de desigualdad, así como al fortalecimiento de sus liderazgos.

Por otra parte, es menester señalar que el principal argumento del Congreso de la Ciudad de México para eliminar (entre otras) a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la



II LEGISLATURA

Ciudad de México es el relativo a gastos onerosos contrarios al principio de austeridad.

Al respecto en la Sentencia recaída en el juicio SUP-RAP/088/2020, esa Sala Superior, respecto de la eliminación de la figura de la Diputación Migrante por razones de presupuesto valoró lo siguiente:

*"(...)*

*En ese sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha razonado que las medidas de carácter deliberadamente regresivas requieren de una consideración más cuidadosa, debiendo justificarse plenamente y según el aprovechamiento pleno de los recursos que el Estado tenga a su alcance.*

*Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado la necesidad de otorgar una atención especial a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, por lo cual las medidas regresivas en materia de grupos vulnerables deben ser adoptadas en circunstancias extraordinarias y considerando todos los demás derechos.*

*En el caso, sin embargo, no se advierte una justificación adecuada que explique la supresión de la figura de diputación migrante. Sobre todo, y considerando que se trata de un derecho especial en función de un grupo, tampoco se desprende que la decisión se haya tomado a partir de una circunstancia extraordinaria que así lo justifique, o en atención a una imperante necesidad de interés público.*

*La justificación que proporcionó el órgano legislativo de la Ciudad de México para suprimir esta figura se basó, esencialmente, en la falta de recursos económicos para su implementación.*

*Sin embargo, esta Sala Superior considera que el legislador se encontraba obligado a justificar de manera reforzada, así como a demostrar la imposibilidad de materializar la diputación migrante según el aprovechamiento pleno de los recursos a cargo de la Ciudad de México, de entre otros medios que pudieran ser considerados idóneos, y no meramente señalar que no contaban con los recursos necesarios para*



II LEGISLATURA

*poder implementar esa forma de regulación del derecho a ser votado por un grupo vulnerable...”*

Como puede apreciarse, *mutatis mutandi*, el Congreso de la Ciudad de México, en forma reiterada ha implementado modificaciones regresivas en la normatividad electoral de la Ciudad de México, bajo el argumento de la austeridad y eficiencia del gasto, pasando por alto que, en materia de género y derechos humanos, precisamente la inversión pública constituye un deber para todas las instituciones de la Ciudad de México.

e. **VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS**

La progresividad de los derechos humanos, la encontramos en el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

*Artículo 1.- ...*

*...*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y **progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

**(Énfasis añadido)**

El principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1948, en sus 30 artículos consagró la protección de derechos civiles y políticos así como de derechos económicos, sociales y culturales.



II LEGISLATURA

Estos derechos fueron a su vez protegidos en dos tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados en 1966 y obligatorios para México desde 1981. Desde el proceso de elaboración de los dos Pactos Internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1950, en su Resolución 421 E (V), señaló que el goce de derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales *"están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente"*.

Los dos Pactos Internacionales, que se procuró contemplaran disposiciones comunes, cada uno en su artículo 2 señala el compromiso "a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". Asimismo, en el artículo 3 estableció el compromiso a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales enunciados en cada Pacto. De ello se desprende que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, que se conoce como el principio de universalidad.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2 señala el compromiso "a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos". El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General número 3, de 1990, señaló en su párrafo 9 que la "progresiva efectividad" implica un reconocimiento de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales podrá lograrse en un periodo de tiempo, pero impone la obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible para lograr ese objetivo.

Desde 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 32/130, reafirmó que "todos los derechos humanos y libertades



II LEGISLATURA

fundamentales están interrelacionados y son indivisibles”, que se han caracterizado como los principios de interdependencia e indivisibilidad. De esta forma, en 1993, en la Convención Mundial de Derechos Humanos se aprobó la Declaración y Programa de Viena, que en su numeral 5 precisó *“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”*.

De lo anterior, se puede observar el desarrollo de los principios de derechos humanos de **universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos**.<sup>10</sup>

A ese respecto, ése máximo Tribunal ha sostenido las siguientes tesis:

#### **PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS.**

El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos

<sup>10</sup> “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, segunda reimpresión, agosto de 2018, México, p. 3-5.



LEGISLATURA

de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar).<sup>11</sup>

### **PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.**

El principio de progresividad estuvo originalmente vinculado a los -así llamados- derechos económicos, sociales y culturales, porque se estimaba que éstos imponían a los Estados, sobre todo, obligaciones positivas de actuación que implicaban el suministro de recursos económicos y que su plena realización estaba condicionada por las circunstancias económicas, políticas y jurídicas de cada país. Así, en los primeros instrumentos internacionales que reconocieron estos derechos, se incluyó el principio de progresividad con la finalidad de hacer patente que esos derechos no constituyen meros "objetivos programáticos", sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados, como la de garantizar niveles mínimos en el disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como obligaciones de cumplimiento mediato que deben ser acometidas progresivamente en función de las circunstancias específicas de cada país. Ahora bien, esta Primera Sala considera que, a pesar de su génesis histórica, el principio de progresividad en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los económicos, sociales y culturales. En primer lugar, porque el artículo 1o. constitucional no hace distinción alguna al respecto, pues establece, llanamente, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus

<sup>11</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, Décima época, Primera Sala, Núm. de Registro: 2013216, tesis 1a. CCXCI/2016 (10a.)



H. LEGISLATURA

competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar, porque ésa fue la intención del Constituyente Permanente, como se advierte del proceso legislativo. Pero además, porque la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado, pues para proteger cualquiera de esos derechos no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos, es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad.<sup>12</sup>

En ese tenor de ideas, la progresividad implica una obligación del Estado Mexicano para aplicar de una manera más amplia y brindar una mejor protección y garantía de los derechos humanos.

El dictamen que se combate con la presente acción implica un retroceso para los derechos humanos en un doble aspecto. En primer lugar, se desaparece una unidad que se diseñó exclusivamente para la atención de los derechos humanos y sus garantías. Y el segundo lugar, las reformas aprobadas eliminan la especialización del personal que se dedicaba ésta área, ya que tendría que atender otras áreas en un evidente retroceso en perjuicio de las y los habitantes de la capital del país.

Ahora bien, ¿en qué consiste ese retroceso o regresión? La reforma implica una desaparición de cinco direcciones y unidades más aproximadamente 100 plazas que impacta directamente en:

- a. La autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Que la fuerza política mayoritaria en el Congreso de la Ciudad de México a través del ejercicio legislativo decida recortar su estructura orgánica

<sup>12</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Décima Época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Registro digital: 2015306, Tomo I, página 191.





## II LEGISLATURA

anula la capacidad de auto organizarse para llevar a cabo su operación de manera independiente y alejada de cualquier tendencia política.

Al tratarse del órgano constitucional autónomo garante de la democracia en la Ciudad de México, el ejercicio del poder a través de las tres funciones tradicionales -administrativa, legislativa y judicial- debe estar encaminada siempre a proteger y maximizar esa democracia. Cualquier ejercicio de poder contrario a ese fin, será inconstitucional y contravendrá los principios pilares de cualquier Estado democrático constitucional -artículo 40 de la Constitución Federal-.

- b. La organización del Instituto Electoral de la Ciudad de México no es baladí, el presupuesto que se había venido otorgando, la ampliación en sus recursos humanos y técnicos venía obedeciendo a la tarea de organizar procesos electorales competitivos, equitativos y bajo altos estándares de calidad, de tal manera que se garantice la alternancia en cargos de elección popular, mayor pluralidad y respeto y protección al ejercicio de los derechos político electorales.

Recortar presupuesto y restar recursos humanos y técnicos al Instituto Electoral de la Ciudad de México justificándose en una política de austeridad -que dicho sea de paso no es aplicable a los órganos constitucionales autónomos-, significa una regresión a los tiempos en que los elementos que se eliminan con el Decreto impugnado no existían, en el que las elecciones se llevaban a cabo conforme a los intereses del partido gobernante.

- c. La eliminación de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, reduce los recursos humanos y técnicos para señalar las conductas ilegales y aplicar la ley, lo que tendrá un efecto negativo en la calidad y las condiciones de competitividad de los comicios. ¿Cómo se puede garantizar una elección o ejercicio de mecanismos democráticos sin una autoridad fuerte en materia de fiscalización de los entes políticos participantes?



H. LEGISLATURA

d. Una reforma de la talla que contiene el Decreto impugnado, forzosamente debió ser antecedida por una reforma constitucional que limite la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México. De ser validada por la Suprema Corte la reforma impugnada, significaría develar el camino a las demás entidades federativas para que, a través de una reforma legal, debiliten y minen el desempeño de los órganos encargados de velar para que los ejercicios democráticos se lleven en las mejores condiciones.

**f. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE ESPECIALIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Es fundamental contar con áreas especializadas como por ejemplo la Unidad Técnica de Fiscalización, así como la Unidad de Género y Derechos Humanos que cumplimentan las acciones encomendadas al Instituto, previstas en el citado artículo 36 del referido código electoral local relacionadas con el fortalecimiento del régimen de asociaciones políticas y garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. Áreas integradas con personal altamente capacitado en las materias de fiscalización, género y derechos humanos en las que se aprueban políticas, reglamentaciones y líneas de acción dirigidas a ejecutar con profesionalización estos fines del Instituto.

En este sentido, en la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 31 prevé que el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un órgano de carácter permanente y **profesional en su desempeño**, goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Asimismo, el artículo 46 prevé la naturaleza jurídico-política de los organismos autónomos, entre los cuales se encuentra el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Igualmente, señala que tales organismos son de carácter **especializado** e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.



## II LEGISLATURA

En ese tenor, en el apartado B, numeral 1 de ese mismo dispositivo legal, se precisa que:

...

1. *Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones.*

...

Atento a lo anterior, se advierte que la Constitución local prevé específicamente que los órganos constitucionales autónomos deben ser **especializados y profesionales** en el **desempeño** de sus **actuaciones**, ello para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confiere la normativa, esto es; se requiere de funcionarios altamente capacitados.

Así, en la doctrina se habla de una *autonomía funcional*, que destaca que los órganos constitucionales autónomos poseen funciones específicas con el fin de obtener mayor especialización, agilidad, control y transparencia en la atención de las demandas sociales. Al mismo tiempo, que su actuación no está sujeta a los depositarios tradicionales del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). De tal forma, que cuentan con competencias propias y con la independencia funcional para llevarlas a cabo.<sup>13</sup>

Por otra parte, también se señala que tienen una *autonomía técnica*<sup>14</sup>, esto es, la capacidad para decidir en los asuntos propios de la materia específica que les ha sido asignada, mediante procedimientos especializados, con personal calificado para atenderlos.

Se precisa igualmente, que los órganos constitucionales autónomos deben ser arropados con personal profesional especializado en las tareas concretas que les corresponde realizar. Esta condición es esencial y marca de inmediato una diferencia sustancial con cualquier otro órgano o espacio de poder. Se puntualiza que, con excepción del Poder Judicial, ni en el Ejecutivo ni el Legislativo se exige a sus servidores públicos,

<sup>13</sup> Ruiz, José Fabian. Los órganos constitucionales autónomos en México: una visión integradora. Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

<sup>14</sup> Ugalde Calderón, Filiberto Valentín. Órganos constitucionales autónomos, Revista del Instituto de la Judicatura, no. 29, pp. 259.



## II LEGISLATURA

habilidades técnicas o preparación especializada para ser nombrados en cargos de alta responsabilidad.<sup>15</sup> Es decir, el carácter técnico y especializado conduce a que las funciones se realicen con ese carácter, y no dependientes del partido que está en el gobierno, cualquiera que sea este partido.

De esa forma, el Instituto Electoral de la Ciudad de México busca en todo momento capacitar antes y durante el desempeño del funcionariado público, para que cuente con las herramientas necesarias que le permitan actuar con el mayor nivel de eficiencia, eficacia y efectividad.

### I. Afectación del principio de profesionalización del personal

Como se apreció con anterioridad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México debe ser un organismo profesional en su desempeño, con órganos ejecutivos y técnicos que deberán contar con personal calificado para el ejercicio de sus atribuciones.

La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo es el área encargada de gestionar las actividades y programas necesarios, a fin de cumplir con la obligación constitucional de contar con personal profesional.

Para la consecución de ese fin implementa actividades específicas como la selección, profesionalización, inducción, evaluación del desempeño, promoción, cambios de adscripción, rotación y permanencia. Realiza actividades de capacitación, la detección de necesidades de formación, desarrollo, capacitación y actualización del personal propone a la Junta Administrativa el otorgamiento de estímulos e incentivos.

Es el órgano de enlace con el Instituto Nacional Electoral para los temas relativos al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) por lo que se implementan constantes vías de comunicación con esa autoridad. La importancia de esta atribución radica en que, al tratarse de un servicio profesional nacional, debe existir coordinación y colaboración institucional,

<sup>15</sup>Uribe Arzate, Enrique. Autonomía de los órganos constitucionales. 30 Cuadernos de Transparencia, INAI, pp. 42



II LEGISLATURA

a fin de que las determinaciones tomadas sean conocidas por la totalidad del personal, e implementar las acciones necesarias para su cumplimiento.

Otra de sus actividades sustantivas es la de iniciar e instruir el recurso de inconformidad en el procedimiento laboral sancionador del personal del SPEN, conforme a lo previsto en el artículo 32 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por lo que al suprimir a la Unidad se pierde al órgano sustanciador que conoce de primera mano las actividades y funcionamiento del SPEN.

Por otra parte, al asignar a la Secretaría Administrativa las atribuciones con las que contaba la Unidad, podríamos estar en presencia de una saturación del área operativa y de gestión por excelencia del Instituto Electoral, que originariamente cuenta con una carga de trabajo desproporcionada para su estructura, al tener a su cargo el control administrativo de 33 Direcciones Distritales y de oficinas centrales.

Imponerle a la Secretaría obligaciones adicionales generaría un impacto en la atención de otras actividades, tales como la correcta aplicación y administración del gasto, y el suministro de bienes y servicios, lo cual podría generar un colapso en las áreas.

Atento a lo anterior, la disminución de la estructura electoral (eliminar cinco áreas técnicas) para un manejo óptimo de los recursos, como lo menciona el Dictamen que presentó la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la CDMX, sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto<sup>16</sup>, pone en peligro el óptimo desempeño del Instituto Electoral, pues compromete el cumplimiento de las atribuciones que se tiene encomendadas a nivel constitucional y legal, al no tener un nivel de profesionalización y especialización en su actuar.

En efecto, lo único que se ordena en el Decreto que se controvierte, es redistribuir de forma arbitraria y simplista las facultades y atribuciones que tienen actualmente encomendadas las áreas antes citadas a otras áreas del Instituto, a saber:

<sup>16</sup> <https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6ec7eec8c55087923ce1bb41230c1f4ab4a3cc99.pdf>



## II LEGISLATURA

- a) El apoyo a órganos desconcentrados, documentación y archivo pasa de la UTALAOD a la Secretaría Ejecutiva, mientras que las tareas de logística las pasa a la Secretaría Administrativa.
- b) Las funciones que desarrolla la UTVOE pasan a la Secretaría Ejecutiva.
- c) Las tareas que actualmente realiza la UTCFyD pasarán a la Secretaría Administrativa.
- d) Las atribuciones de la UTEF se propone que las conozca la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y con ello modificar la denominación de la citada Dirección, para quedar como Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización.
- e) Las tareas que realiza la UTGyDH se plantea que las ejerza la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, modificando la denominación de la citada Dirección, a saber: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Construcción Ciudadana y Género.
- f) Derivado de lo anterior, se propone pasar de ocho a tres Unidades Técnicas: de Asuntos Jurídicos (UTAJ), de Servicios Informáticos (UTSI) y de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD).

Estas modificaciones que realizó el Congreso de la CDMX fueron planteadas sin un estudio, análisis, investigación, diálogo con organismos de la sociedad civil, expertos en la materia, funcionarios del propio Instituto Electoral en relación con la especialización y profesionalización que se requiere para ejercer esas atribuciones.

En efecto, si bien la reforma no modificó las atribuciones del Consejo General, sí afectó el cumplimiento de las atribuciones mandatadas por el propio Código al Instituto Electoral, al transformar la estructura orgánica del mismo y concentrar actividades relevantes en otras áreas en las cuales el personal, que no se encuentra calificado para ello, deberá afrontar en nuevas tareas en forma casi inmediata, con la consecuente curva de aprendizaje y frente a los procesos de preparación de la siguiente elección de Comisiones de Participación Comunitaria y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y, desde luego del Proceso Electoral Local 2023-2024.



II LEGISLATURA

El Congreso de la Ciudad de México al aprobar la reforma que hoy se controvierte no consideró lo previsto en el artículo 37 del mismo Código electoral, relativo a que la estructura del Instituto puede ser modificada atendiendo a las necesidades del propio Instituto, o bien, a las atribuciones de delegación que otorgue el Instituto Electoral, disposición que más allá de garantizar su autonomía, permite poder construir o modificar la organización interna para cumplir con las obligaciones y retos que la progresión de derechos impone a esta autoridad electoral en cada Proceso Electoral Local y ejercicio de Participación Ciudadana.

Aun cuando en la reforma se realiza una redistribución de funciones, ésta no se realizó previendo la naturaleza de las actividades, **ni los elementos esenciales necesarios para realizarlas en estricto apego al principio de profesionalización** con el que las personas servidoras públicas del Instituto Electoral desarrollan sus actividades capacitándose continuamente para su cumplimiento.

Así, la profesionalización de las personas servidoras públicas resulta tan relevante que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis **XXVI/2019**<sup>17</sup>, sostiene que, al ser la organización de los comicios una función estatal a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, los cuales tendrán servidoras y servidores públicos designados conforme el procedimiento respectivo a fin de garantizar el **profesionalismo** en el desempeño de su cargo.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales apunta respecto de los Organismos Públicos Locales que éstos deben estar dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, **y ser profesionales** en su desempeño.

La reingeniería de las áreas del Instituto implicará el destino de recursos económicos y humanos al proceso de reorganización, la cual aun cuando se realice en apego a los principios rectores de la función electoral, incluidos

17

<https://www.te.gob.mx/TUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXVI/2019&tpoBusqueda=S&sWord=profesionalismo>



## II LEGISLATURA

los de racionalidad, austeridad, transparencia y eficacia, impactará directamente en el desarrollo de todas las funciones que realiza el Instituto.

Exponer esta vulneración, la cual ha sido estudiada por los órganos jurisdiccionales en relación con los actos de violencia política en razón de género, en esta ocasión debe extrapolarse para estudiar el conjunto de actos realizados en forma sistemática por el Congreso de la Ciudad de México con el propósito de menoscabar la autonomía del Instituto y con ello el ejercicio de los derechos que ostento como persona consejera, entre ellos, el de participar en la reestructura del Instituto Electoral con el resto de los integrantes del Consejo General.

En principio, siendo el Congreso de la Ciudad de México el órgano constitucionalmente facultado para la modificación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, al recibir la iniciativa de reforma y proceder a su discusión, debió proceder a su análisis desde la naturaleza y atribuciones concedidas tanto por la legislación general como por la local, al Consejo General, y con ello generar de forma armónica una reestructura que cumpliera con la causa eficiente de la austeridad presupuestal, sin menoscabar los derechos de los integrantes del Consejo General y la profesionalización del personal del Instituto.

Cuando se realiza el análisis de un derecho, por regla general en primera instancia, se somete a escrutinio normativo si la prestación que se solicita ante los órganos jurisdiccionales se encuentra ya prevista, o bien si se trata de un caso sujeto a interpretación y armonización con otras disposiciones normativas, como el que nos ocupa, pues al igual que, en los casos en los que se han analizado las circunstancias particulares que rodean cada caso en el que se denuncia una afectación al derecho al ejercicio del cargo, para este caso, se solicita que se analicen las atribuciones de este Consejo, las circunstancias derivadas de la reforma y su impacto en el desempeño de las funciones de las consejeras y consejeros electorales.

Así, como ya se precisó en párrafos anteriores, el artículo 37 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la estructura del Instituto y precisa que ésta puede ser modificada de conformidad con las necesidades del propio órgano electoral. En esa línea argumentativa, el artículo 50, fracción III del mismo ordenamiento prevé como atribución del





## II LEGISLATURA

Consejo General, presentar al Congreso de la Ciudad de México, y en su caso, al Congreso de la Unión propuestas de reforma en materia electoral y de participación ciudadana en temas relativos a la Ciudad de México, por lo que, sin menoscabo de las atribuciones conferidas al Congreso de la Ciudad de México, el Consejo General cuenta con las atribuciones derivadas de su autonomía para presentar las propuestas de reforma en las materias antes mencionadas.

Debe entenderse que lo anterior, forma parte de la lógica y coherencia normativa que desde sus inicios dio autonomía a los órganos electorales para la consecución de sus fines, y garantizó que las personas que integramos el Máximo Órgano de Dirección tuviéramos las facultades para ajustar la estructura del Instituto y proponer modificaciones a la normativa en razón del dinamismo con el que avanza la progresión de derechos en la Ciudad de México y en el país.

No comprender, que con la experiencia se puede llegar al mismo fin, en sí mismo constituye una regresión en la naturaleza de los órganos autónomos, sino que vulnera los derechos de las y los consejeros electorales, de la misma forma en que se haría si no se les permitiera tomar parte en las discusiones y deliberación de los asuntos que se someten al conocimiento del Consejo General.

Por su parte, el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución general, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 constitucional,<sup>18</sup> las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución o a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México sea parte.

La reforma de mérito no se justifica incluso en su exposición de motivos en el fortalecimiento a la democracia, en mejores prácticas nacionales o internacionales, en hacer más eficiente el desempeño de la función electoral, nada de eso, sólo se razona que con la modificación estructural se conseguirían ahorros económicos lo cual, si bien resulta relevante en un

<sup>18</sup> Es decir, dejando a salvo el control abstracto de las leyes en la materia mediante las acciones de inconstitucionalidad.



## II LEGISLATURA

marco de austeridad, eficiencia y racionalidad presupuestal, no puede estar por encima de garantizar el buen desempeño de quienes ocupamos el cargo de consejeros y consejeras electorales ya que la labor que tenemos encomendada es la que permite garantizar el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral en las distintas aristas que comprenden las áreas afectadas con la reforma (en especial la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, en general, y de forma particular de aquellos sectores vulnerables y minoritarios que requieren una atención especial en la protección de los derechos político-electorales, de lo cual ya se ha dado cuenta ampliamente.

### **a. Se recorta o limita el ámbito sustantivo de protección del derecho involucrado**

Resulta evidente desde el análisis de los razonamientos que el legislativo expone tanto para el decreto aprobado, como desde el dictamen de la Comisión legislativa competente, que no hay una búsqueda de fortalecer el ejercicio de la función de las consejerías sino de limitarlo.

### **b. La medida está justificada por razones de peso**

Tampoco se supera tal condición, ya que las razones que se desarrollan en la exposición de motivos y que justifican la reforma son:

1. La austeridad, racionalidad y eficiencia, para que los procesos electorales sean menos costosos, lo que trasciende a las autoridades electorales.
2. Que los Organismos Públicos Locales Electorales tienen atribuciones limitadas por la centralización de funciones que recaen en el INE.

Adicionalmente, se menciona que los rubros en que se sostiene son:

#### **Optimización de competencias, en donde se expone que:**

- Al ser atribución del INE la fiscalización, no se justifica el gasto a una Unidad Técnica local que realice la fiscalización -que sí compete al IECM-, y de un análisis a las organizaciones que se fiscalizan en lo local, se concluye que es mejor mandar a la DEAP las funciones de fiscalización.



## II LEGISLATURA

- Resulta mejor agrupar en la Secretaría Ejecutiva las funciones de vinculación con organismos externos y con las 33 Direcciones Distritales para ejercer óptimamente los recursos.
- Considera mejor asignar a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía las funciones de Género y Derechos Humanos, a fin de que estos sean incluidos en sus programas y, con ello, visibilizar rezagos y limitaciones en dichas materias.
- Al fortalecer las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, se contaría con procesos administrativos suficientes y necesarios para conservar y mejorar la calidad en la gestión de sus procesos administrativos internos.

**2. Los costos de la democracia y el gasto eficiente,** en dicho apartado, se hace un análisis de naturaleza eminentemente presupuestal en donde ante un desconocimiento de la función electoral y mermando la autonomía del Instituto se concluye que no existe justificación para el aumento de los recursos solicitados por el IECM.

- En la explicación que presentan, acuden a argumentos de mejorar la distribución de competencias y efficientar el gasto.

Más adelante, se hace una alusión al gasto per cápita en materia electoral, en donde se maneja que la Ciudad de México es la más cara del país, sin considerar las diferencias que hacen particularmente compleja la administración del Instituto y que derivan de atribuciones específicas que no se ejercen en otras entidades federativas como lo es el presupuesto participativo, o la propia ejecución de funciones permanentes por parte de las direcciones distritales.

Absurdo resulta el argumento que busca justificar la "eficiencia" pues dicen que el IECM debería exigir con ese ajuste presupuestal que el INE cumpla a cabalidad sus funciones, como si hubiera duplicidad entre ambas instituciones lo que, por el contrario, atiende al sistema de distribución de competencias trazado desde el propio artículo 41 constitucional.



II LEGISLATURA

Después de una mención de las plazas y sueldos que comprende cada una de las áreas que se eliminaron, se concluye que habría que eliminar 105 plazas que representan un ahorro de más de 52 millones de pesos.

Como puede observarse, no existe la justificación necesaria para este tipo de actos ya que, si bien no es menor la austeridad que incluso viene dictada desde la Ley de Austeridad local, no resulta suficiente frente al derecho político electoral en juego y que incide de forma directa en la función electoral con lo que ello conlleva:

- La organización de elecciones íntegras.
- La planeación y ejecución de acciones vinculadas con el presupuesto participativo.
- Las actividades propias de la fiscalización local.
- El garantizar a la ciudadanía el derecho político-electoral de votar y ser votada dentro de la cual se encuentran todos aquellos grupos vulnerables y que también se han visto afectados con esta reforma, por mencionar algunos:
  - Mujeres en situación de violencia.
  - Pueblos y barrios indígenas.
  - Personas de la comunidad LGBTTI+.
  - Personas afrodescendientes.
  - Personas migrantes.

Atendiendo al argumento de eficiencia en el gasto, distribución y optimización de competencias y demás, se puede evidenciar que las razones son subjetivas, genéricas, se acude a lugares comunes y nunca se ocupa de explicar de manera fundada y motivada por qué es que con las medidas aplicadas se generarían los resultados que la mayoría legislativa ve.

El generar una súper Secretaría Ejecutiva y una súper Secretaría Administrativa, que de entrada constituyen órganos cuya naturaleza atiende a otro tipo de funciones por definición, dotándoles de atribuciones sustantivas propias de áreas técnicas o Direcciones Ejecutivas sólo para concentrar funciones buscando "mejorar la coordinación" de forma horizontal, más que justificaciones de peso, pareciera que evidencian un desconocimiento de cuál es la naturaleza administrativa de ambas



H. LEGISLATURA

Secretarías que, en ningún lugar del país, para muestra la configuración del INE, concentran funciones sustantivas o de vinculación con instancias que fortalecen la democracia.

Más aún, pareciera que administrativamente tampoco encuentra peso suficiente puesto que en vez de generar una distribución de competencias razonable en áreas específicas que atiendan funciones concretas, busca concentrar en espacios unipersonales que no se sujetan al seguimiento de Comisiones Permanentes, la función electoral.

Acudiendo a los planteamientos que incluso esa Sala Superior expuso en el recurso de reconsideración invocado se puede decir que, al igual que en tal precedente, del dictamen legislativo que precede a la reforma de este caso, no se advierte evidencia empírica alguna sobre el mejoramiento de la función electoral a partir de las medidas que impone, sea la concentración de poder en algunas áreas, o bien de la desaparición de otras, cuando las consideraciones a partir de directrices no pueden estar por encima de consideraciones basadas en derechos, lo que indica un serio déficit argumentativo en el proceder del órgano legislativo local al restringir el derecho político electoral traducido en poder garantizar la función electoral a través del seguimiento y control que se lleva en Comisiones que tratan temas sustantivos y que corresponden con áreas específicas que los atienden.

Es decir, el hecho de que el Congreso cuente con la atribución de expedir leyes, así como derogar normas o modificar su contenido, no implica permitir un actuar arbitrario del legislativo, ya que debe estar sujeto a una motivación que comprenda la justificación sobre por qué se ajusta la norma actuando dentro de los límites que la constitución impone, como referencia se cita la **tesis 68 plenaria jurisprudencial** sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro **FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA**.

**c. Cuando disminuye o desvían sensiblemente los recursos públicos destinados a su satisfacción**

Tampoco se da este supuesto, ya que justamente al enfocarse en los recursos públicos destinados a la función electoral, los cuales pareciera el legislativo ve



## II LEGISLATURA

con ansias para otro tipo de actividad pública, tiene a menos los principios democráticos involucrados, puesto que sin mayor empacho y de forma tajante sostienen como innecesaria la existencia de las unidades técnicas eliminadas, o la creación de nuevas unidades técnicas, así como que las personas consejeras demos seguimiento a los temas que fortalecen la democracia en la Ciudad de México.

En la reforma combatida, más que buscar recursos para satisfacer la exigencia social de elecciones libres, democráticas e íntegras, así como el ejercicio de participación ciudadana organizados con el mayor celo y responsabilidad, se acudió directamente al recorte presupuestal como vía para reordenar al Instituto fortaleciendo áreas de índole administrativo y debilitando las funciones sustantivas.

**g.- LOS NUMERALES IMPUGNADOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 1º Y 2º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2º, 57, 58 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUES NO HUBO UNA DELIBERACIÓN EFECTIVA QUE PUDIERA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS, Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA A TRAVÉS DE LA CONSULTA, POR LO SIGUIENTE:**

En primer lugar, conviene precisar que ese Máximo Tribunal del País ha sostenido que la violación a las formalidades del procedimiento legislativo deben abordarse desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa, elegida como modelo de Estado, de acuerdo con los artículos 39, 40, 41, 116 y 122 de la Constitución Federal, por lo que la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios: por un lado, el de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer de manera innecesaria etapas procedimentales, cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no dar efecto



H. LEGISLATURA

invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto. Por el otro lado, el de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.

Este último principio está estrechamente vinculado con la esencia y valor mismo de la democracia, como sistema de adopción de decisiones públicas en contextos caracterizados por el pluralismo político, como en el caso de México y la mayor parte de las democracias contemporáneas. La democracia representativa es un sistema político valioso, no solamente porque, en su contexto, las decisiones se toman por una mayoría determinada de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías como de las minorías políticas. Es precisamente el peso representativo y la naturaleza de la deliberación pública lo que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo.

En efecto, la adopción de decisiones por mayoría, regla básica que permite resolver, en última instancia, las diferencias de opinión, es una condición necesaria de la democracia, pero no suficiente. No todo sistema que adopta la regla de la mayoría es necesariamente democrático. Junto a la regla de la mayoría, hay que tomar en consideración el valor de la representación política, material y efectiva de los ciudadanos, que tienen todos y cada uno de los grupos políticos con representación parlamentaria, así sean los minoritarios, como dispone el artículo 41 constitucional y el modo en que la aportación de información y puntos de vista por parte de todos los grupos parlamentarios contribuye a la calidad de aquello que finalmente se somete a votación.

Si el simple respeto a las reglas de votación por mayoría pudiera convalidar cualquier desconocimiento de las reglas que rigen el procedimiento legislativo previo, la dimensión deliberativa de la democracia carecería de sentido, precisamente, porque las minorías, por su propia naturaleza, están predestinadas a no imponerse en la votación



## II LEGISLATURA

final, a menos que su opinión coincida con un número suficiente de integrantes de otras fuerzas políticas; por lo tanto, es aquí donde cobran toda su importancia las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías.

Así, en conclusión, el órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante, donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios. Lo anterior es así, porque las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear, en el transcurso de la deliberación pública, aquello que va a ser objeto de la votación final y, por tanto, otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos.

Así, ese Máximo Tribunal del País para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo redundan en violación a las garantías de debido proceso y legalidad, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal ha establecido la importancia de la evaluación del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata es, precisamente, de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final.

Sentado lo anterior, conviene analizar la incorporación de regulación Constitucional que permite dar cauce a las expresiones de los pueblos originarios en la ciudad de México, con el objeto de proteger el derecho de las minorías a influir en las decisiones de la CDMX.

Para ello es importante tener presente que, a partir del reconocimiento del contexto social, histórico y cultural de nuestro país, en las primeras líneas del artículo 2º de la Carta Magna se enuncia el reconocimiento jurídico de la pluriculturalidad que posee el país a través de los pueblos indígenas, mismo que se reconoce de la siguiente manera.

*"La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la*





## II LEGISLATURA

*colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.*

*Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica, y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.*

La constitución, además, reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en el párrafo cuarto del mismo artículo, que los contempla como se cita a continuación:

*El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.*

Así, la autodeterminación debe entenderse como el reconocimiento y disfrute de sus derechos como comunidades o pueblos, entre otros aspectos, a decidir sus formas de organización en el plano social, económico, político y cultural; a la aplicación de sus propios sistemas normativos; a elegir a sus propias autoridades bajo prácticas tradicionales, establecidos en el apartado A, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del citado artículo.

En concordancia con lo anterior, se reconoce la relevancia de los pueblos originarios en el inciso IX del 2º constitucional menciona que, como medida del Estado, se deberá consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del plan nacional de desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Al hacer mención a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, da pauta a que se legisle sobre el tema en dicha unidad político-



II LEGISLATURA

administrativa debido a la obligatoriedad que se tiene respecto al marco constitucional.

Esto último es de suma importancia debido a que en la Ciudad de México existen diferentes grupos que se han denominado a sí mismos y desde los gobiernos locales como pueblos originarios, los cuales se analizarán más adelante.

Es de gran relevancia hacer alusión a lo establecido en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que menciona en las últimas líneas que: "Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley".

Si bien, no hay una presencia mayoritaria de pueblos indígenas dentro de la Ciudad de México, sí existen grupos que pueden ser equiparables a lo mencionado en el artículo 2º constitucional, por lo cual la Constitución Política de la Ciudad de México llevó a cabo la labor de reconocer dentro de su texto a las comunidades originarias que han existido dentro del territorio de la Ciudad de México, a cuyo proceso y contenido en razón de pueblos originarios haremos alusión más adelante.

Así, el 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto en el que se derogaron y reformaron una serie de disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de una Reforma Política de la Ciudad de México. Esta reforma incluyó, entre otros aspectos, que el territorio seguirá siendo el mismo y se conformará como un Estado de la Unión con el nombre de Ciudad de México.

Con ello, se da paso a la elaboración de una constitución política propia de la nueva entidad federativa, la cual fue publicada el 17 de septiembre de 2018 e incluye, una amplia referencia en materia de derechos humanos; perspectiva de género y la mención y reconocimiento de los pueblos originarios como elementos constitutivos de la Ciudad de México.



II LEGISLATURA

En el preámbulo de la Constitución Política de la Ciudad de México se lee que:

*"[La Ciudad de México] Honra su legado y rinde homenaje a todas las comunidades y periodos históricos que le antecedieron, asume un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Ciudad intercultural y hospitalaria. Reconoce la herencia de grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos los continentes".*

En estas primeras líneas del preámbulo se entiende a la ciudad como una construcción histórica, formada a partir de grandes procesos migratorios y de un conglomerado originario que con el paso de los siglos y con sus marcadas diferencias, ha sabido convivir y configurar la ciudad pluricultural que hoy se nos presenta; es un territorio construido a partir de movimientos migratorios por un lado y de un pueblo establecido por el otro.

De igual manera, en el artículo 2º, párrafo primero, de la Constitución Política de la Ciudad de México (en adelante CPCDMX) cuyo título dice "De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad", se reconoce a los pueblos originarios como elementos constitutivos de la misma como se cita a continuación:

*"La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales. Este carácter pluricultural de la ciudad reconoce y define a los pueblos originarios e indígenas en el artículo".*

Asimismo, el artículo 58 distingue entre pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, donde siendo ambos indígenas, se identifican los primeros por descender de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o



II LEGISLATURA

parte de ellas. Mientras que las segundas son una unidad social, económica y cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.

Con fines de aportar mayor claridad respecto al artículo que se menciona, se cita su contenido a continuación:

***“Artículo 58 Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México***

*1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.*

*2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes lo siguiente: a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; y b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.*

*3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en la materia contenidas en ésta Constitución.”*

Respecto al párrafo 2º de este artículo, apartado a y b, en los que se definen a los pueblos originarios e indígenas, es de referir con mayor



II LEGISLATURA

importancia un punto: en las legislaciones citadas con anterioridad, así como las leyes y tratados internacionales que regulan los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, las definiciones de pueblos originarios no aparecen y en todo caso son equiparables con pueblos tribales.

Por tanto, en su búsqueda de la protección más completa de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas a partir del reconocimiento del contexto social, histórico y cultural de México, y en particular tratándose de lo que en su momento fue México-Tenochtitlán, en la CPCDMX se plantea que los pueblos originarios adquieren el carácter que conceptualmente definía a las comunidades y pueblos indígenas, es decir, pueblos que descienden de poblaciones asentadas antes de la colonización y que conservan sus propias instituciones de diferente índole, sin que necesariamente haya un origen de carácter indígena de los pueblos y barrios originarios, el cual se sobreentiende al afirmar la presencia histórica antes de la conquista.

Así, nuestro ordenamiento jurídico, en una interpretación conjunta de la establecido por nuestra Constitución Federal en armonía con los Tratados Internacionales en la materia, y lo establecido en nuestra Constitución Local, reconoce el carácter de destinatario de las normas en materia de derechos de las comunidades indígenas a los Pueblos y Barrios Originarios.

Tal conclusión se robustece por el criterio emitido por el 10º Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa del Primer Circuito, que reconoce de forma expresa el carácter de pueblo indígena de los pueblos originarios de la siguiente manera:

**"PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SON PUEBLOS INDÍGENAS CONFORME AL ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL Y LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, EN TANTO QUE DESCIENDEN DE LAS POBLACIONES QUE HABITABAN EL VALLE DE MÉXICO Y SE AUTOADSCRIBEN DE MANERA COLECTIVA COMO TALES.**

*Los pueblos originarios de la Ciudad de México son pueblos indígenas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2o., segundo.*



## II LEGISLATURA

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1o. del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 24 de enero de 1991, **que coinciden en identificar como pueblos indígenas, entre otros, a aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, cualquiera que sea su situación;** asimismo, ambas normas coinciden en regular que la conciencia de su identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Dichos pueblos descienden de los que habitaban el Valle de México, debitarios de la gran Ciudad de México-Tenochtitlán, y en un proceso de reconstrucción de identidad, se hacen llamar a sí mismos "pueblos originarios", siendo esto una nota adicional de su autoadscripción colectiva como pueblos indígenas y de su lucha que encarna una reivindicación histórica y un reconocimiento y orgullo renovados respecto de sus orígenes, por ello, son titulares de los derechos que les concede el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que nuestro país sea Parte."

Dada la pluriétnicidad de la Ciudad de México, el artículo 22 refiere una noción de originario, al reconocer a estos en términos generales como aquellas que han nacido en su territorio, pero no se define la temporalidad en el mismo; el fin y el grupo que abarca son de otra naturaleza, aunque el problematizarlo de manera breve en este apartado será de mucha ayuda para la hipótesis planteada en esta investigación.

Retomando el tema de los derechos de los pueblos originarios, su contenido y alcance ha quedado establecido en el Capítulo VII que lleva por título Ciudad pluricultural, en el Artículo 59 titulado De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes-de la CPCDMX, los cuales serán solamente enunciado dada la amplia gama de disposiciones que forman parte de este apartado.



II LEGISLATURA

Así, el precepto en comento reconoce su derecho a la libre determinación y autonomía; a la participación política; a la comunicación; una serie de derechos culturales; al desarrollo propio; a la educación; a la salud; derecho de acceso a la justicia; derechos laborales; a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, todos ellos reafirmando las prácticas culturales de los mismos coloquialmente conocidas como usos y costumbres.

El derecho que nos resulta pertinente al estudio del presente asunto es el derecho a la consulta de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México, el cual se encuentra regulado en el artículo 59 de la CPCDMX, el cual por fines de relevancia para el presente asunto se cita lo pertinente a continuación:

*“Artículo 59 De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes*

*A. Carácter jurídico*

*1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.*

*2. El derecho a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, en los términos que establece la presente Constitución.*

*[...]*

*C. Derechos de participación política*

*Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México. Para ello se implementarán las siguientes medidas especiales:*

**1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula.**



## II LEGISLATURA

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen el **derecho a participar en la toma decisiones públicas** a través de su integración en los órganos consultivos y de gobierno; (...)"

A fin de mantenerse una legislación vanguardista en pro de la mayor protección de los derechos de las comunidades indígenas, la CPCMDX amplía el núcleo del derecho a la libre determinación de los pueblos que se materializa a través de consulta a las comunidades indígenas, refiriendo a los beneficiarios del tal derecho más allá de lo establecido por nuestro artículo 2º Constitucional, enunciando de forma expresa a los barrios y pueblos originarios.

Esto es, existe una obligación en términos de lo dispuesto en la constitución de la Ciudad de México, de consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes frente a cualquier modificación legislativa que pueda afectar sus derechos. Es parte del proceso que se debe seguir en torno a modificaciones legislativas, para salvaguardar el derecho de esta minoría.

Tal facultad deriva del principio de progresividad y no regresión respecto del contenido y alcance de los derechos, siendo reconocida expresamente como constitucional por nuestro Tribunal Supremo, como se aprecia de la tesis que se cita a continuación:

**"DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUÉLLA.** El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, **sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o.**





II LEGISLATURA

*de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos<sup>19</sup>.*"

De igual manera, la presente legislación tuvo a bien ampliar el alcance del derecho en análisis respecto de las decisiones que se encuentran sujetas a la obligación de ser consultadas.

En concordancia con lo anterior, el reconocimiento del derecho a la consulta derivado de la pluriétnicidad de la Ciudad de México se encuentra ampliamente contemplado y regulado en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México de la siguiente manera:

*"Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación*

**1. Los poderes públicos adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias, de acuerdo con el grado de desarrollo democrático, social y económico de la Ciudad, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos de los pueblos, barrios y comunidades.**

**2. Los derechos previstos en la presente ley constituyen un catálogo enunciativo no limitativo para la supervivencia, la revitalización, la dignidad y el bienestar de los pueblos, barrios y comunidades. Ninguna disposición se interpretará en el sentido de menoscabar o limitar los derechos de éstos y sus integrantes.**

**3. En la interpretación y aplicación de la presente ley prevalecerá la norma más protectora o la interpretación más extensiva en el reconocimiento de derechos e, inversamente, la norma o la interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones para su ejercicio.**

<sup>19</sup> Segunda Sala. Novena Época. Tesis: 2a. CXXXIX/2002. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 446; TA.



II LEGISLATURA

Artículo 25. Deber de las autoridades para realizar consultas previas, libres e informadas

1. Las autoridades locales tienen la obligación de consultar a los pueblos, barrios y comunidades y, estos tienen el derecho a ser consultados por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles en sus derechos e intereses. Las consultas deberán ser de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables y con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Los acuerdos resultantes de las consultas serán vinculantes, dentro del marco constitucional. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula.

2. Las consultas estarán orientadas a:

a) **Garantizar la participación efectiva de los pueblos, barrios y comunidades en el proceso de adopción de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles;**

b) Salvaguardar los derechos e intereses de los pueblos indígenas en las medidas administrativas o legislativas, y

c) Llegar a acuerdos basados en estándares de derechos humanos, respecto a la medida administrativa o legislativa.

3. Las consultas se regirán por los siguientes principios:

a) De buena fe: implica el establecimiento de un clima de confianza mutua entre las partes y la disposición de llegar a acuerdos vinculantes;

b) De manera previa: **el proceso de consulta debe realizarse antes de la adopción de la medida;**

c) Libre: las autoridades garantizarán el derecho de los pueblos, barrios y comunidades a participar en los procesos de consulta sin que medien actos de presión, violencia, amenaza, manipulación, sujeción, subordinación, coacción, cooptación, desinformación, intimidación, engaño o uso de la fuerza, o cualquier otro sobre los consultados;

d) Informada: las autoridades que realizan la consulta deben proporcionar información completa, veraz, oportuna y de modo culturalmente adecuado, acerca del proceso y de la medida legislativa o administrativa en preparación y de sus implicaciones, impactos o afectaciones para los derechos de los pueblos indígenas, así como de los procesos de consulta;



■ LEGISLATURA

e) *Transparencia:* la información del proceso de consulta será abierta y se publicará en los medios oficiales de las dependencias que realizan los procesos de consulta;

f) *Culturalmente adecuada:* las autoridades consultarán a través de procedimientos culturalmente adecuados y, cuando corresponda, en las lenguas indígenas, teniendo en cuenta los sistemas normativos propios de los pueblos, barrios y comunidades para la toma de decisiones y establecimiento de acuerdos;

g) *Acorde a las circunstancias:* la consulta debe desarrollarse mediante procedimientos y plazos apropiados al tipo de medida que se busca adoptar y tomando en cuenta las circunstancias, necesidades y características especiales de los pueblos, barrios y comunidades involucrados, tales como ubicación geográfica y composición demográfica;

h) *Equidad de condiciones para dialogar y llegar a acuerdos:* los pueblos, barrios y comunidades podrán contar con apoyo de parte de las autoridades, para la capacitación y asistencia técnica para participar en los procesos de consulta en equilibrio de condiciones, a solicitud de los mismos;

**i) Principio pro persona: la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas es el fundamento de la consulta y todo el proceso estará guiado por la protección más amplia a éstos;**

j) *Acuerdos incluyentes:* los acuerdos deben considerar, en su caso, mitigaciones de impactos, gestión o seguimiento conjunto, procedimientos de reclamo adecuados, y

k) *Deber de acomodo:* implica el deber de las autoridades de modificar o, en su caso, hacer ajustes a la medida sometida a consulta para respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. En caso de no alcanzar acuerdos, si la autoridad decide continuar con la medida, debe proporcionar motivos fundados, objetivos razonables y, en su caso, realizar los ajustes a la propuesta original para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, a fin de incorporar acciones de mitigación, compensación y reparación.

#### Artículo 26. Procedencia de la consulta

1. Las medidas administrativas o legislativas deberán ser sometidas a consulta en los siguientes supuestos:

**I. En cumplimiento de las obligaciones de consulta previa indígena establecidas en la Constitución Federal, leyes federales, generales y locales, en los tratados e instrumentos internacionales;**



## II LEGISLATURA

II. Por resolución de la autoridad responsable de la medida administrativa o legislativa;

III. A petición de los pueblos, barrios o comunidades, quienes podrán solicitar el cumplimiento de la obligación de consulta ante una medida susceptible de afectar sus derechos o intereses, previa resolución fundada y motivada emitida por autoridad competente y garantizando el derecho de audiencia de las y los peticionarios, y

IV. Por resolución judicial.

2. Tratándose de la resolución prevista en la fracción III del presente artículo, la autoridad resolverá en un plazo no mayor a 15 días.

3. **Se consultarán los actos susceptibles de afectar sus derechos.** No serán objeto de consulta las medidas en materia fiscal, presupuestal, derechos humanos, penal, protección civil en situaciones de emergencia, seguridad ciudadana y nacional; las facultades expresamente conferidas al gobierno federal; así como los actos de mero trámite ni la estructura orgánica y de funcionamiento de los poderes públicos. Ningún proceso de consulta podrá desarrollarse con el objetivo de menoscabar los derechos humanos.

Artículo 29. **Requisito de consentimiento previo libre e informado** **Se requerirá el consentimiento previo, libre e informado de los sujetos de consulta en el caso de medidas que implican afectaciones graves de derechos de los pueblos indígenas** o que ponen en riesgo la supervivencia de un pueblo, barrio o comunidad, previstas en las hipótesis identificadas en el Derecho Internacional, la Constitución Federal y local así como la presente Ley.”

Según los artículos previamente citados, la Ley que se enuncia tiene por objeto reconocer, proteger, promover y garantizar de la manera más amplia, en concordancia con el principio pro persona, los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes, lo cual se logra a través de la consulta tanto a los pueblos y barrios originarios, como a las comunidades indígenas, estableciendo supuestos de procedencia de consulta mucho más amplios, entre los cuales se encuentra el caso pertinente al asunto en estudio en el presente escrito inicial.



II LEGISLATURA

Bajo la misma línea de pensamiento, el derecho a la libre determinación de los barrios y pueblos originarios y las comunidades indígenas también se ve reflejado a partir del ejercicio de la democracia respecto a las decisiones pertinentes a la Ciudad de México, el cual se realiza a partir de la participación ciudadana a la que tienen derecho, conforme a lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la cual establece el uso de Mecanismos de Democracia Directa e Indirecta.

La Democracia directa, que conforme al artículo 16 de la ley en comento debe entenderse como “[...] *aquella por la que la ciudadanía puede pronunciarse, mediante determinados mecanismos en la formulación de las decisiones del poder público*” se materializa a través de instrumentos de democracia participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública, una de ellas y la más relevante para las comunidades originarias e indígenas, la Consulta Popular.

El artículo 53 de la ley en análisis refiere que “la Consulta Popular es el mecanismo a través del cual el Congreso somete a consideración de la ciudadanía en general, por medio de preguntas directas, cualquier tema que tenga impacto trascendental en todo el territorio de la Ciudad.”

Se entiende que nos encontramos ante un tema de trascendencia en el territorio de la Ciudad cuando repercute en la mayor parte de las demarcaciones territoriales; y que impacte en una parte y de manera significativa de la población de la Ciudad, conforme a lo establecido por el artículo 54 de la ley referida.

Ante el supuesto previamente establecido, el siguiente artículo de la ley establece que el Congreso deberá convocar a consulta tales temas a petición de los siguientes sujetos:

- I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;*
- II. Una tercera parte de los integrantes del Congreso;*
- III. Una tercera parte de las Alcaldías;*
- IV. Al menos dos por ciento de las personas ciudadanas inscritas en la Lista Nominal de Electores;*
- V. El equivalente al diez por ciento de las Asambleas Ciudadanas; y*



II LEGISLATURA

***VI. El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes."***

Por tanto, la consulta popular es de gran relevancia para garantizar el ejercicio de la democracia directa tratándose de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas.

Por otro lado, otra forma de participación ciudadana que tienen los sujetos a que se refiere el presente apartado es la democracia participativa, la cual se materializa en el caso concreto a través del presupuesto participativo de la siguiente manera:

***"Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales. Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.***

**Artículo 117.** El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

[...]



II LEGISLATURA

**Artículo 118. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de las demarcaciones territoriales conforme a lo siguiente:**

**I. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las colonias, pueblos y barrios de la Ciudad.**

**[...]"**

Así, la legislación local actual busca fomentar la inclusión de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas, en protección al derecho de libre determinación y autonomía, a través de sus distintas modalidades ya enunciadas, con la finalidad de respetar y garantizar su participación dentro de las decisiones más relevantes de nuestra ciudad.

En ambos casos que se mencionan, la autoridad encargada de los procesos de participación ciudadana enunciados será el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual deberá actuar en la mejor de sus aptitudes y capacidades para asegurar la protección de los derechos de participación ciudadana con los que cuentan los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los últimos párrafos del artículo 10 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que refiere lo siguiente:

**"En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana, consulta sobre presupuesto participativo y revocación de mandato, así como en la elección de las y los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia.**

**Este Código reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los**



H. LEGISLATURA

*términos de la Constitución Federal los tratados internacionales y la Constitución Local.”*

El Código en estudio hace especial énfasis en la relevancia de los procedimientos y mecanismos de protección ciudadana tratándose de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas en su artículo 362, tal como se observa a continuación:

*“Artículo 362. Son procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, el referéndum, la consulta ciudadana, la consulta popular, la revocación de mandato, así como los procesos electivos de los Órganos de Representación Ciudadana, conforme a la Ley de Participación. **El Instituto Electoral tiene a su cargo la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados, de los procedimientos electivos y de los mecanismos de participación ciudadana.** El Instituto garantizará la democracia participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que la Ley de Participación y este Código señalen.*

*Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes tienen derecho a ser consultadas en los términos de que establece la Constitución Local y los tratados internacionales. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la Ley de Participación. La Ley de Participación, establecerá las reglas para la preparación, recepción y cómputo de la votación, de los mecanismos de participación ciudadana, a falta de éstas, se aplicarán las normas que el Consejo General del Instituto Electoral determine. El Instituto Electoral, a través de su Consejo General, podrá acordar, en las consultas que organice, mecanismos electrónicos e informáticos que faciliten la participación ciudadana cuidando la transparencia y la seguridad de su instrumentación.”*





## II LEGISLATURA

Por tanto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el encargado de garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas respecto al su libre determinación y autonomía en la Ciudad de México, razón por la cual es indispensable la protección de su adecuado funcionamiento.

En particular, los procesos de participación ciudadana, si bien algunos se llevan a cabo en colaboración del Congreso Local, su supervisión y vigilancia se rigen por las acciones realizadas por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Consejo General Instituto Electoral de la Ciudad de México, misma que cuenta con las siguientes facultades:

*"Artículo 61. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación:*

*I. Supervisar los procesos electivos de los Órganos de Representación Ciudadana, y proponer, de ser el caso, al Consejo General la documentación y materiales correspondientes que formule la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, así como los relativos a la organización de los mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;*

*II. Emitir opinión respecto al proyecto de dictamen relativo al marco geográfico para la organización y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana;*

*III. Supervisar y opinar sobre los contenidos, materiales e instructivos de capacitación, correspondientes a los mecanismos de participación ciudadana; así como sobre los instructivos y el material didáctico electoral con el fin de contribuir a la capacitación electoral, bajo los criterios o lineamientos que para tal efecto emita el Instituto Nacional.*

*IV. Orientar los procesos y aprobar los mecanismos e instrumentos de evaluación de las actividades de los Órganos de Representación Ciudadana, el Programa de evaluación del desempeño, así como validar los informes que se someterán a la consideración del Consejo General, para su posterior remisión al Congreso de la Ciudad de México;*

*V. Proponer al Consejo General los programas de capacitación en materia de participación ciudadana, así como el contenido y las*



## II LEGISLATURA

modificaciones de los planes de estudio, materiales, manuales e instructivos de educación, capacitación, asesoría y comunicación de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas, y ciudadanía en general, elaborados por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, y supervisar su debido cumplimiento;

VI. Promover medidas de mejora en el funcionamiento y capacidad de actuación de los mecanismos de participación ciudadana;

VII. Revisar el expediente y presentar a la consideración del Consejo General, el proyecto de dictamen de las solicitudes de registro de los ciudadanos que pretenden constituirse como Organizaciones Ciudadanas;

VIII. Proponer a la Presidencia del Consejo la celebración de convenios de apoyo y colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías en materia de promoción de la participación ciudadana, capacitación y logística de los Consejos Ciudadanos;

IX. Opinar respecto del contenido e imagen de campañas informativas, formativas y de difusión en materia de participación ciudadana;

X. Proponer a la Presidencia del Consejo la celebración de convenios de apoyo y colaboración con instituciones públicas de educación superior, organizaciones académicas y de la sociedad civil, en materia de participación ciudadana; y

XI. Aprobar el proyecto de convocatoria, que deba emitir el Instituto Electoral con motivo del desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, elaborados por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación;

XII. Emitir opinión respecto de los materiales y documentación relacionados con la capacitación de los mecanismos de participación ciudadana y procesos electivos;

XIII. Supervisar el cumplimiento de las actividades de capacitación durante los procesos electorales, cuando se le delegue esta función al Instituto Electoral, en términos de la Ley General, la normativa que emita el Instituto Nacional y los acuerdos que apruebe el Consejo General del Instituto Electoral; y

XIV. Las demás que, sin estar encomendadas a otra Comisión, se desprendan de la Ley de Participación."



## II LEGISLATURA

De la misma manera, el Consejo cuenta con comités permanentes, entre los cuales hay facultades encaminadas a proteger los derechos de los pueblos originarios, como lo son el Comité de Educación Cívica, como se refiere en el artículo que se cita a continuación:

*"Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía:*

*(...)*

*VI. Revisar, observar y aprobar las actividades formativas, talleres y cursos en las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad que faciliten a sus habitantes la adquisición, apropiación y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia, y difundan información sobre el derecho y el deber de las y los ciudadanos de participar en la resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por la Constitución Local y la ley de la Materia, contemplando para este fin el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación; (...)"*

También vale la pena mencionar que entre las facultades del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México está la aprobación de los informes anuales respecto al desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los pueblos y barrios originarios, contemplado en el artículo 50 fracción XXXVI de la siguiente manera:

*"Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:*

*XXXVI. Aprobar los informes anuales sobre la evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y barrios originarios, y ordenar su remisión al Congreso de la Ciudad de México y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo previsto en la normatividad de la materia;*

*[...]"*

Como se observa de los preceptos que fueron citados con anterioridad, el Consejo General del IECM tiene diversas funciones encaminadas a proteger el ejercicio de la participación ciudadana para los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas. Por tanto, es válido afirmar



## II LEGISLATURA

que el Consejo General tiene un papel crucial en la protección de los derechos de los pueblos originarios, así como en la vigilancia de su funcionamiento adecuado.

Por lo anterior, una reestructuración tan importante como la que se ha llevado a cabo a partir de la reforma en comento, debió haber sido consultada con los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, por generarse una afectación material en el cumplimiento de las facultades encomendadas al consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, no fue así.

Como se mencionó en apartados anteriores, el 17 de febrero de 2022 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reformaban diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el cual fue presentado por el Diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

Tal iniciativa representaba para el Instituto Electoral de la Ciudad de México un desequilibrio y desestabilización, pues tenía como propósito, entre otras modificaciones, eliminar 5 áreas especializadas del IECM, así como eliminar la capacidad del Consejo General de crear órganos técnicos de especialización.

Como tuvo a bien mencionarse con anterioridad en el apartado de Antecedentes del presente escrito inicial, el Congreso de la Ciudad de México decidió aprobar la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en cuestión, y fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 2 de junio de 2022, eliminando el área de Derechos Humanos y Género, perdiendo la especialización de la cual contaba la Comisión para crear la Comisión de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, así como la fusión y completa eliminación del varios comisiones permanentes del Consejo General, decisión que fue tomada por el Congreso Local más de tres meses y medio después de haber sido presentada inicialmente la iniciativa sin realizar ninguna consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.



II LEGISLATURA

Como consecuencia de la reforma, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México sufrió una merma considerable en su funcionamiento, pues al perderse la especialidad dentro de las áreas eliminadas vulnera la calidad de actuación del Consejo General.

**La merma antes mencionada a la actuación del Consejo General afecta todas las áreas en las cuales se divide**, entre las cuales se incluyen la Comisión Permanente de Participación Ciudadana que es determinante para el efectivo ejercicio de la participación ciudadana por parte de los pueblos originarios.

Como ya se mencionó al principio del presente apartado, el artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para participar efectivamente en los procesos de deliberación y toma de decisiones en aquellos casos en los cuales la legislación incide en sus derechos.

Por tanto, la reforma al código presenta una afectación considerable en los derechos de los pueblos originarios, tanto en la protección de la capacidad de ejercitar la participación ciudadana en aras de tener la posibilidad de participar en las decisiones relevantes de la Ciudad de México, como en su derecho a la consulta, deviniendo en una omisión de garantizar el acceso efectivo de los integrantes de estos pueblos, barrios y comunidades.

Para ello, no basta prever un deber de procurar; sino que es preciso establecer acciones encaminadas a asegurar que tales procesos se lleven a cabo de forma adecuada a través de la vigilancia de la actuación del Congreso Local; esto es, respetando el derecho de dicha minoría a participar en el proceso legislativo a través de la Consulta prevista en el artículo 59, transcrito en párrafos precedentes.

En definitiva, la reforma al Código impugnado implica una medida regresiva para los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y una violación directa al artículo 59 de la Constitución de la Cdmx, tanto en su fondo como en su forma, al impedir el pleno ejercicio de los mecanismos específicamente creados con la finalidad de garantizar la posibilidad de formar parte de las decisiones de



II LEGISLATURA

nuestro país, en particular de la Ciudad de México, cuyo valor histórico, social y cultural es trascendental.

### SUSPENSIÓN

Se solicita a sus Señorías el otorgamiento de la suspensión para que los efectos y consecuencias de las normas cuya invalidez se demanda no puedan parar perjuicio en los diversos ámbitos y sujetos regulados. Esto, bajo la consideración de que la vigencia plena de las normas impugnadas conllevaría consecuencias materiales perniciosas de muy difícil o inclusive imposible reparación.

A modo más concreto, se solicita la suspensión a efecto de que:

- El Consejo General se abstenga de adecuar su estructura orgánica y funcional, y continúe realizando sus actividades conforme a las funciones, atribuciones y estructura previstas en el marco legal, previo a la reforma reclamada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
- No se realice ningún movimiento a la estructura orgánica y funcional del instituto que pueda afectar derechos laborales de las personas que integran la plantilla de las áreas afectadas<sup>20</sup>.

Lo anterior, hasta en tanto este Tribunal Pleno se pronuncie en definitiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Ahora bien, el artículo 64 de la Ley Reglamentaria establece que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada, en el caso no se solicita la suspensión de la norma, sino de sus efectos y consecuencias, que se traducirán en actos concretos por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

<sup>20</sup>Artículo Cuarto Transitorio del Decreto que reforma el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y dentro de un marco de derechos humanos, el Consejo General contará con un plazo de 91 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública.



H. LEGISLATURA

Para efectos del análisis de la suspensión que aquí se solicita, en primer lugar resulta oportuno precisar que el artículo 1o. Constitucional establece lo siguiente:

*“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.*

*Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.*

Del numeral transcrito se desprende que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y que todas las



H LEGISLATURA

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este sentido, considerando lo dispuesto en el artículo 1º Constitucional, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las Reclamaciones 32/2016, 91/2018, 92/2018 y 95/2018 interpretó el artículo 64, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria en el sentido de que sí es procedente conceder la suspensión en caso de que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano, y que, por tanto, la prohibición prevista en el artículo 14 de la Ley Reglamentaria no es irrestricta ni indiscriminada.

Ello, en la medida en la que podían existir casos en los que era latente que la aplicación de la norma secundaria podía conducir a la vulneración clara de un derecho humano. Por tanto, la interpretación más favorable del último párrafo del artículo 14 de la Ley Reglamentaria —conforme al propio texto constitucional— llevaba a sostener como excepción a la operatividad de dicha prohibición, que cuando la controversia se plantee sobre normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión de un derecho humano, sí era factible conceder la suspensión.

Esto es, en concordancia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, según lo señalado por la SCJN, es viable que únicamente cuando se controviertan normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión definitiva de derechos fundamentales, resulte procedente conceder la suspensión solicitada.

En ese mismo sentido, en el recurso de reclamación 91/2018, derivado de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, el Máximo Tribunal otorgó la suspensión al considerar que el juicio podría quedar sin materia, por lo cual concedió la suspensión para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de dos mil diecinueve, no sean fijadas en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia.





II LEGISLATURA

Así, la Corte ya ha reconocido en la medida suspensiva en controversia y en acción de inconstitucionalidad no solamente un carácter cautelar sino también uno tutelar para prevenir un daño trascendente que se pueda ocasionar no solo a las partes sino también a la sociedad en general.<sup>21</sup>

Habiendo precisado lo anterior, a continuación, se expone porqué en el caso resulta procedente se otorgue la suspensión.

Para ello, en primer lugar resulta oportuno precisar que, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha precisado, en primer lugar, que tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente; y, en segundo lugar, que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general, en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia P./J. 27/2008 de rubro "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES".

En ese sentido, la suspensión en el caso resulta procedente pues es necesario preservar la materia del juicio, toda vez que, de continuarse con la adecuación de estructura orgánica y funcional del IECM se pondrían en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano y se afectaría gravemente los derechos de los servidores públicos y de manera correlativa a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que podría llevar la vigencia de la norma.

Además, el peligro en la demora en un asunto como el presente, conlleva:

- a. La posible frustración de los derechos de los sujetos de las normas impugnadas, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.

<sup>21</sup> Esto, desde luego, encuentra base en el siguiente precedente seminal: SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES. Localización: [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Marzo de 2008; Pág. 1472. P./J. 27/2008.



H. LEGISLATURA

- b. La convalidación de flagrantes violaciones de principios constitucionales de primer orden, como los de división de poderes, la autonomía institucional, entre otros.
- c. La transgresión en la autonomía de los poderes.
- d. La pérdida en capital humano altamente calificado derivado de un cambio en la estructura funcional y, por consecuencia, la afectación a las condiciones laborales.

Así, en caso de negar la medida cautelar conllevaría que la violación quedara consumada de manera irreparable.

Adicionalmente, la suspensión resulta procedente al estar frente a un acto que incide en las precondiciones de autonomía del órgano constitucional autónomo, como lo es su operación orgánica y funcional, pues dicha garantía resulta necesaria para alejar al IECM de las presiones que ejercen otros poderes y así contar con las condiciones para una autonomía genuina de los órganos que ejercen competencias especializadas.

Así, en el caso, al tratarse de un órgano constitucional autónomo, debe estimarse que existe una presunción constitucional en favor del otorgamiento de la suspensión, pues la estabilidad laboral del personal especializado conforma una salvaguarda esencial del IECM para ponerlo a salvo de las presiones de los poderes públicos, de los cuales los artículos 116 y 122 los pretendió aislar.

Como consecuencia de lo anterior, la Ministra o Ministro Instructor está en aptitud de analizar los citados elementos, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional de los derechos y principios en pugna. Esto, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si las normas impugnadas y sus efectos son o no constitucionales.

Lo anterior en virtud de que, como se expuso en los conceptos de invalidez, las normas impugnadas ponen en riesgo diversos mandatos constitucionales.



II LEGISLATURA

Se insiste, en la especie, de no concederse la medida cautelar solicitada, se pondrían en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano y se afectarían gravemente derechos de los servidores públicos especializados y de manera correlativa a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que podría llevar la vigencia de la norma.

Por lo tanto, con el fin de evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de:

- Para que el Consejo General se abstenga de adecuar su estructura orgánica y funcional, y continúe realizando sus actividades conforme a las funciones, atribuciones y estructura previstas en el marco legal, previo a la reforma reclamada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
- No se realice ningún movimiento a la estructura orgánica y funcional del instituto que pueda afectar derechos laborales de las personas que integran la plantilla de las áreas afectadas.

Lo anterior, hasta en tanto este Tribunal Pleno se pronuncie en definitiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Cabe destacar que, con este pronunciamiento no se pone en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudieran obtener los promoventes de la acción; por el contrario, de no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales, la división de poderes, la autonomía institucional y los principios democráticos que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles, para la propia esencia constitucional del estado democrático.

#### **X.- PRUEBAS**

A efecto de acreditar los conceptos de invalidez y las violaciones de procedimiento aquí esgrimidas, se ofrecen las siguientes probanzas:



H. LEGISLATURA

1. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO



II LEGISLATURA

DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109; TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en fecha 2 de junio de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Dicha prueba ha sido marcada como **ANEXO 1**.

2. **DOCUMENTAL.** Consistente en copia certificada del acuse original de la solicitud del retiro del dictamen impugnado ante el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México. Dicha prueba ha sido marcada como **ANEXO 2**.

Esta prueba se relaciona con el numeral 13 del capítulo de hechos, así como con el inciso a. de los conceptos de invalidez.

Con dicha prueba, se pretende acreditar el hecho de que dos legisladores, solicitaron en estricto apego al Reglamento, el retiro del dictamen en comento. Situación que fue ignorada por el Presidente de la Mesa Directiva y una evidente violación al proceso legislativo.

3. **DOCUMENTAL.** Consistente en copia certificada de la versión estenográfica de la sesión constitutiva de instalación, celebrada el día 1 de septiembre de 2021. Dicha prueba ha sido marcada como **ANEXO 3**.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados en el presente escrito.

Con esta prueba se pretende probar la personalidad y el interés legítimo de los actores.

4. **DOCUMENTAL.** Consistente en copia certificada del acta de la sesión constitutiva de instalación del Primer Periodo de sesiones ordinarias del Primer Año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 1 de septiembre de 2021. Dicha prueba ha sido marcada como **ANEXO 4**.



## II LEGISLATURA

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados en el presente escrito.

Con esta prueba se pretende probar la personalidad y el interés legítimo de los actores.

5. **DOCUMENTAL.** Consistente en copia del acta de apertura del Primer Periodo de sesiones ordinarias, del Primer Año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 1 de septiembre de 2021. Dicha prueba ha sido marcada como **ANEXO 5**.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados en el presente escrito.

Con esta prueba se pretende probar la personalidad y el interés legítimo de los actores.

6. **DOCUMENTAL.** Consistente en copia certificada de la versión estenográfica de la sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, del Primer año de Ejercicio, la de II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, del día 26 de mayo de 2022, la cual se extendió hasta el día 27 del mismo mes y año. Dicha prueba ha sido marcada como **ANEXO 6**.

Esta prueba se relaciona con el numeral 13 del capítulo de hechos, así como con el inciso a, de los conceptos de invalidez.

Con dicha prueba, se pretende acreditar el hecho de que dos legisladores, solicitaron en estricto apego al Reglamento, el retiro del dictamen en comento. Situación que fue ignorada por el Presidente de la Mesa Directiva y una evidente violación al proceso legislativo.

7. **INSPECCIÓN TÉCNICA.** Consistente en la solicitud de que personal capacitado y adscrito a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga a bien verificar el correo oficial del Diputado Ricardo Rubio Torres.



H. LEGISLATURA

Esta prueba se relaciona con el numeral 7 del capítulo de hechos, así como con el primer concepto de invalidez.

Con dicha prueba, se pretende acreditar el hecho de que hubo violaciones al procedimiento legislativo, dada la extraordinariedad de sesión que no acreditó la Comisión de Asuntos Político Electorales.

8. **PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.** Consistente en todos aquellos razonamientos lógico-jurídicos que puedan desprenderse en el presente asunto en tanto benefician a los intereses de las y los capitalinos.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los conceptos de invalidez expresados en el presente escrito.

9. **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** Consistente en todas y cada una de las actuaciones que obren en el presente asunto en tanto benefician a los intereses de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y conceptos de invalidez expresados en el presente escrito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a Ustedes H. MINISTROS INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, respetuosa y atentamente, solicito:

**PRIMERO.** Tenernos por presentados en los términos de esta demanda de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

**SEGUNDO.** Admitir a trámite la presente demanda de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

**TERCERO.** Tener por designados como delegados y autorizados, a los ciudadanos indicados al inicio de este escrito, así como por sentado el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, así como los autorizados puedan tomar registro fotográfico que se generen en la acción.



II LEGISLATURA

**CUARTO.** Una vez agotado el procedimiento señalado por la ley, se declare la inconstitucionalidad aunado a la invalidez de las normas jurídicas por resultar contradictorias de los derechos y principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**QUINTO:** En el momento procesal oportuno, declarar fundados los conceptos de invalidez y la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas impugnadas.

Ciudad de México, a 30 de junio de 2022.

**ATENTAMENTE**

**LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS**





DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA II LEGISLATURA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FIRMAS DE LAS Y LOS DIPUTADOS QUE SUSCRIBEN LA ACCIÓN DE  
INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS  
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE  
FECHA 02 DE JUNIO DE 2022.

Diego Orlando Garrido López

(NOMBRE Y FIRMA)

Polimnia Romana Sierra Bárcena

(NOMBRE Y FIRMA)

Daniela Cicela Álvarez Camacho

(NOMBRE Y FIRMA)

Luisa Adriana Quiroz Viera

(NOMBRE Y FIRMA)

Luis Alberto Chávez García

(NOMBRE Y FIRMA)

Jorge Gavino Ambros

(NOMBRE Y FIRMA)

Royfid Torres González

(NOMBRE Y FIRMA)

Victor Hugo Lobo Reyes

(NOMBRE Y FIRMA)

Gabriela Quiroga Quiroga

(NOMBRE Y FIRMA)


Tania Nouette Low Pérez


(NOMBRE Y FIRMA)

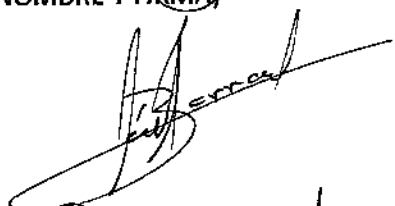


DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA II LEGISLATURA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


FIRMAS DE LAS Y LOS DIPUTADOS QUE SUSCRIBEN LA ACCIÓN DE  
INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS  
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE  
FECHA 02 DE JUNIO DE 2022.

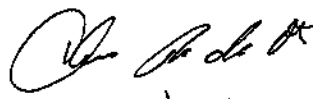
  
América Alejandra Pangello Lorenzana  
(NOMBRE Y FIRMA)

  
Ma. Gabriela Suedo  
(NOMBRE Y FIRMA)

  
Héctor Barrera Marmolejo  
(NOMBRE Y FIRMA)

  
Christian von Roehrich  
(NOMBRE Y FIRMA)

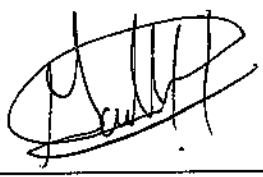
  
Paul de Jesús Torres Guerrero  
(NOMBRE Y FIRMA)

  
Claudio Montes de Oca  
(NOMBRE Y FIRMA)

  
Ana Jocelyn Aguilar Villanueva  
(NOMBRE Y FIRMA)

  
Anibal A. González  
(NOMBRE Y FIRMA)

  
Roberto Pérez López  
(NOMBRE Y FIRMA)

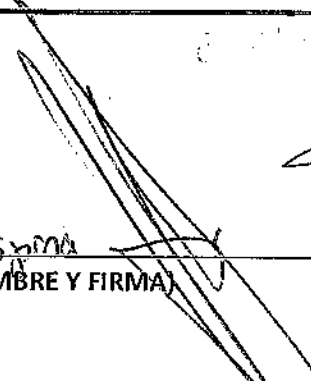
  
Ericka Jimena Guillén  
(NOMBRE Y FIRMA)

Ericka Jimena Guillén  
O.A.B.



DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA II LEGISLATURA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FIRMAS DE LAS Y LOS DIPUTADOS QUE SUSCRIBEN LA ACCIÓN DE  
INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS  
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE  
FECHA 02 DE JUNIO DE 2022.

  
Dip. Omar Gómez  
(NOMBRE Y FIRMA)

  
Ricardo Rubio Torres  
(NOMBRE Y FIRMA)

  
Monatan Colmenares Renteria  
(NOMBRE Y FIRMA)

(NOMBRE Y FIRMA)

  
F. M. Zamora E.  
(NOMBRE Y FIRMA)

(NOMBRE Y FIRMA)

(NOMBRE Y FIRMA)

(NOMBRE Y FIRMA)

(NOMBRE Y FIRMA)

(NOMBRE Y FIRMA)

011503

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION

2022 JUN 30 AM 10 55

OFICINA DE CERTIFICACION  
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido mediante buzón judicial en (211) Folios  
con:

- Copia certificada Relativa de acreditación en (2) Folios  
según su certificación
- Copia simple de gaceta oficial de la ciudad de  
México del 2 de junio de 2022 en (12) Folios
- Copia certificada Relativa del Acta de dictamen en  
sentido Positivo de iniciación con proyecto de decreto  
en (2) Folios según su certificación
- Copia certificada de acta de sesión en (16) Folios  
según su certificación
- Copia certificada de acta de instalación en (2) Folios  
según su certificación
- Un anexo en copia certificada en (608) Folios según  
su certificación relativo a acta de sesión
- Así como una copia de facultado

VICENTE JUAN RUIZ BARRERAS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN

## CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Acción de Inconstitucionalidad.

NOMBRE DEL PROMOVENTE: Christian Damián

Non Roehrich de la Iska y otros

NÚMERO DE COPIAS: 1 (Una)

NÚMERO DE ANEXOS: 6 (Seis)

FOLIO: 27458

598558a029f76ab53f42ecc6c0ce110c77bb2b6647960b56df8f8ced816dca6a

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

598558a029f76ab53f42ecc6c0ce110c77bb2b6647960b56df8f8ced816dca6a